CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSÉ LABORDA MARTÍN

Sesión del Pleno

celebrada el miércoles, 18 de octubre de 1995

ORDEN DEL DÍA:

Conocimiento directo por el Pleno de proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

- Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 3.020.942.990 pesetas, para compensar el déficit de la Compañía Trasmediterránea, S. A., correspondiente al ejercicio de 1993, por la explotación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 89, de fecha 21 de septiembre de 1995). (Número de expediente S. 621/000089.) (Número de expediente C. D. 121/000101.)

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

- De la Comisión de Justicia en relación con la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado. PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-B, número 26, de fecha 13 de octubre de 1995). (Número de expediente S. 624/000013.) (Número de expediente C. D. 122/000112.)
- De la Comisión de Educación y Cultura en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes. PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 90, de fecha 16 de octubre de 1995). (Número de expediente S. 621/000090.) (Número de expediente C. D. 121/000092.)
- De la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en relación con el Proyecto de ley de declaración del Parque Nacional de Cabañeros. PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 91, de fecha 16 de octubre de 1995). (Número de expediente S. 621/000091.) (Número de expediente C. D. 121/000099.)

- De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 92, de fecha 13 de octubre de 1995). (Número de expediente S. 621/000092.) (Número de expediente C. D. 121/000103.)
- De la Comisión de Interior y Función Pública en relación con el Proyecto de ley sobre la creación de un fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados. PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 93, de fecha 6 de octubre de 1995). (Número de expediente S. 621/000093.) (Número de expediente C. D. 121/000102.)
- De la Comisión Constitucional en relación con la Proposición de ley de organización del Centro de Investigaciones Sociológicas (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-A, número 7, de fecha 2 de octubre de 1995). (Número de expediente S. 622/000005.) (Número de expediente C. D. 124/000002.)

Conocimiento por el Pleno de Tratados y Convenios Internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados:

- Acuerdo entre España y Rumanía para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, hecho en Bucarest el 25 de enero de 1995 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 155, de fecha 20 de septiembre de 1995). (Número de expediente S. 610/000155.) (Número de expediente C. D. 110/000156.)
- Acuerdo sobre protección de información clasificada entre el Reino de España y el Estado de Israel, hecho en Madrid el 13 de febrero de 1995 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 156, de fecha 20 de septiembre de 1995). (Número de expediente S. 610/000156.) (Número de expediente C. D. 110/000157.)
- Protocolo relativo a las consecuencias de la entrada en vigor del Convenio de Dublín sobre ciertas disposiciones del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen, hecho en Bonn el 26 de abril de 1994 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 157, de fecha 20 de septiembre de 1995). (Número de expediente S. 610/000157.) (Número de expediente C. D. 110/000158.)

Petición de creación de Comisiones de Investigación:

- Petición de creación de una Comisión de Investigación para determinar las responsabilidades políticas que resulten de la creación, actuación, financiación y encubrimiento de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), sin perjuicio de la actuación independiente de los Tribunales de Justicia (primer firmante: D. Ángel Jesús Acebes Pania-gua) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 329, de fecha 16 de octubre de 1995). (Número de expediente 650/000005.)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las diez horas y diez minutos.

CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS	Página 4632
---	----------------

Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 3.020.942.990 pesetas, para compensar el déficit de la Compañía Trasmediterránea, S. A., correspondiente al ejercicio de 1993, por la explotación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional	Página 4632
--	----------------

No habiéndose producido turnos a favor ni en contra, en el de portavoces hacen uso de la palabra los señores Garcías

Coll, por el Grupo Socialista, y Font Barceló, por el Grupo Popular.

Se aprueba el proyecto de ley por asentimiento de la Cámara.

El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS	Página 4634
---	----------------

De la Comisión de Justicia en relación con la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado. PROCEDIMIENTO DE URGENCIA	Página 4634
---	----------------

El señor Herrero Merediz, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.

No se hace uso de los turnos a favor ni en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Zubía Atxaerandio, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Vallvé i Navarro, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Arévalo Santiago, por el Grupo Socialista, así como la señora Vindel López, por el Grupo Popular.

En señor Vicepresidente, Rigol i Roig, da cuenta a la Cámara de dos modificaciones al texto de la Proposición de ley, aceptadas por todos los Grupos Parlamentarios, y relativas a un apartado 15 bis nuevo y al artículo 2.º, apartado 5.

Se aprueba la Proposición de ley con las modificaciones introducidas, por 127 votos a favor, 1 en contra y 113 abstenciones.

El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.

	Página
De la Comisión de Educación y Cultura en relación con el Proyecto de ley Orgánica de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes. PROCEDIMIENTO DE URGENCIA	4636

El señor Iglesias Marcelo presenta el dictamen.

Se abre debate de totalidad.

El señor Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto número 1. El señor Fernández Rozada defiende la propuesta de veto número 2, del Grupo Popular. El señor Iglesias Marcelo consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Nieto Cicuéndez, por el Grupo Mixto; Ríos Pérez, por el Grupo de Coalición Canaria; Zubía Atxaerandio, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Vallvé i Navarro, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Iglesias Marcelo, por el Grupo Socialista, y Fernández Rozada, por el Grupo Popular.

Se procede a votar.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, del Grupo Mixto, por 120 votos a favor, 128 en contra y 1 abstención.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, del Grupo Popular, por 119 votos a favor, 129 en contra y 1 abstención.

Comienza el debate del articulado. La señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 126 a 129, 131 a 152 y 155 a 167. El señor Nieto Ci-

cuéndez, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 1 a 84. El señor Ríos Pérez defiende las enmiendas números 96 a 122, del Grupo de Coalición Canaria. El señor González Caviedes defiende las enmiendas números 168, 169, 171 a 179, 181 a 194, 196 a 236 y 238 a 243, del Grupo Popular. Los señores Herranz Martínez e Iglesias Marcelo consumen un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora De Boneta y Piedra, por el Grupo Mixto, y los señores Ríos Pérez, por el Grupo de Coalición Canaria; Herranz Martínez, por el Grupo Socialista, y Fernández Rozada, por el Grupo Popular.

Se procede a votar.

Se aprueban las enmiendas números 132, 139, 144, 149, 152, 163 y 166, de la señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, por 127 votos a favor, 125 en contra y 1 abstención.

Se rechazan las enmiendas números 150, 156, 157, 158, 159, 161 y 162, de la señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, por 9 votos a favor, 126 en contra y 118 abstenciones.

Se rechazan las restantes enmiendas de la señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, por 9 votos a favor, 237 en contra y 6 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 22, 23, 25, 33, 65, 69, 72 y 83, de los señores Martínez Sevilla y Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, por 117 votos a favor, 127 en contra y 10 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 1, 35, 36, 68, 73, 74 y 84, de los mencionados señores Senadores, por 3 votos a favor, 126 en contra y 125 abstenciones.

Se rechazan las restantes enmiendas de los señores enmendantes previamente citados, excepto la número 2, que sostiene una enmienda transaccional, por 3 votos a favor, 238 en contra y 12 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 104, 105, 121 y 122, del Grupo de Coalición Canaria, por 122 votos a favor, 125 en contra y 6 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 100, del Grupo de Coalición Canaria, por 8 votos a favor, 128 en contra y 118 abstenciones.

Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo de Coalición Canaria, por 9 votos a favor, 238 en contra y 7 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 182, del Grupo Popular, por 121 votos a favor, 124 en contra y 7 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 168, 169, 170, 172, 173, 181, 183, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200,

201, 202, 207, 208 y 209, del Grupo Popular, por 121 votos a favor, 126 en contra y 6 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 174, 177, 178, 184, 185, 210, 214, 215, 216, 230, 235, 239, 240, 241 y 242, del Grupo Popular, por 114 votos a favor, 126 en contra y 13 abstenciones.

Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Popular, por 118 votos a favor, 128 en contra y 7 abstenciones.

Se aprueba una enmienda transaccional al artículo 2.2, suscrita por todos los Grupos Parlamentarios a excepción del Grupo Popular, por 140 votos a favor, 1 en contra y 113 abstenciones.

Se aprueba el texto del dictamen, con las modificaciones introducidas, por 132 votos a favor, 116 en contra y 6 abstenciones.

El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.

Se suspende la sesión a las catorce horas y quince minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis hora y diez minutos.

Página

De la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en relación con el Proyecto de ley de declaración del Parque Nacional de Cabañeros. PROCEDIMIENTO DE URGENCIA..... 4662

El señor Galán Cano, presidente de la Comisión, comunica a la Cámara que ha sido designado para presentar el dictamen el señor López Carrasco, quien así lo hace a continuación.

No se produce debate de totalidad.

Los señores Martínez Sevilla y Galán Cano realizan unas precisiones a propósito del informe de la Ponencia y del dictamen de la Comisión.

Comienza el debate del articulado.

El señor Galán Cano defiende el voto particular número 1, del Grupo Socialista. El señor Molina García defiende las enmiendas números 8 y 14, del Grupo Popular. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Martínez Sevilla, por el Grupo Mixto; Barbuzano González, por el Grupo de Coalición Canaria; Ferrer i Profitós, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Galán Cano, por el Grupo Socialista, y Molina García, por el Grupo Popular. Los señores Barbuzano González, Martínez Sevilla, Galán Cano, Ferrer i Profi-

tós, y Molina García intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.

Se procede a votar.

Se rechaza el voto particular número 1, del Grupo Socialista, por 125 votos a favor y 127 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 8 y 14, del Grupo Popular, por 114 votos a favor, 135 en contra y 2 abstenciones.

Se aprueba el artículo 8, apartado 2, letra f), del texto remitido por el Congreso de los Diputados, por 128 votos a favor, 113 en contra y 8 abstenciones.

Se aprueba el artículo 10, apartado 2, párrafo inicial, del texto remitido por el Congreso de los Diputados, por 249 votos a favor y 4 en contra.

Se aprueba el artículo 2, letra e), del texto remitido por el Congreso de los Diputados, por 246 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.

Se aprueban el resto del articulado y la exposición de motivos, según el texto del dictamen, por 251 votos a favor y 1 en contra.

El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.

Página

De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. PROCEDIMIENTO DE URGENCIA..... 4674

El señor González Laxe, Presidente de la Comisión, comunica a la Cámara que ha sido designado para presentar el dictamen el señor Gibert i Bosch, quien así lo hace a continuación.

Se abre debate de totalidad.

No se consumen turnos a favor ni en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Barbuzano González, por el Grupo de Coalición Canaria, y Marca i Cañellas, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

Comienza el debate del articulado.

El señor Marca i Cañellas defiende la enmienda número 2, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Escudero Sirerol defiende las enmiendas números 3 a 6, del Grupo Popular. La señora Pleguezuelos Aguilar consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Marca i Cañe-

llas, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Escudero Sinerol, por el Grupo Popular, así como la señora Pleguezuelos Aguilar, por el Grupo Socialista.

Se procede a votar.

Se aprueba la enmienda número 4, del Grupo Popular, por 131 votos a favor, 110 en contra y 8 abstenciones.

Se aprueban las enmiendas números 5 y 6, del Grupo Popular, por 112 votos a favor, 110 en contra y 26 abstenciones.

Se aprueba una enmienda transaccional suscrita por todos los Grupos Parlamentarios, a excepción del Grupo Socialista, al artículo 46, por 137 votos a favor, 110 en contra y 2 abstenciones.

Se aprueba el texto del dictamen con las modificaciones introducidas, por 248 votos a favor y 1 en contra.

El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.

Página

De la Comisión de Interior y Función Pública en relación con el Proyecto de ley sobre la creación de un fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados. PROCEDIMIENTO DE URGENCIA 4677

El señor Barranco Gallardo presenta el dictamen.

No se produce debate de totalidad.

Comienza el debate del articulado.

El señor Codina i Castillo retira la enmienda número 3, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Ardaiz Egüés defiende la enmienda número 1, del Grupo Socialista. El señor Escuin Monfort defiende las enmiendas números 4 y 5, del Grupo Popular. No se consume turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Codina i Castillo, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Ardaiz Egüés, por el Grupo Socialista, y Escuin Monfort, por el Grupo Popular. El señor Codina i Castillo interviene de nuevo en virtud del artículo 87.

Se procede a votar.

Se aprueba la enmienda número 1, del Grupo Socialista, por 235 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 4 y 5, del Grupo Popular, por 116 votos a favor, 130 en contra y 5 abstenciones.

Se aprueba una enmienda transaccional al artículo 3.1, letra b), suscrita por todos los Grupos Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.

Se aprueba el proyecto de ley, según el texto del dictamen, con las modificaciones introducidas, por 254 votos a favor de los 254 emitidos.

El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.

Página

De la Comisión Constitucional en relación con la Proposición de ley de organización del Centro de Investigaciones Sociológicas..... 4683

El señor Agramunt Font de Mora, presidente de la Comisión, presenta el dictamen.

Se abre debate de totalidad.

No se consumen turnos a favor ni en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Barbuzano González, por el Grupo de Coalición Canaria; Sanz Cebrían, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Selas Céspedes, por el Grupo Socialista, y Juan Cardona, por el Grupo Popular.

Se aprueba la Proposición de ley, según el texto del dictamen, por asentimiento de la Cámara.

El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.

Página

CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 4686

Página

Acuerdo entre España y Rumania parala Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, hecho en Bucarest el 25 de enero de 1995 4686

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.

Página

Acuerdo sobre protección de información clasificada entre el Reino de España y el Estado de Israel, hecho en Madrid el 13 de febrero de 1995 4686

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.

Efectuada la votación en el sentido de abstención, arroja un resultado de cero votos.

Se procede a votar por el procedimiento de votación secreta por papeletas.

Protocolo relativo a las consecuencias de la entrada en vigor del Convenio de Dublín sobre ciertas disposiciones del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen, hecho en Bonn el 26 de abril de 1994 4686

Se aprueba la creación de la Comisión de investigación por 128 votos a favor y 127 en contra.

Se suspende la sesión a las veintidós horas y quince minutos.

El señor Rodríguez Gómez expone la postura de su Grupo Parlamentario.

Se aprueba el Protocolo, por 138 votos a favor y 114 abstenciones, y se autoriza en este acto a que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse.

Se reanuda la sesión a las diez horas y diez minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

PETICIÓN DE CREACIÓN DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN 4688

CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

Petición de creación de una Comisión de Investigación para determinar las responsabilidades políticas que resulten de la creación, actuación, financiación y encubrimiento de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), sin perjuicio de la actuación independiente de los Tribunales de Justicia. (Primer firmante: Don Ángel Jesús Acebes Paniagua) 4688

— PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 3.020.942.990 PESETAS PARA COMPENSAR EL DÉFICIT DE LA COMPAÑÍA TRASMEDITERRÁNEA, S. A., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1993 POR LA EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES MARÍTIMAS DE INTERÉS NACIONAL. (S. 621/000089.) C. D. (121/000101.)

El señor Acebes Paniagua presenta la petición. A continuación, intervienen la señora De Boneta y Piedra, por el Grupo Mixto, Eusko Alkartasuna, y el señor Bayona Aznar, por el Grupo Socialista. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Martínez Sevilla, por el Grupo Mixto; Travieso Darias, por el Grupo de Coalición Canaria; Sanz Cebrián, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Ferrer i Roca, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Bayona Aznar, por el Grupo Socialista, y Acebes Paniagua, por el Grupo Popular. Por alusiones, hacen de nuevo uso de la palabra los señores Ferrer i Roca, Bayona Aznar, Martínez Sevilla y Acebes Paniagua.

El señor PRESIDENTE: Cuarto punto del orden del día. Conocimiento directo por el Pleno de proyectos y proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados.

Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 3.020.942.990 pesetas para compensar el déficit de la Compañía Trasmediterránea correspondiente al ejercicio de 1993 por la explotación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional. Está publicado en los boletines correspondientes, con fecha 21 de septiembre del año en curso.

No hay enmiendas. Se abre el debate.

¿Turnos a favor o en contra? (Pausa.)

¿Turno de portavoces?

Tiene la palabra, en primer lugar, el Senador Garcías Coll.

Se procede a votar.

El señor Presidente comunica a la Cámara el procedimiento a seguir para decidir sobre la forma de votación subsiguiente. Los señores Sanz Cebrián y Martínez Sevilla exponen su criterio al respecto.

El seor GARCÍAS COLL: Muchas gracias, señor Presidente.

Efectuada la votación respecto de la opción de votación secreta, arroja un resultado de 128 votos a favor.

El proyecto de Ley sobre la concesión de un crédito extraordinario de 3.020.942.990 pesetas para compensar el déficit de la Compañía Trasmediterránea, Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio de 1993 por la explotación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional tiene por finalidad compensar a la Compañía Trasmediterránea, Sociedad Anónima, el déficit por la ex-

Efectuada la votación respecto de la opción de votación de carácter público, arroja un resultado de 127 votos a favor.

plotación del servicio correspondiente al ejercicio de 1993, compensación que nace al existir un contrato entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con la Compañía Trasmediterránea, Sociedad Anónima, formalizado en escritura pública el 4 de septiembre de 1978.

El objeto del susodicho contrato es la gestión y prestación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional, constituyendo la actividad contratada un servicio público propio del Estado que la compañía gestiona en su nombre y temporalmente bajo la inspección y vigilancia de la Administración contratante. *(El señor Vicepresidente Rigol i Roig ocupa la Presidencia.)*

Por tanto, al Grupo Parlamentario Socialista, con la finalidad de dar cumplimiento a un derecho de compensación financiera a favor de la Compañía Trasmediterránea por la explotación del servicio de comunicaciones marítimas de interés nacional, regulado por Decreto 1876/1978, de 8 de julio, motivado por la inexistencia de dotación presupuestaria para el ejercicio de 1993 y al existir un informe favorable del Consejo de Estado, no le cabe más que votar favorablemente la concesión de dicho crédito extraordinario.

Muchas gracias,.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Garcías.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Font Barceló.

El señor FONT BARCELÓ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular sobre la concesión de este crédito extraordinario por el importe de 3.020 millones de pesetas para compensar el déficit, como decía el Senador socialista, del ejercicio de 1993.

El 14 de septiembre pasado, en el Congreso de los Diputados se aprobó el proyecto de Ley del referido crédito y el Grupo Parlamentario Popular votó a favor, y aquí, en el Senado, también lo haremos. Sin embargo, ello no implica que el Grupo Popular no deje constancia de una serie de reflexiones ante la forma en que se están concediendo estos créditos.

El déficit de Trasmediterránea no es producto de una situación coyuntural, sino resultado de una mala gestión de los administradores de la Compañía. La deuda de 3.000 millones de pesetas que acredita Trasmediterránea para obtener el crédito extraordinario, según lo establecido en el contrato suscrito entre el Estado y la Compañía en 1978, surge de la diferencia entre el superávit de la cuenta de explotación y el déficit de la cuenta de inversiones. Y ahí está la cuestión.

Estamos convencidos de que toda política de inversiones ha de tender siempre a la optimización del gasto. Y yo, señorías, les pregunto si consideran que se cumple este principio cuando se gastan varios cientos de millones de pesetas en la reforma de buques que después, por no ser adecuados a la normativa, se tienen que deshacer para volver a ser construidos. Considero que este tipo de gasto

tiene un nombre, que no es el de la inversión, sino el del despilfarro. Y es por esto por lo que nuestro Grupo en el Congreso manifestó sus reticencias a la aprobación del crédito extraordinario, no porque no se deba subvencionar el posible déficit que pueda surgir de las líneas de interés nacional, sino porque este déficit puede ser reducido si se lleva una política adecuada y racional del control del gasto.

Otra cuestión relacionada con la política de inversiones de Trasmediterránea es un hecho singular que en estas fechas cobra especial interés, y es que dentro del plan de inversiones para la renovación de la flota se ha realizado un gasto de reconstrucción de un buque que asciende a unos 10.000 millones de pesetas, y esta obra se ha contratado en unos astilleros finlandeses. Me pregunto, señorías, qué motivos han inducido a Trasmediterránea a encargar estos trabajos a unos astilleros finlandeses, cuando en España tenemos astilleros que pueden realizar el trabajo igual o mejor que los extranjeros. ¿Cómo es posible que, conociendo la crisis de los astilleros españoles, algunos de los cuales carecen ya de pedidos en cartera, una compañía como Trasmediterránea, en lugar de dar trabajo a nuestros astilleros, lo remita al extranjero? Esta actitud, totalmente contraria y perjudicial a los intereses de la industria naval española, merece nuestra más enérgica repulsa, puesto que además tiene una influencia importantísima en la pérdida de puestos de trabajo en nuestros astilleros.

Soy plenamente consciente, aunque diga esto, de que ésta no es una crítica sobre la gestión económica y que se me puede contestar que Trasmediterránea toma sus decisiones sobre gastos e inversiones por motivos puramente economicistas y que el libre mercado implica la posibilidad de que las inversiones se realicen en el extranjero o con compañías extranjeras, pero no es menos cierto que todos nos hallamos comprometidos en defender y buscar solución a una industria como la naval, que, a pesar de hallarse en una profunda crisis, sigue considerada como una industria estratégica. Y esta obligación de defensa y promoción también atañe a Trasmediterránea en tanto que empresa de capital público y, sobre todo, con un equipo directivo designado por el Gobierno. Y alguna responsabilidad se debería exigir, en mi opinión, a quienes han tolerado y consentido tal desafuero, como el que se haya realizado esta inversión en astilleros extranjeros.

Aunque en estas cuestiones podría extenderme mucho más ya que creo que la importancia de este tema merece un tratamiento específico que no renunciamos a presentar ante esta Cámara, he creído necesario mencionar simplemente algunas de ellas para demostrar que nuestro voto favorable no es un cheque en blanco al Gobierno ni a Trasmediterránea, sino un posicionamiento consecuente con la necesidad de mantener unas líneas marítimas de interés nacional a las que no podemos ni debemos renunciar. Ahora bien, en estos temas en que al final tenemos que recurrir a créditos extraordinarios es necesario que tengamos un mínimo de previsión, y es que la falta de previsión en el pago de la subvención a Trasmediterránea de los años 1990, 1991 y 1992 ha producido unos gastos financieros de 840 millones de pesetas. *(Rumores.)*

Y ahora, cuando aprobemos este crédito extraordinario de 3.000 millones de pesetas, casi dos años después de haberse producido ese gasto, yo me pregunto dos cosas: en primer lugar, ¿cuándo hará efectivo el Gobierno el pago? Y, en segundo lugar, ¿qué gastos financieros ocasionará este retraso? Pero también me pregunto: Y en el año 1995 —que ya es difícil porque está terminando—, ¿habrá que aprobar algún crédito extraordinario correspondiente al ejercicio 1994? (*Rumores.*)

Señorías, yo no lo sé. Es al Gobierno a quien compete saberlo. Sin embargo, nosotros le proponemos que, por una vez, hagan un ejercicio de previsión y que los presupuestos contemplen una partida para cubrir tales eventualidades, evitando así tener que recurrir a créditos extraordinarios.

Estas reflexiones las hacemos desde el punto de vista de la mejora de la Compañía, para que los créditos que se tengan que conceder sean los menos posibles, y para que los que se concedan se destinen única y exclusivamente a las líneas de interés nacional.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Font i Barceló.

Pregunto a los distintos grupos parlamentarios si puedo proponer que este conocimiento sea aprobado por asentimiento. (*Pausa.*)

Así es y así consta.

Por tanto, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley sobre la concesión de un crédito extraordinario por importe de 3.020.942.990 pesetas, para compensar el déficit de la Compañía Trasmediterránea S. A., correspondiente al ejercicio de 1993, por la explotación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

— DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON LA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 5/1995, DE 22 DE MAYO, DEL TRIBUNAL DEL JURADO. PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S. 624/000013.) (C. D. 122/000112.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto quinto del orden del día, dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.

En primer lugar, vamos a examinar el dictamen de la Comisión de Justicia en relación con la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado. Se tramita por el procedimiento de urgencia.

No se han presentado votos particulares a esta proposición de ley, por lo cual procede, a continuación, la presentación del dictamen.

Tiene la palabra el Senador Herrero Merediz.

El señor HERRERO MEREDIZ: Señor Presidente, de acuerdo con el artículo 120 del Reglamento del Senado, como representante designado por la Comisión de Justicia, daré cuenta a la Cámara, en primer lugar, de las actuaciones de esta Comisión y, en segundo lugar, de los motivos inspiradores de este dictamen. (*Fuertes rumores.*)

Con fecha 28 de septiembre pasado tuvo entrada en la Cámara el texto aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados...

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador, espere un momento, por favor.

Ruego a sus señorías que bajen los decibelios de sus voces para que podamos escuchar mínimamente la intervención del señor Senador.

Muchas gracias, señorías.

Puede usted continuar.

El señor HERRERO MEREDIZ: Decía que con fecha 28 de septiembre tuvo entrada en la Cámara el texto aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados relativo a la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.

Declarada urgente su tramitación y remitida posteriormente a la Comisión de Justicia, ésta designó Ponencia, que informó el día 9 de octubre dicha proposición, incorporándose las enmiendas números 11, 12, 13 y 14 del Grupo Parlamentario Popular, por unanimidad de los ponentes, aprobándose asimismo por unanimidad una enmienda consistente en introducir la palabra «provinciales» en el artículo segundo del texto de la proposición, y retirándose en el trámite de Ponencia las enmiendas números 1 a 10.

La Comisión de Justicia aprobó este informe de la Ponencia elevándolo como dictamen para debate y votación por este Pleno.

El motivo inspirador de esta proposición de ley orgánica es el de incorporar a la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, las enmiendas aprobadas por el Senado en su momento y que no fueron incorporadas en la sesión del Congreso celebrada el día 11 de mayo de 1995 pese a la muy favorable valoración y casi unánime aceptación por el Pleno del Congreso, por lo que se introducen ahora en este texto.

Respecto a los motivos de fondo, reitero las palabras de presentación del proyecto en la sesión celebrada en esta Cámara el día 26 de abril de 1995.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

¿Turno a favor? (*Pausa.*)

Tampoco hay turno en contra.

En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Zubía por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.

El señor ZUBÍA ATXAERANDIO: Señor Presidente, creo obligado tomar la palabra, siquiera sea brevemente, a los efectos de fijar la posición del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos respecto del dictamen de la Comisión sobre la proposición de ley orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, posición que ya digo de entrada va a ser, debe ser favorable, aun cuando solo fuere por una mera aunque poderosa razón de coherencia con la actitud y posicionamientos que hemos mantenido y explicitado en los trámites parlamentarios anteriores tanto de la propia Ley Orgánica como de la proposición que hoy nos ocupa.

Señorías, en su día contribuimos con nuestro voto positivo, y pese a los reparos que nos merecía, a hacer realidad una Ley tan importante, innovadora y ampliamente esperada como ésta que regula la institución del Jurado, y no vamos a ser nosotros quienes neguemos o dificultemos ahora la incorporación a esa Ley de unas modificaciones que, evidentemente, la mejoran y que, además, ya tuvimos ocasión de apoyar vía enmienda en esta misma Cámara, pero que, por las circunstancias de todos conocidas, no fue posible introducir en su momento en el texto legal definitivo.

Dicho esto, debo decir también que seguimos teniendo discrepancias o reparos respecto de la regulación última del Jurado, ya que con esta proposición de ley no se corrigen determinadas deficiencias, lagunas o disfunciones por nosotros apuntadas y de las que la Ley Orgánica sigue adoleciendo, siempre, por supuesto, desde nuestra concreta concepción de la institución y desde nuestro personal punto de vista.

En todo caso, señor Presidente, no voy a caer en la tentación, fácil por otra parte, de volver a referirme a ellas, por cuanto que sería seguir debatiendo sobre lo ya debatido, pero, además, no voy a hacerlo porque entiendo fundamentalmente que estamos ante la iniciativa de un trámite muy concreto cuya única razón de ser es la de posibilitar la incorporación de esas modificaciones que fueron aprobadas ya por esta Cámara, aunque finalmente fueron rechazadas, pese al amplio consenso parlamentario, dado el resultado de la votación de conjunto efectuada en el Congreso de los Diputados.

Termino por ello, señor Presidente, reiterando nuestro voto favorable, aunque poco entusiasta a decir verdad, a esta proposición de ley orgánica, y con el lamento real de que una Ley de una institución tan importante y tan relevante en suma como la del Jurado haya tenido una —digamos— accidentada tramitación parlamentaria y, en consecuencia, una no brillante culminación legislativa. Porque, coincidirán conmigo, señorías, en que, dejando a un lado las razones que así lo han exigido, no es estéticamente muy presentable aprobar hace tan sólo unos meses una Ley Orgánica de esta naturaleza, para tener que introducir inmediatamente después innumerables y sustanciales modificaciones en su texto por un procedimiento reglamentariamente irreprochable, qué duda cabe, pero de una técnica legislativa más que dudosa y, en todo caso, poco recomendable y nada deseable.

Quiero señalar también, señor Presidente, aunque pueda parecer innecesario, que mi Grupo también apoyará

las dos enmiendas técnicas o propuestas de modificación del dictamen de la Comisión suscritas por todos los grupos de esta Cámara que, en consecuencia deberán incorporarse como tales una vez aprobadas para que el Congreso de los Diputados se pronuncie sobre las mismas.

Nada más, señor Presidente, muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Vallvé.

El señor VALLVÉ I NAVARRO: «Amb el seu permís, senyor President.»

Señores y señoras Senadores, hoy es un buen día para esta Cámara, yo diría, sin pecar de eufemismo, que un gran día, y lo digo porque en la numerosa bibliografía existente relativa a la razón de ser del Senado se plantea el binomio de Cámara de representación territorial o Cámara de segunda lectura. Mientras no se ahonde en el desarrollo de España como un Estado plurinacional, con un respeto especial a las nacionalidades históricas, el primer camino, el de Cámara de representación territorial será siempre arduo. Pero en el día de hoy, con la aprobación de la Ley Orgánica del Jurado, no se produce nada más que la expresión palpable de la función que esta Cámara tiene en su aspecto de Cámara de segunda lectura.

En la exposición de motivos de esta Ley se dice bien claro que el origen de esta segunda Ley Orgánica, que viene a modificar una Ley Orgánica anterior y en el tiempo muy inmediata, no es otro que el de corregir una deficiencia con la que se encontró nuestra Cámara en el sentido de no obtener suficiente mayoría para aprobar todas aquellas enmiendas que, aprobadas por esta Cámara, merecieron el elogio del Congreso de los Diputados.

Como digo, hoy es un gran día porque, además, se va a votar la conveniencia o no de que se constituya en esta Cámara Alta una Comisión de investigación. Esta es una práctica que en los Senados de los demás países del mundo es habitual. Se reserva al Senado esta competencia.

Como digo, hoy el Senado obtiene el reconocimiento de un objeto que ha sido discutido, que ha sido minimizado, y por eso creo, señor Presidente, que hoy es un buen día.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Vallvé.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Arévalo.

El señor ARÉVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, expreso nuestra satisfacción por recuperar el texto que aprobamos en el Senado, a la vez que ratifico nuestra convencida defensa del jurado como participación real de los ciudadanos en la Administración de justicia, sin contraponerlo al sistema de jueces profesionales, y esperando muy confiadamente en el más justo resultado de la institución.

Permítame, señor Presidente, que lea unas líneas del Tratado de los delitos y de las penas, del Marqués de Beccaria, escrito hace muchísimos años y sin pensar en el jurado: «Cada hombre tiene su mira, y cada hombre la tiene diversa según los diferentes tiempos. El espíritu de la Ley sería, pues, la resulta de la buena o mala lógica de un juez, de su buena o mala digestión; dependería de la violencia de sus pasiones, de la flaqueza del que sufre, de las relaciones que tuviese con el ofendido y de todas aquellas pequeñas fuerzas que cambian las apariencias de los objetos en el ánimo fluctuante del hombre. ¿Cuántas veces vemos la suerte de un ciudadano trocarse en el paso que de su causa se hace a diversos tribunales y ser las vidas de los miserables víctimas de falsos raciocinios o del actual fermento de los humores de un juez que toma por legítima interpretación la vaga resulta de toda aquella confusa serie de nociones que le mueve la mente? ¿Cuántas veces vemos los mismos delitos diversamente castigados por los mismos tribunales en diversos tiempos por haberse consultado no la constante y fija voz de la Ley, sino la errante inestabilidad de las interpretaciones?» Hasta ahí las palabras de don Cesare Bonesana.

Señor Presidente, señorías, el jurado es, desde luego, garantía del funcionamiento democrático de la justicia.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Arévalo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora doña Rosa Vindel.

La señora VINDEL LÓPEZ: Buenos días, señor Presidente.

Señorías, quisiera aprovechar de forma muy breve este turno de portavoces para agradecer a todos los grupos la aceptación en Comisión de las cuatro enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular se vio obligado a presentar para recuperar lo que fue un acuerdo de esta Cámara en el anterior período de sesiones, fruto —sus señorías lo recordarán— de un intenso y, en nuestra opinión, magnífico debate en esta Cámara, resolviendo así el desgraciado incidente del Congreso de los Diputados, que esperamos, por el calibre de las leyes que nos están enviando desde aquella Cámara, que no vuelva a ocurrir.

Recordarán también que en el articulado nos abstuvimos porque el sentido de la institución del Jurado que en este momento se ha establecido sigue siendo el mismo del que nosotros en su día nos mostrábamos no tanto disconformes cuanto insatisfechos. Tanto la polémica pública que se ha suscitado recientemente en estos días respecto de una sentencia producida en Norteamérica como la reacción que se está empezando a suscitar en la sociedad española al empezar a recibir los ciudadanos las notificaciones para ser jurados, han agrandado aún más que en aquel entonces nuestras dudas sobre la oportunidad del momento elegido para la instauración del Jurado, porque el Jurado aprobado, señor Presidente, entendemos, puede reproducir vicios originados en las experiencias juradistas de algunos otros países, que pueden dar lugar a veredictos más sentimentales

que racionales de culpabilidad o no culpabilidad, cuando de lo que se trata es de proporcionar, señor Presidente, señorías, un juicio justo.

Por tales razones, el Grupo Parlamentario Popular se volverá a abstener en la votación a este proyecto de ley que, a continuación, va a seguir.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

Han llegado a esta Presidencia dos modificaciones. Ruego a los señores portavoces que atiendan, porque han sido aceptadas por todos los Grupos parlamentarios: una hace referencia a una enmienda de adición de un apartado 15 bis nuevo, que, si les parece bien, doy por leído, y otra al artículo 2.º, de modificación de su apartado 5, que también doy por leído.

Vamos a someter a votación el dictamen de la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a favor, 127; en contra, uno; abstenciones, 113.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado a las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.

— DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE LA PARTICIPACIÓN, LA EVALUACIÓN Y EL GOBIERNO DE LOS CENTROS DOCENTES. PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S. 621/000090.) (C. D. 121/000092.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente punto del orden del día es el dictamen de la Comisión de Educación y Cultura en relación con el Proyecto de ley Orgánica de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes. Se tramita por el procedimiento de Urgencia.

En primer lugar, para la presentación del dictamen, pido al Presidente de la Comisión que me comunique si hay algún Senador designado para ello. *(Pausa.)*

El Senador Iglesias tiene la palabra.

El señor IGLESIAS MARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.

El proyecto de ley de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes tuvo su entrada en esta Cámara el día 28 de septiembre pasado. El plazo de presentación de enmiendas concluyó el día 3 de octubre co-

riente. Se formularon dos propuestas de vetos y 243 enmiendas de los distintos Grupos parlamentarios.

La Ponencia, designada por la Comisión, se reunió el día 5 de octubre y acordó, por mayoría, proponer a la Comisión de Educación y Cultura que elevara al Pleno una propuesta de devolución al Gobierno del texto del proyecto de ley.

La Comisión, en su sesión celebrada el día 11 de octubre, acordó no aceptar el informe de la Ponencia, rechazar los dos vetos existentes y dictaminar el proyecto de ley, incorporando once enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tres del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y dos del Grupo Parlamentario Popular. Se mantienen para su debate y votación las dos propuestas de veto y votos particulares que recogen enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, de Coalición Canaria, del Grupo Mixto y de los Senadores señores Martínez Sevilla y Nieto Cicuéndez.

El total de enmiendas vivas para este trámite parlamentario es de 224.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Iglesias Marcelo.

Para defender su voto particular, tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.

El señor NIETO CICUÉNDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, voy a defender la necesidad de que esta ley sea rechazada por distintas razones.

En primer lugar, quería hacer una reflexión sobre lo que nosotros entendemos que debería ser el rigor legislativo. Cuando se nos trae una ley tan importante relativa a la enseñanza —es un derecho constitucional garantizar la enseñanza libre y gratuita para todos los ciudadanos— y al mismo tiempo se regula algo tan fundamental como un sector de la enseñanza, una parte de funcionariado público, entendemos que en rigor legislativo ya tendríamos que empezar a situar que el modelo de Estado está agotado. Yo creo que, independientemente de las posiciones que haya en esta Cámara, todos coincidiremos que la Loapa ya ha llegado a su fin, y esto tiene mucho que ver con todas las leyes que intentemos desarrollar que atañan a la Función Pública.

Por tanto, en primer lugar, tendríamos que empezar, por principio, por plantear un debate necesario, una ley necesaria, una puesta al día para clarificar el desarrollo de Estado de las Autonomías, el desarrollo, en definitiva, del modelo de Estado que necesitamos para abordar los nuevos ciclos políticos.

Al mismo tiempo, y previamente, tendremos que hacer una ley de la Función Pública porque, si no, indudablemente siempre que abordemos cualquier ley que afecte a cualquier sector del funcionariado estaremos cometiendo, de alguna manera, o agravios comparativos o disgregaciones, y rigor legislativo es lo que exige ya el ordenamiento jurídico del Estado español, conforme lo tenemos concebido.

Dicho esto, por tanto, es motivo suficiente ya para oponernos a esta ley, que de aprobarse tal y conforme está crearía disgregaciones al desarrollo de la Función Pública e, incluso, agravios comparativos entre el distinto funcionariado. Ésta ya es una razón de peso suficiente para oponernos a la ley, pero es que, además, esta ley —y no me voy a extender mucho—, como habrán leído en la exposición de motivos, consideramos que no viene a resolver ninguno de los problemas que tiene planteada la enseñanza.

Si esta ley se aprueba tal y conforme está, la primera consideración que tenemos que hacer es que si el 87 por ciento del sector de la enseñanza a todos sus niveles está en contra de ella, ¿quién la va a aplicar? Técnicamente esta ley también deja mucho que desear, y nosotros entendemos que no resuelve ninguno de los problemas existentes. En cuanto a la participación no hay ningún avance sino que hay un retroceso con relación a la LOGSE.

El tema de la regulación, si no va acompañado de un sistema mínimo económico, se hace totalmente inviable. Además, es curioso que la única iniciativa legislativa popular que ha llegado por vía reglamentaria al Congreso de los Diputados sea por una proposición de ley reguladora de la financiación del sistema educativo que, lógicamente, debe ser tenida en cuenta y articularse el mecanismo para su aprobación porque, repito, es la única proposición de ley que llega por iniciativa popular con todos los requisitos al Parlamento. Primero, habría que resolver, por tanto, esta iniciativa popular legislativa.

Por último, sin detenerme mucho, diré que también entendemos que los temas de los requisitos que se exigen en esta ley para la dirección de los centros, para la función inspectora, etcétera, todo eso no resuelve absolutamente nada, es una regresión, es un parche.

Por tanto, pedimos que esta ley sea devuelta y dejada para mejor ocasión.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Nieto Cicuéndez.

Supongo que el Grupo Parlamentario Socialista querrá acumular los dos turnos en contra. (Pausa.) Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, y para defender su enmienda de veto número 2, tiene la palabra el Senador Fernández Rozada.

El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Senadores.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular me corresponde realizar la defensa de la propuesta de veto que hemos formulado con ocasión de la remisión a esta Cámara del texto aprobado por el Pleno del Congreso sobre el proyecto de ley de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes.

Nuestro Grupo, señorías, se ha visto obligado una vez más a rechazar globalmente el texto y proponer su devolución al Gobierno por entender que existen múltiples y fundadas razones para no suscribir una iniciativa de las caracte-

terísticas de las que ahora debatimos. Por lo tanto, como veremos, nuestro Grupo se une, aunque por razones distintas, al apoyo del veto aquí defendido por el portavoz del Grupo Mixto. Muchas de las razones esgrimidas en la justificación del veto del Grupo Mixto son compartidas por nosotros y, al mismo tiempo, nosotros ponemos de manifiesto otras que espero que sean compartidas por sus señorías y puedan ayudarnos a devolver al Gobierno una mala ley. Esta ley no es procedente en estos momentos, y por ello queremos que sea devuelta al Gobierno.

Todo el mundo habrá comprobado que la promulgación de la legislación escolar a lo largo de la etapa del Gobierno socialista ha sido pródiga y que, en esta labor, el trabajo finalmente alcanzado tras las pertinentes tramitaciones legislativas no ha sido nunca completo, ni siquiera fue de la satisfacción de quienes suscribían la presentación y aprobación de las leyes que, con el tiempo, han dado muestras sobradas de contradicción con sus propias ideas.

Remontándonos al año 1985 —y quiero recordar en estos momentos que yo he sido testigo de excepción desde entonces, como portavoz de Educación de mi Grupo, ya en ese año 1985— observábamos que eran objetivos de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación la resolución de los problemas de la participación, de la democratización escolar y, a pesar de todo ello, doce años después siguen vigentes los mismos problemas de participación y democratización. A eso siguió la supresión del Cuerpo de Inspectores, de Directores y de Catedráticos. Se publicó una disposición de carácter general sobre derechos y deberes de los alumnos y un sinfín de regulaciones que, lejos de generar la atención y la tranquilidad del profesorado y de los alumnos, han sembrado el estupor y el desasosiego general en los colectivos de enseñanza. No está muy lejos todavía en el tiempo la promulgación de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, la famosa LOGSE, y, sin embargo, no parece que éste sea el momento de resolver los problemas que ésta ha dejado aparcados, cuando el Ministerio presenta ahora el actual proyecto de ley orgánica que, en definitiva, viene a suponer el reconocimiento tácito del grave fracaso de aspectos comprendidos en las leyes orgánicas antes citadas, fundamentalmente los relacionados con los modelos de participación, de dirección y de inspección, como luego veremos.

Nuestro Grupo Parlamentario, señorías, es consciente de que la actual situación del sistema educativo, las nuevas responsabilidades y autonomía de los centros y de los docentes en el desarrollo del currículo, así como las exigencias de evaluación del conjunto del sistema, requerirán sin duda una adecuación del planteamiento participativo y de organización y funcionamiento para hacerlos más congruentes con los nuevos pronunciamientos de la LOGSE. Por esta razón entendemos que habría sido procedente abrir un debate previo entre los sectores implicados en la participación, la evaluación y el gobierno de los centros, que habría determinado la aparición de propuestas consensuadas.

Entrando en el análisis del texto del proyecto, nuestro Grupo encuentra ya razones suficientes en la propia exposición de motivos para rechazar en su totalidad el proyecto.

Pero es que, además, en el contenido del articulado y en su forma de presentación existen sobrados motivos para recusarlo, como veremos a continuación.

En primer lugar, se constata una ausencia de ese debate social en el mundo educativo al que antes aludía, que pudiera concitar un indispensable avance en la armonización de las opiniones de los diferentes sectores afectados. Desgraciadamente, el proyecto que se presentó ahora contó con una mayoría cualificada del profesorado en contra, precisamente, de este proyecto.

En segundo lugar, existe una falta de decisión para analizar los problemas reales que afectan a la enseñanza y, en consecuencia, la ausencia de voluntad en la búsqueda de soluciones que puedan aportarse por los diferentes sectores afectados.

En tercer lugar, hay una indecisión política total ante una posibilidad de consenso, que impide de manera absoluta abrir un debate constructivo en el que se pudieran realizar aportaciones auténticas de mejora del proyecto, al que se ha limitado a trámites más insignificantes de audiencia prescritos legalmente.

En último lugar, hay un afán de limitar tanto la participación real en el gobierno de los centros como en el desempeño de la inspección. A nuestro entender, el carácter preeminente de las decisiones administrativas pone en tela de juicio cualquier diseño de participación y dirección de los centros educativos. Por lo tanto, señorías, la ley es inoportuna en el tiempo, ya que en pleno inicio del desarrollo de la LOGSE resulta improcedente que tanto ésta como la LOE vengán a modificarse, lo que redundaría en la idea expuesta anteriormente de que el Gobierno es consciente del fracaso de ambas leyes. Y la ley, señorías, es innecesaria. Los que hayan tenido ocasión de verla con detenimiento habrán observado que la mayor parte del articulado reproduce de forma literal el correspondiente a leyes orgánicas citadas y cuya modificación podría acometerse mediante disposición de rango inferior.

Analizando el capítulo referente a la autonomía pedagógica y organizativa y de gestión vemos que la autonomía de gestión organizativa y pedagógica se limita a la libertad de acción del profesorado dentro del aula. En la realidad, el centro educativo está fuertemente condicionado por políticas de dirigismo y uniformado curricular, por el creciente imperativo, cada día más detallado, de la propia normativa, por las condiciones de los centros y de los puestos de trabajo y por la debilidad de la formación permanente.

En resumen, señorías, la distancia entre la retórica ministerial y la pura realidad cotidiana en las aulas va alcanzando magnitud de divorcio total entre ambas, ya que quiere tratar al profesorado como un mero técnico que aplica rutinas preestablecidas, al tiempo que se consolida la burocratización en la escuela, signo de su dependencia, pero no de su autonomía. A la par que no se facilita el ejercicio de la autonomía que se proclama, tampoco se garantiza la gobernabilidad de los centros porque, aun pretendiendo aumentar la autoridad de los directores no se restablece la autoridad del profesor ni de forma individual ni de forma colegiada por medio del claustro.

Dirección. Existe un acuerdo unánime respecto del hecho de que una dirección escolar eficaz constituye un factor de rendimiento muy positivo de los centros. Lo que no está nada claro, a nuestro juicio, es el modo de organizar y ejercer la dirección, sobre todo, ante la eventualidad legal de tener que definir el papel de director.

Para nuestro Grupo parlamentario las medidas que propone el Ministerio para mejorar la dirección son una apuesta por una dirección desequilibrada, por una dirección fuerte, con amplios poderes pedagógicos y de gestión, sin tener en cuenta que la responsabilidad de adoptar determinadas decisiones importantes debe de ser asumida y compartida por otros órganos colegiados.

A la inestabilidad de la dirección se suma el hecho de que en el proyecto se pretenda trasladar a los directores unas responsabilidades que pueden hacer aún más indeseable la ocupación de estos cargos, así como la arbitrariedad y el nepotismo que emerge ante la posibilidad de que exclusivamente directores, cuya tarea haya sido valorada positivamente por la Administración, perciban un complemento específico asignado a los puestos directivos ya de por vida.

La discrecionalidad con que se contempla dicha probabilidad y el hecho de que concurren diferentes administraciones y formas de actuación administrativa provoca especial inquietud conocidas anteriormente, padecidas en el ámbito educativo, discriminaciones por todos conocidas y que, desde luego, deberían ser eliminadas. Pero con ser preocupante, señorías, el hecho que acabo de denunciar, lo que más sorprende es la perversión de la ley en materia retributiva que pone en duda la misma coherencia de esta propuesta en el marco de apoyo al ejercicio de la función directiva. Más lógico y conveniente sería catalogar los puestos directivos, asignarles los correspondientes niveles y abonarlos, así como que la consolidación de retribuciones se produzca de la forma general prevista para todos los funcionarios.

Del mismo modo, entiende nuestro Grupo que la elección de los directores de los centros constituye un motivo de inquietud cuando es manifiesto que representa uno de los problemas más graves de los centros de enseñanza en donde los profesores rechazan someterse a procesos de elección en una situación tan anómala como el que casi el 60 por ciento de los directores actuales, señorías, han sido designados por la Administración y no elegidos por los consejos escolares. Sin embargo, a tan delicado planteamiento se responde en la ley poniendo trabas al profesorado para alcanzar dicha meta a través de su necesaria participación en cursos de formación permanente, con lo que se pone en tela de juicio la capacidad de miles y miles de profesores que sin esta formación han permitido, y lo siguen haciendo a diario, que los centros de enseñanza puedan abrirse todos los días y funcionen, a pesar de las carencias materiales y de personal a las que se ven sometidos, sufriendo todas estas carencias con una profesionalidad que ahora, a nuestro juicio, se les cuestiona sin ningún fundamento.

A esta crisis de dirección de los centros se responde con el requisito de la acreditación, añadiendo una rémora más

a la alarmante problemática de candidatos a los puestos directivos que afecta a la mayoría de los centros. En suma, señorías, el loable fin de que sean los mejor preparados los que accedan a estos puestos de trabajo se contradice con los requisitos enumerados en el artículo 18 de este proyecto de ley; requisitos que deben ser eliminados, reconociéndose, señorías, genéricamente a todos los profesores la capacidad para dirigir centros de enseñanza correspondientes a su nivel.

Evaluación. Respecto de ella, el proyecto no garantiza, en modo alguno, que la evaluación y valoración de la práctica docente sirva para aportar al profesorado nuevos conocimientos para mejorar su trayectoria profesional ni reconoce la necesidad de que dicha evaluación y valoración se efectúe por personas capacitadas que aseguren la objetividad de los procesos. Las vías que establece para la promoción profesional no tienen garantías de profesionalidad, por lo que no llegamos a entender cómo el Consejo Escolar puede participar en este proceso si no es, exclusivamente, emitiendo informes.

Inspección. Las medidas referidas a la inspección ponen de manifiesto el fracaso del modelo de la inspección instaurado en la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, habiendo faltado valentía para crear el Cuerpo Superior de Funcionarios Técnicos de Inspección, una inspección profesional a la que se acceda por concurso-oposición técnica e independiente que en modo alguno debe de suponer una excepción respecto del sistema funcional del Estado, antes bien tiene y debe de sujetarse a él.

La creación del Cuerpo Superior de Inspectores de Educación daría solución en condiciones de igualdad con el resto de funcionarios a muy diferentes situaciones, garantizaría a los ciudadanos el rendimiento social de la educación y la rentabilidad de los recursos públicos ejerciendo las funciones y atribuciones que la LOGSE establece en el artículo 61 como desarrollo del artículo 27 de la Constitución. El proyecto de ley, señorías, omite asimismo el desarrollo de la alta inspección cuya única mención continúa siendo la del artículo 61.4 de la LOGSE.

Generalización de los centros de integración y la escolarización de los alumnos con necesidades especiales. Respecto de esta problemática, la regulación contenida en el proyecto de ley no garantiza que se vaya a contar con los medios necesarios para acercarnos a un modelo de integración total. Nuestro Grupo entiende que la escolarización de los alumnos con necesidades educativas debe de hacerse en función del perfil de apoyo que el centro escolar presenta, teniendo pues en cuenta si la dotación de ese centro sirve para atender las necesidades educativas especiales del alumno, entendiendo por tales las que disponen al menos de un profesor especialista en pedagogía terapéutica, otro profesor especialista en perturbaciones de audición y lenguaje y un fisioterapeuta y un asistente social.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, debería ir terminando.

El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Sí, señor Presidente, voy finalizando.

De otro modo, la igualdad de oportunidades que se pretende alcanzar está muy lejos de lograr las mínimas cotas de calidad educativa. El proyecto de ley plantea otras cuestiones, admisión de alumnos, centros concertados, profesores especialistas, cuestiones de relleno que de ninguna manera justifican la promulgación de esta ley, que indican, a nuestro juicio, la descoordinación ministerial, que de nuevo modifica la LOGSE en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 1996, poniendo fin al grado elemental de las enseñanzas musicales cuando la reforma de las mismas se había iniciado en el presente año 1995.

En definitiva, señorías, el sistema educativo, deteriorado por los desajustes producidos con ocasión del desarrollo de la LODE y de la LOGSE, alcanza un grado de deformación considerable y el proyecto de ley que ahora debatimos aborda de forma parcial estos problemas que acabo de plantear. En esta indeseable posición, el Grupo Parlamentario Popular suscribe la propuesta de veto en la confianza de que el proyecto no prospere, dado que las medidas que el mismo comprende no contribuyen de ninguna manera a la mejora de la calidad de la enseñanza.

Finalizo ya, señor Presidente, agradeciendo la incorporación a este debate del nuevo Ministro de Educación al que me gustaría oír, aunque fuese brevemente, para ver si es capaz de explicarnos las razones que él haya podido encontrar para seguir justificando un proyecto de ley en el que no ha tenido parte alguna. Y pido también poder conocer de los grupos, sobre todo catalán y vasco, que a lo largo de la tramitación en Ponencia y en Comisión no han abierto la boca, los argumentos por los cuales se han unido a esa votación favorable que el dictamen de la Comisión ha traído a este Pleno.

Digo todo esto, con el mayor respeto —como siempre me lo ha merecido— a la sensibilidad educativa de ambos Grupos, que siempre han hecho aportaciones muy valiosas a lo largo de los debates; sobre todo, en los relativos a educación, que son los que yo he seguido de forma continua. Pero me extrañó que, ante una ley tan innecesaria, tan inoportuna, no explicaran los motivos de su apoyo a la misma. Por tanto, espero que las razones que yo expuse para devolver esta ley al Gobierno, no sólo sean planteadas en la crítica en contra por el Grupo Parlamentario Socialista, sino también por los grupos que van a votar en contra, porque nuestro Grupo necesita conocer la coherencia en los planteamientos en materia educativa de grupos parlamentarios que han dado aquí, a lo largo de los años, una sensación de seriedad y rigor en el cumplimiento estricto de sus funciones ante la Cámara, y que yo, hasta ahora —insisto, hasta ahora—, no he visto en el trámite en el Senado de esta ley.

Espero poder conocerla y, en todo caso, señor Ministro, piense que esta ley, que siendo usted ya Ministro se va a aprobar, no va a acomodarse a las exigencias de nuestro sistema educativo y no nos va a dar más calidad de enseñanza. El profesorado, en un porcentaje elevadísimo —y hoy es el día en que todavía están encerrados en muchos edificios de centros escolares—, está pidiendo que esta ley se devuelva al Gobierno, y hoy no sería un buen día si se

aprobara en el trámite del Senado una ley que es mala para la comunidad escolar en su conjunto.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Iglesias Marcelo.

El señor IGLESIAS MARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, señor Ministro, estamos debatiendo las enmiendas de devolución al Gobierno de este proyecto de ley y creo que no es ocioso intentar aclarar de qué estamos hablando exactamente, qué es este proyecto de ley y cuál es su alcance de naturaleza legislativa y de naturaleza política.

Estamos ante un proyecto de ley de naturaleza técnica, de técnica educativa, en el que se trata de perfilar y designar los instrumentos que, en la organización de los centros, deben estar puestos al servicio de la consecución de determinados objetivos; de organizar la participación educativa, cuyos principios están establecidos en otra parte; de organizar la evaluación de los centros como elemento fundamental del sistema, y de organizar el gobierno de los centros docentes como un elemento importante de su funcionamiento y de la consecución de sus objetivos.

Estamos, insisto, ante un debate de técnica educativa y no discutiendo los principios fundamentales del sistema educativo y de la concepción política. No estamos discutiendo las leyes básicas que regulan el sistema educativo. El reconocimiento de derechos a la educación, en la LODE, y la organización general del sistema educativo, en la LOGSE, son las piezas fundamentales del sistema educativo; pero en estos momentos estamos debatiendo, vuelvo a insistir, una ley de naturaleza técnica, estamos discutiendo instrumentos.

¿Qué discrepancias son posibles ante una ley de naturaleza técnica? Razonablemente, discrepancias acerca de la adecuación o no de los instrumentos técnicos que se están poniendo sobre la mesa. Discutimos la adecuación o no de un modelo de dirección, de un modelo de inspección, de un modelo de evaluación y de un modelo de participación, y no de los principios esenciales del sistema educativo, definidos y aprobados por las Cortes Generales con anterioridad. Pero, naturalmente, alguien puede aprovechar la ocasión para decir que, estando en desacuerdo con los aspectos técnicos de la ley, todavía lo está en mayor medida con los principios esenciales que rigen el sistema educativo. Así, se aprovecha la ocasión para resucitar un debate recurrente, que dura ya doce o trece años, en el que siempre se viene a decir lo mismo: la LODE fue una ley muy mala la LOGSE es una ley muy mala y, como consecuencia de ello, las aplicaciones técnicas que esta ley pretende tienen que ser necesariamente muy malas.

Pero eso no es más que una petición de principio. No es más que un sofisma que intenta encubrir una posición que para el Grupo Popular consiste, esencialmente, en decir que hay que discrepar del Grupo Parlamentario Socialista

y del Gobierno socialista en su política educativa. Y se dice eso, no como una conclusión de un análisis y del examen de una realidad, sino como un principio fundamental; hay que discrepar del Gobierno socialista diga lo que diga, haga lo que haga, proponga lo que proponga; hay que enfrentarse a cualquiera de las medidas del Grupo Parlamentario Socialista, hay que negarla.

Esta es la historia de una discrepancia y un desencuentro querido, buscado, mimado, cultivado durante mucho tiempo. Si no, no se explica el que, a pesar de que tras modificaciones del Congreso de los Diputados se haya creado de nuevo en esta ley un cuerpo de inspección educativa, petición que el Grupo Parlamentario Popular ha estado sosteniendo de forma consistente, recurrente, durante mucho tiempo —y recuerdo las intervenciones de la actual Diputada, y antigua Senadora, señora Sainz, con el Ministro de Educación, reclamando la creación del cuerpo de inspección educativa en múltiples ocasiones en esta Cámara—, ahora también tenga que manifestar su discrepancia. Por tanto, hay que discrepar, hay que negar la acción de política educativa del Gobierno socialista y de su Grupo Parlamentario, diga lo que diga. Y no parece que eso sea una posición razonable.

Respecto de Izquierda Unida, la posición de principio que mantiene, tanto en el veto, como en otras cuestiones concomitantes con estas tareas educativas, es una posición de fondo radicalmente distinta de la del Grupo Popular, pero coincidente en su conclusión final. Parte de un principio distinto, pero llega a la misma conclusión: la devolución al Gobierno del proyecto de ley. Izquierda Unida dice lo siguiente: El trayecto recorrido por el Partido Socialista en la época anterior fue excelente; la LODE fue una ley magnífica; la LOGSE tuvo consenso parlamentario suficiente, excepto el del Grupo Parlamentario Popular. Aquello estuvo muy bien hecho, y cualquier modificación que se introduzca sobre aquellos principios es perversa.

Hay una gran dosis de inmovilismo, de dogmatismo político, en la posición de Izquierda Unida. Porque, efectivamente, en su momento aquellas leyes fueron buenas, fueron excelentes. Pero, ¿qué es lo que nos impide en el momento actual revisar aquellas concepciones, actualizarlas y modificar lo que sea necesario respecto de aquellas ideas para adaptarlas a las necesidades vigentes? ¿Por qué no se puede modificar una norma que aprobamos hace doce, diez, o cinco años, adaptándola a la situación actual? Cualquier sensación de que no se puede mover el pasado porque es una traición a los grandes principios, es absolutamente contraria a cualquier posición razonable de análisis de la realidad y de solución de sus problemas.

Sobre ese fondo de crítica de Izquierda Unida y del Grupo Parlamentario Popular, que fundamenta nuestra posición contraria al voto favorable de las enmiendas de devolución, haré algunas consideraciones sobre algunos aspectos parciales. Empezaré diciendo que, en cuanto al argumento en favor del rigor y la seriedad de determinados grupos parlamentarios, que en el pasado apoyaron o discreparon de posiciones del Gobierno y que en este momento han determinado apoyar este proyecto de ley porque están de acuerdo con su contenido y porque satisface aspi-

raciones legítimas de esos grupos parlamentarios, no tiene sentido ninguno que digamos que esos grupos obraron entonces con seriedad y rigor y que ahora, porque apoyan la ley, y no la posición discrepante del Grupo Parlamentario Popular, carecen de esa seriedad y rigor. No es seria la crítica. Serios y rigurosos, siempre; cuando están de acuerdo y cuando están en desacuerdo.

Por lo tanto, ahora que están de acuerdo con la posición del Gobierno, ¿qué razón hay para que descalifiquemos y les pidamos razones de sus actos? Ninguna. No es razonable la crítica. Es legítimo que defiendan sus posiciones políticas y hacen bien en hacerlo, pero no es legítimo que ustedes quieran arrimar a sus propias posiciones las de otros grupos políticos que han manifestado con absoluta claridad, y se manifiesta hablando y votando, sus posiciones respecto de esta ley. Por consiguiente, es un argumento que yo tengo que descalificar desde la tribuna.

Izquierda Unida critica esta ley porque dice que tiene una mala técnica legislativa. Le diré que la educación es un tema complejo, que aglutina muchas cosas diferentes. El proyecto de ley, al aglutinar muchas cosas diferentes —de tipo económico, personal, organizativo, legislativo, formal—, tendrá que contener una serie de medidas y de prescripciones variadas. No es un cajón de sastre, como dicen en su crítica, sino que es la organización alrededor de un asunto central, que es el de la educación, de los múltiples aspectos técnicos que son necesarios.

Para Izquierda Unida no habría más que una ley necesaria y conveniente para el sistema educativo español en este momento: la famosa ley de financiación del sistema educativo, que es una preocupación recurrente por parte del Grupo de Izquierda Unida y por parte del Grupo Parlamentario Popular. Pero tengo que denunciar desde la tribuna de nuevo y por enésima el espejismo de que una ley de financiación resuelve los problemas financieros del sistema educativo español. Por el mismo razonamiento —que es una falacia, un sofisma que no lleva a ninguna conclusión—, una ley de financiación podría resolver los problemas de financiación del sistema de pensiones o de la sanidad pública o de la modernización del Ejército o de la actualización de la industria en el país. Por la misma razón, leyes de financiación parciales resolverían los problemas de financiación, pero eso es un error en el planteamiento, y lo saben muy bien. Toda ley de financiación tiene que ajustarse a la ley marco general, que es la ley de presupuestos. Si lo permite, se puede hacer; si no lo permite, es inútil hacer un canto al sol. La ley de financiación no podría resolver nada.

Además, al representante de Izquierda Unida le tengo que decir que la famosa proposición de ley de iniciativa popular —que ahora mismo está viva en el Congreso de los Diputados para llevar adelante una ley de financiación—, hablando mucho y teniendo mucho contenido de palabras, cuando llega el momento clave y crucial de definir cuánto dinero hace falta para financiar el sistema educativo, la ley, natural y prudentemente, no dice ni una sola palabra sobre esa cuestión, porque no lo puede decir. No puede decir cuánto dinero podemos comprometer en los próximos diez años para financiar el sistema educativo y

establece principios generales, vaguedades sobre la financiación. Cuando llega el momento de decir cuánto, no dice nada, porque no es posible decirlo, porque no se puede resolver el problema financiero del sistema educativo a través de una ley de financiación que comprometa al Ejecutivo durante 10, 12 ó 14 años del futuro. Es absolutamente imposible.

También me voy a referir a dos cuestiones que son objeto de crítica: la acreditación para la función directiva y la nueva formulación de la función inspectora.

Con respecto a la acreditación, se organiza una batalla singular en lo relativo a la necesidad de que los directores escolares tengan una formación adecuada para el ejercicio de sus responsabilidades. Hay una gran polémica sobre ese tema. El Grupo Parlamentario Popular añora el viejo cuerpo de directores escolares, que era una manera de acreditar a los profesores para el ejercicio de la función directiva. La acreditación consistía en ganar una oposición, y eso les parece algo encomiable, incluso piden que se reconozcan los derechos de los viejos directores de ese cuerpo a efectos de la acreditación actual, cosa, por otra parte, innecesaria, ya que están acreditados con las normas que contiene la ley.

No se entiende cuál es la reserva y la reticencia hacia una acreditación a través de cursos de formación convocados por las administraciones públicas o titulaciones universitarias adecuadas a esa función, una acreditación suficiente o el ejercicio acreditado de la función directiva en centros escolares, teniendo en cuenta que ni vamos a la consolidación de un cuerpo permanente o de una función permanente o de un grupo permanente de directores. Esa no es la filosofía de este proyecto de ley. Pensamos que los directores estarán al frente de los centros durante cierto tiempo y volverán a su función docente pasados los plazos que establece la ley: tres mandatos de cuatro años y doce años de función directiva. Por tanto, conexión permanente de los directores con la función docente, no desvinculación de los directores respecto de la función docente.

No entendemos que el Grupo Parlamentario Popular acuse a este proyecto de ley de perverso por el hecho de consolidar una parte de los complementos específicos de los directores. Les parece una perversión del sistema retributivo de los funcionarios públicos. Le diré que esa consolidación existe para otro tipo de funcionarios. Para los funcionarios no docentes pueden consolidarse complementos de destino después del ejercicio de ciertas responsabilidades durante cierto tiempo. ¿Por qué lo que es legítimo para los funcionarios en general no lo es para los directores escolares? ¿Cuál es la razón para que descalifiquemos a los directores escolares de ese derecho reconocido y vigente para otros funcionarios que hacen otras tareas dentro de la función pública? No encontramos ninguna justificación.

En cuanto a la función inspectora, les diré que en el momento en que estamos se contempla la creación del cuerpo de inspección de educación, resultado de enmiendas aprobadas por la Cámara Baja en el trámite parlamentario anterior. Esto no se contemplaba en el proyecto de ley en su origen, pero sí en su actual redacción. No entendemos, por un lado, la reserva del Grupo Parlamentario Po-

pular, que ha solicitado múltiples veces la creación del cuerpo de inspección educativa y que ahora se contempla en este proyecto de ley, aunque puedan discrepar de los ejercicios de oposición o del sistema de acceso. Ellos, por cierto, hablan del cuerpo superior de inspección. Yo llevo en esa tarea prácticamente toda mi vida y nunca la inspección tuvo el adjetivo de superior. Los cuerpos de inspección, en sus múltiples nombres a través de la historia de los últimos 40 años, nunca se han denominado cuerpo superior de inspectores de educación.

El alcance de esa denominación seguramente va más allá de la consideración que nosotros hacemos de la inspección como un cuerpo docente, como un cuerpo que está inserto en la carrera docente que contemplamos, de tal manera que un profesor pueda empezar siendo un maestro de enseñanza primaria o de educación infantil y con el paso de los escalones y cumpliendo los requisitos que en cada caso se requieren pueda terminar, por un lado, siendo profesor de universidad porque tiene una vía en la que los escalones están abiertos o culminar, por otro, su carrera de profesor en el ejercicio de la inspección educativa como parte de una carrera docente y profesional.

Le diré que todos los cuerpos de inspección existentes hasta este momento reclamaron insistentemente el carácter de docente de los cuerpos de inspección. La inspección no es un cuerpo administrativo, es un cuerpo que está enraizado en la tarea de la educación y tiene una función importante. Nace de los profesores, culmina una tarea de educación y, por lo tanto, tiene naturaleza docente. Es un cuerpo de naturaleza docente. Contra eso va, y no entendemos las razones, el Grupo Parlamentario Popular.

Por otra parte, lo que hace Izquierda Unida es intentar mantener la situación del año 1984. Inspectores de ida y vuelta, inspectores que nacen de los cuerpos docentes que ejercen la función educativa y que vuelven a los cuerpos docentes pasado un cierto tiempo, en todo caso seis años. Este modelo de inspección ha dado excelentes resultados y no tiene nada que ver con políticas clientelistas del Partido Socialista. Tengo que rechazar enérgicamente esa acusación, que es infundada, que no se corresponde, en absoluto, con la realidad, acerca de la cual y de su naturaleza no tengo que hacer más comentario que el de la descalificación.

Le pondré un ejemplo que posiblemente sirva poco, pero puede servir como muestra de lo que le estoy diciendo. Yo pertenezco, como inspector de educación, a una plantilla; estoy en situación de servicios especiales desde hace muchos años. En esa inspección hay ahora en activo 12 ó 14 inspectores, parte de los viejos cuerpos y una parte muy importante del nuevo sistema de acceso a la inspección que se inaugura en el año 1984. Ninguno de estos inspectores tiene carné del Partido Socialista, ninguno, y respeto, cómo no, a algunos de ellos simpatizantes y próximos a las posiciones del Partido Popular, porque tienen todo el derecho del mundo, reconocido y respetado, a ejercer sus opciones políticas con absoluta libertad, sin presiones de ninguna clase. Se lo digo como un ejemplo que quizá no sea extensible, porque es de un grupo pequeño, pero que puede ser representativo de una situación de carácter general.

Terminaré esta oposición al veto del Grupo Parlamentario Popular refiriéndome a otro tema recurrente de su crítica: la marginación de los profesores y la marginación del claustro en las tareas de gobierno de los centros.

Lo de la marginación de los profesores resulta bastante curioso, porque esta ley concede y da capacidades operativas importantes al director del centro, que es un docente; al jefe de estudios, que es un docente; al secretario, que es un docente, y, naturalmente, esos cargos nacen del conjunto de profesores que ejercen en los distintos centros docentes. Pero me dice, además, que al claustro de profesores se le disminuye en sus competencias y en sus atribuciones. Yo le diré que seguramente no ha comprendido todavía que el sistema educativo que nosotros pusimos en marcha con la LODE es un sistema de participación de la comunidad educativa en las tareas decisivas de la organización y de la marcha de los centros educativos y del sistema de educación, en las que los profesores tienen una voz absolutamente imprescindible y en las que la comunidad educativa, es decir, los padres y los alumnos, especialmente a partir de determinadas edades, junto a las administraciones educativas competentes, tienen algo importante que decir sobre el desarrollo de la educación.

Cuando esas competencias se distribuyen entre órganos de más amplio alcance, es evidente que quienes habían mantenido el monopolio de las decisiones en los sistemas anteriores tienen ahora que compatibilizar sus funciones con las de los consejos escolares y con las tareas de las administraciones educativas competentes. Y por lo tanto, ese reparto de atribuciones y de competencias no debe ser esgrimido como una defensa de las capacidades de los claustros, que las tienen reconocidas expresamente por la ley.

Por último, terminaré haciendo una referencia a la alta inspección, que el Grupo Parlamentario Popular pide que se regule en esta ley. La alta inspección está regulada en la LOGSE, en el artículo 61.4, con una misión específica expuesta con toda claridad en el texto de la ley: El Estado ejercerá la alta inspección que le corresponde, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en materia de educación. La alta inspección tiene que ver cómo los poderes públicos cumplen sus obligaciones en materia educativa, y para ello se les ocurre, nada más y nada menos, que crear un cuerpo de funcionarios cuyas funciones están solapándose permanentemente a las funciones de la inspección de educación y que, por otro lado, invaden continuamente las facultades de las Comunidades Autónomas que tienen competencias educativas plenas, creando un sistema paralelo de inspección: uno depende de las administraciones educativas competentes y otro se escapa del control de las administraciones educativas competentes y que va mucho más allá de lo que exige la Constitución y las leyes respecto del control de las obligaciones de los poderes públicos en materia educativa.

Es evidente que esa alta inspección no puede estar en manos de un cuerpo de funcionarios seleccionados por oposición. Tiene que ser una inspección de naturaleza radicalmente diferente, como establece la normativa actual que regula la alta inspección. Por tanto, la propuesta que nos hace es confusa, invade competencias de las adminis-

traciones educativas y, en vez de clarificar el tema de la inspección, lo que hace es confundirlo definitivamente, creando un sistema paralelo de inspección.

Por esas y por otras razones que omito a sus señorías, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar en contra de los dos vetos a este proyecto de ley.

Muchas gracias, señor Presidente. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Iglesias Marcelo.

En turno de portavoces, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el Senador Nieto Cicuéndez.

El señor NIETO CICUÉNDEZ: Señor Presidente, señores Senadores, señor Iglesias, ha dicho usted en su intervención que Izquierda Unida, en este proyecto de ley, es inmovilista. Efectivamente, nosotros hemos podido aportar algo a las leyes educativas, tanto a la LOGSE como a la LODE, pero en este caso nada porque entendemos que esta ley es regresiva.

Tengo que decirles que ustedes, en nombre de la modernidad, en nombre de la técnica —usted ha dicho que ésta es una ley técnica—, lo que están haciendo de un tiempo a esta parte es lo mismo que han hecho con la reforma laboral: la contrarreforma. Y esta ley, aparte de mala e innecesaria, es también una contrarreforma. Porque díganme ustedes, en cuanto a la técnica de esta ley, si la participación es técnica; si el tema de las evaluaciones es técnico; si el tema de la inspección es técnico; si el tema de los derechos de los trabajadores de la enseñanza pública y privada es técnico. ¿Todo eso es técnico? Esto tiene un gran contenido político. Y en vez de avanzar para ponerlo al día, lo que ustedes pretenden, repito, es hacer una contrarreforma de la enseñanza, igual que en aras de la modernidad han hecho una contrarreforma laboral.

Ése es el problema de fondo, y, efectivamente, ante ese dilema, decimos: Virgencita de mi alma, que me dejen como estoy. Porque lo que ustedes pretenden no es mejorar con esta ley, sino darle un contenido regresivo. Y aun así, aun teniendo un veto Izquierda Unida, no nos quedamos ahí, sino que hacemos propuestas positivas a un montón de enmiendas. Y coincidirán ustedes, o al menos una parte de la Cámara, en que si algo ha tenido Izquierda Unida desde siempre una gran implantación e incidencia ha sido en el sector de la enseñanza. Ustedes no regulan nada, repito, hacen una contrarreforma, y por eso decimos que esta ley no es adecuada ni necesaria, por las razones expuestas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, tiene la palabra el Senador Victoriano Ríos.

El señor RÍOS PÉREZ: Señor Presidente, señorías, en relación con el veto presentado al proyecto de ley que

hoy debatimos de participación, evaluación y gobierno de los centros, tengo que decir que, a juicio del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, el proyecto es algo difuso en importantes aspectos, poco progresista e, inclusive, regresivo. En conjunto, la valoración poco afortunada y escasamente debatida en los ámbitos sociales directamente afectados, sobre todo, en el profesorado. Después del amplio consenso logrado con posterioridad al debate en profundidad que obtuvieron la LODE, en 1985, y la LOGSE, en 1990, esta ley nos llega algo inmadura y fuertemente contestada por amplios sectores políticos, profesionales y sindicales. Tengo que reconocer que existen ciertos avances en los aspectos de participación en el funcionamiento de los centros, aunque no se explicita, por ejemplo, la presencia del personal de administración y servicios, e incluso los alumnos, en las labores del funcionamiento de los mismos. Tampoco se compromete de forma seria a las Administraciones locales a una estrecha colaboración, cuestión que consideramos importante. E, igualmente, a lo largo de la ley se observa un olvido sistemático de todo lo referente a los órganos de gobierno de los centros superiores de enseñanzas artísticas.

En cuanto a los aspectos de la evaluación en los rendimientos de los centros, también hay algunos avances, pero dándole prácticamente exclusividad en estas funciones a la inspección educativa, dejando con muy escasa actuación a los consejos escolares y al claustro de profesores. Pero donde esta ley no es afortunada es en lo referente a la dirección de los centros y, sobre todo, a la recreación del Cuerpo de Inspectores de Educación.

En cuanto a la dirección de los centros, todo lo relacionado con la acreditación previa de los profesores para poder ser elegidos o designados directores es un auténtico retroceso con respecto a las leyes anteriores. Se objetiva hoy, no hay duda, una desmotivación de los profesores para desempeñar esa función de dirección. Pero creemos que ésta no es la solución adecuada, porque, con la indicada acreditación, es posible que exista una dificultad sobreañadida para asumir, por parte de los profesores, esas responsabilidades de dirección. Creemos que esta acreditación sería, como digo, una dificultad sobreañadida, y por eso, también existe para nosotros una clara intervención de la Administración educativa. Pensamos que todo ello sería poner un importante pilar para un futuro y próxima construcción y creación de un nuevo cuerpo de directores de centros que los alejaría claramente del resto del profesorado, que ya no podría ejercer tal función restando entonces espontaneidad e iniciativa a proyectos creativos del claustro. Reconocemos las graves deficiencias actuales, la necesidad de motivaciones reales para la función directiva y la carrera profesional, pero esta forma de afrontarlo nos parece totalmente inmadura y poco debatida, sobre todo, cuando tiene a más de las tres cuartas partes del total del profesorado enfrentado a estas soluciones. Una reelaboración y profundización en el diálogo con los implicados hacia un acuerdo, que podría ser muy mayoritario, en beneficio de la propia educación, es lo que parece exigimos los tiempos actuales.

Pero es en el Título IV de este proyecto «De la Inspección Educativa» donde el aspecto regresivo se objetiva con nitidez con la vuelta a la recreación del cuerpo de inspectores educativos, grupo cerrado que se alejaría rápidamente de su formación y del ejercicio docente al perder su pertenencia a sus cuerpos profesionales de origen, creándose uno nuevo, cerrado y enquistado dentro de Educación, del cual ya tenemos experiencias no muy felices en épocas anteriores. Además, con el peligro cierto de burocratización e inmovilismo y en clara contradicción con principios educativos defendidos y propugnados por la LOGSE.

Por todas estas razones, no podemos estar de acuerdo con este proyecto de ley, por lo que creemos que debe ser reestudiado, más ampliamente debatido, y no por esta vía de urgencia a la que, por cierto, no encontramos ninguna justificación, máxime cuando la mayoría de los profesores, la vía sindical y grupos políticos proclaman su deseo de profundizar y consensuar en lo posible estos aspectos básicos en la organización de la educación, fundamentales para el desarrollo cultural, social y económico de todos los españoles. Quizá el debate insuficiente de este proyecto y la vía de urgencia sean el producto del reciente cambio ministerial de la última crisis de Gobierno.

Por último, y en definitiva, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, con permiso del Ministro del ramo, votará a favor del veto y en contra de este proyecto ley.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Ríos.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Zubía.

El señor ZUBÍA ATXAERANDIO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, desde un punto de vista estrictamente educativo, el proyecto de Ley Orgánica de participación, evaluación y gobierno de centros docentes es un proyecto que nos sonó bien —y así lo dijimos, señor Fernández Rozada— desde sus primeros momentos u orígenes; pero que, a decir verdad, nos suena todavía mejor al día de hoy y a estas alturas de su andadura parlamentaria.

Es algo que, además, constatamos con satisfacción tras una tramitación en la que entendemos que no se ha hurtado ni rehuído el debate y en la que con espíritu abierto y constructivo se han ido acercando posturas y criterios, al menos con nuestros grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado. Y así lo demuestra un hecho, numérico si se quiere, pero que algo querrá decir y encierra y que no es otro que las enmiendas que inicialmente presentamos al proyecto de ley, que fueron 71, se quedaron reducidas a 36 para el momento de la sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, y todas ellas fueron retiradas tras su debate vistos el contenido y compromisos que se derivaron del mismo. En línea con lo indicado, tres enmiendas se presentaron para este trámite del Senado y las tres han sido aceptadas e incorporadas al dictamen de la Comisión que ahora debatimos.

Con estos antecedentes, nadie se sorprenderá —salvo el señor Fernández Rozada— de que nuestra posición vaya a ser favorable a dicho dictamen y, en consecuencia, contrario a los vetos hoy defendidos. Vamos a votar a favor del dictamen de la Comisión porque, en definitiva y en nuestra opinión, estamos ante una reforma correcta en su orientación y dirección y, además, en línea con lo que hemos venido sosteniendo y defendiendo tiempo atrás, es decir, una reforma que apuesta por la calidad en la educación, por la autonomía de gestión de los centros educativos y por la participación de los agentes sociales en los programas educativos. En suma, una apuesta decidida por la profesionalidad.

Por supuesto, este proyecto —que, como bien lo ha definido el Señor Iglesias, es fundamentalmente (no diría yo estricta y exclusivamente, pero sí fundamentalmente) de técnica educativa—, como todos, es perfectible e, incluso, criticable en algunos aspectos. Sobre todo en los relacionados con la autonomía de gestión de los centros, la reforma no es todo lo incisiva que nos gustaría o, dicho de otra forma, es mucho más tibia o tímida que la que nosotros mismos deseáramos, e incluso cabe sostener que la reforma es incompleta en cuanto tiene carencias o lagunas como pudiera ser, y lo digo a título de ejemplo, el hecho de no abordar un tema como el de la normalización lingüística, todavía pendiente en aquellas Comunidades Autónomas como la nuestra que cuentan con dos lenguas oficiales. Pero, a pesar de ello y algunas otras cosas más, la dirección, la orientación, repito, de este proyecto de ley, nos parece, en todo caso, acertada, y eso, al día de hoy, es lo que nos parece más destacable del proyecto de ley.

No quisiera acabar mi intervención sin reseñar el esfuerzo importantísimo que se ha realizado durante toda la tramitación del proyecto a la hora de delimitar los títulos y ámbitos competenciales, y que se ha visto satisfactoriamente completada, justo es reconocerlo, con la aceptación de esas tres enmiendas de nuestro Grupo a las que me he referido anteriormente y que tienen que ver, en concreto, con el artículo 37.4 del texto articulado y con la disposición adicional primera, punto cinco, en relación al ejercicio de la inspección educativa y la función inspectora; y, por otra parte, con la disposición final tercera, apartado 6, en cuanto afecta a la financiación de los centros docentes privados que imparten formación profesional específica. Con su aceptación e incorporación al dictamen se ha conseguido una mejor y más completa adecuación del proyecto a la distribución de competencias en la materia. Expreso nuestra satisfacción por ello y el agradecimiento a todos aquellos grupos que con su voto han posibilitado tal incorporación.

Y termino, ya sí, señor Presidente, reiterando que por las razones expuestas nuestro voto será contrario a los vetos y favorable al dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley orgánica de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes.

Y aprovecho someramente el momento de mi intervención, señor Presidente, aun a sabiendas de que no es el momento procesal más oportuno, para anunciar también que nuestro Grupo votará a favor, y lo hará además muy espe-

cialmente, de la enmienda número 166, de la Senadora del Grupo Parlamentario Mixto, señora De Boneta, que trata de resolver la situación de determinado personal laboral docente fijo al servicio de centros integrados en la red pública en virtud del proceso previsto en la Ley del Parlamento Vasco de 29 de junio de 1988.

Nada más, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Zubía.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador don Albert Vallvé.

El señor VALLVÉ I NAVARRO: «Amb el seu permís, senyor President.»

Me acojo a la licencia procesal del Senador Zubía, y en este acto voy a fijar la posición a mi Grupo tanto en el veto como sobre nuestra intención de voto sobre este proyecto de ley, es decir, que ésta será nuestra única intervención en este proyecto de ley.

Señor Presidente, la brevedad del trámite —estamos en un veto— hacía que no tuviese intención de intervenir en nombre de mi Grupo, en beneficio, como digo, del trámite y de sus señorías, hasta el turno de portavoces, posterior y previo a la votación del proyecto, pero las referencias a este Grupo del Senador Fernández Rozada en defensa de su veto, y por pudor parlamentario, me obligan a intervenir.

Quisiera acotarle al Senador Fernández Rozada que nuestro silencio en Ponencia y Comisión fue limitado únicamente al ejercicio del voto y se debe a circunstancias muy fáciles de comprender. En primer lugar, a nuestro juicio, el proyecto de ley es bueno y permite el desarrollo autonómico de la norma, elemento básico para una coalición que como la que me honro en representar es nacionalista.

La ley se ha tramitado en el Congreso de los Diputados con una significativa intervención de los Diputados de Convergència i Unió y nuestra privilegiada situación en el arco parlamentario permite que nuestras enmiendas prosperen. No le sepa mal, pues, al Senador Fernández Rozada; al fin y al cabo es el juego democrático.

Como digo, votaremos en contra de las dos enmiendas y votaremos a favor del proyecto.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias señoría. Tiene la palabra el Senador Iglesias Marcelo.

El señor IGLESIAS MARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a hacer una muy breve intervención para expresar la satisfacción del Grupo Parlamentario Socialista por la posición que han manifestado los dos grupos parlamentarios que han hecho uso de la palabra precedentemente, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que muestran su acuerdo de fondo con la ley.

Debo decirle al Senador Zubía que comparto plenamente sus reflexiones y que, efectivamente, esta ley no está en el límite de la perfección, no lo está y podría haber ido más allá. Es siempre una delicada cuestión de decisión legislativa cuál es el límite que hay que aceptar en cada caso para, manteniendo el consenso más positivo para la aprobación de la ley, llegar al límite del desarrollo legislativo que tenemos entre manos. Y, naturalmente, debe ir acompañado de una sensación de modestia en el trabajo legislativo que se hace, porque siempre lo podemos hacer mejor, eso es evidente, pero aspirar a la perfección, a llegar al límite último posible del desarrollo legislativo, me parece que sería una obsesión paralizante que nos impediría dar pasos positivos de acercamiento a nuestros objetivos. Su señoría sabe muy bien que a veces el deseo de lo mejor impide que consigamos lo bueno que tenemos a nuestro alcance y dentro de nuestras posibilidades inmediatas. En ese sentido, yo creo que ésta es una buena ley, aunque no sea una ley que complete la resolución de todos los problemas que tenemos pendientes.

Al representante y portavoz de Izquierda Unida le diré que su alegato —que he escuchado con atención— me ratifica en la crítica de fondo que he hecho a su posición. Usted habla de que estamos en una contrarreforma, que estamos en un retroceso de la política educativa promulgada con anterioridad, y simplemente le digo: ¿a qué le suena el alegato de contrarreforma, a qué le suena? ¿No le suena a un contexto en el que el fondo no es la tolerancia, lo razonable, la modestia en la consecución de los objetivos, sino que, en cambio, es el contexto del dogma que se impone frente a las opiniones discrepantes? Su alegato por la contrarreforma da la razón a mis observaciones, que, naturalmente, hago a su señoría con cordialidad, sin ánimo en absoluto de ponerle en una situación desairada.

En cuanto a la posición del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, que modifica en este trámite parlamentario su posición de voto respecto de lo que se hizo en el Congreso de los Diputados, creemos que no hay razón alguna que justifique la modificación de esa posición de voto puesto que la ley sigue en esencia las mismas líneas, los mismos parámetros que tenía en el Congreso de los Diputados. Aquí la hemos perfeccionado en algunos aspectos, pero sigue siendo esencialmente el mismo proyecto de ley, por lo que no entendemos exactamente las razones de ese cambio de voto.

Y le diré, señoría, que la preocupación porque hagamos una ley muy progresista o poco progresista puede ser una obsesión que nos haga perder la visión de la realidad. En tiempos de la transición política, cuando los grupos de oposición andábamos discutiendo los temas para pasar de la dictadura a la democracia, recuerdo que algunos militantes de algún partido de izquierdas, concretamente del Partido Comunista, estaban siempre obsesionados por saber si eran bastante comunistas sus proposiciones; bastante comunistas. Nunca entendí lo que significa eso, nunca lo entendí, al igual que el procurar ser muy progresista o poco progresista. Tenemos que hacer bien las cosas que tenemos que hacer; tenemos que legislar de manera que atendamos a los requerimientos y a las demandas de la realidad; nues-

tra posición global y de fondo es una posición progresista, pero no debemos estar obsesionados en cada paso que damos por si damos un paso suficientemente largo, o medio paso, o un cuarto de paso. A veces andar despacio nos hace llegar más pronto, y, como sabe su señoría, a veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Por lo tanto, no nos perdamos en esa disquisición, hagamos el trabajo que tenemos que hacer para conseguir los objetivos.

Esta ley es suficientemente buena como para merecer el apoyo de su Grupo parlamentario, que podrá utilizarla en su circunscripción porque le da competencias suficientes para tomar decisiones importantes respecto del sistema educativo, y seguramente cuando la apliquen agradecerán las posibilidades que esta ley les confiere.

Muchas gracias, señor Presidente. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

Tiene la palabra el Senador Fernández Rozada.

El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Senadores, señor Ministro, después de oír las intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios —unas a favor, otras en contra—, cada vez me ratifico más en el hecho del acierto de pedir la devolución de este proyecto de ley al Gobierno, porque la impresión general que yo puedo extraer es que la realidad demuestra el grave distanciamiento y desconocimiento que la Administración tiene de lo que se está cociendo en los centros, porque hablan en nombre de la Administración.

El Senador Iglesias alude con frecuencia a su pasado en la Inspección, pero demuestra que su desconocimiento de la realidad de lo que se cuece en los centros es absolutamente evidente; y a usted sí que le están diciendo continuamente que esta ley es socialista, muy socialista.

Nosotros tenemos una grave preocupación porque la educación sea algo que pueda consensuarse, que pueda marcar la pauta, de tal forma que, por encima de los avatares de los cambios de gobierno en el sistema educativo, podamos tener lugares de encuentro que permitan que la sociedad no viva convulsivamente dentro del proceder del estamento escolar, porque es mucho lo que nos jugamos, y precisamente el objetivo esencial de la educación, que es preparar a las personas para el futuro, debe ser un objetivo común, generalmente aceptado por la sociedad.

Creo que ustedes son extremadamente partidistas; ustedes hablan de participación y, de alguna forma, ponen trabas a la misma impidiendo que los sectores afectados puedan ejercer de forma real esa participación en los centros. Yo lo he denunciado aquí y nadie se ha atrevido, al menos con rigor y seriedad, a desmontar mi aseveración, en nombre de mi Grupo Parlamentario.

Señorías, hablan de participación. La izquierda siempre hace ese discurso de que el progreso, la participación y la representación, a través de los sindicatos, en todo el estamento de la comunidad educativa ha tenido una importancia tremenda. Yo, probablemente por falta de tiempo, no

voy a poder hacer uso de toda la documentación que hemos venido recopilando desde que apareció el anteproyecto, donde se ve claramente cómo los sindicatos de profesores rechazan la ley educativa que propone el MEC, al igual que todos los titulares de las revistas de educación del propio Ministerio y otras que no están tan próximas al Ministerio. Los sindicatos proponen al profesorado que se pronuncie por la retirada de la Ley, que son los que representan los verdaderos intereses.

Pues bien, señorías, los profesores se han pronunciado en referéndum. ¿Cuál ha sido el resultado? El 87 por ciento del profesorado rechaza la «Ley Pertierra», así conocida, y supongo que no le parecerá mal al señor Saavedra después de comprender que va a tener que seguir defendiendo una mala ley. Deje que sea el señor Pertierra el que arrostre esa responsabilidad precisamente de haber dado a luz a una mala ley. Usted bastantes temas tiene que salvar en otros menesteres y ojalá tenga mayor acierto del que está teniendo hasta ahora. (*Rumores.*)

Pero, si los profesores rechazan esta ley, díganme, con sentido común y con sensatez, señor Zubía, señor Vallvé, ¿cómo puede una reforma educativa llevarse a cabo no vinculando a los profesores? Tiene que estar forzosamente vinculada al fracaso. Eso es evidente y no estoy haciendo uso de una información ligera, sino de una información que conocen sus señorías porque, a través de los medios de comunicación, vemos cómo esta ley está siendo objeto de rechazo por parte del profesorado. Luego se podrán contar aquí todas las monsergas que uno quiera, incluso hay mayoría parlamentaria para aprobarla legítimamente y se convertirá en ley, pero no vengan aduciendo que los intereses que representa en estos momentos el profesorado, que está y se pronuncia en contra de la ley, pueden suponer que aquí se diga en voz alta que ésta es una buena ley.

El portavoz socialista, señor Iglesias, dice que discrepamos por discrepar, sin hacer ningún análisis riguroso. Señor Iglesias, ¿dónde están los análisis rigurosos por parte del Grupo Parlamentario Socialista para poder decir a esta Cámara que el respaldo que tiene la ley está precisamente en sus protagonistas y el mayor protagonista de la educación es el profesor porque está más cercano a la vivencia del propio alumno? ¿Por qué no desmonta ese argumento y deja de decir que hay grupos que son muy rigurosos y serios porque aprueban esta ley? Ustedes sabrán el porqué, porque aquí ni unos ni otros han dado argumentos suficientes para demostrar que es una buena ley y que va a servir como pauta determinante de la participación, de la evaluación y del gobierno de los centros, porque eso aquí no se ha discutido ni nadie ha tratado de demostrar que mis argumentos eran erróneos.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Señoría, vaya terminando.

El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Finalizo, señor Presidente, pero también le anuncio que en el trámite de enmiendas vamos a ser escuetos en la defensa de las mismas.

En cuanto a la ley de financiación y a la Inspección educativa, a mí me gustaría —porque aquí hubo debates—

que, al menos, se pudiese aprobar una ley a sabiendas de que en la Inspección se crea el cuerpo que habíamos pedido. Pero es que, además, si se lee la disposición adicional primera, punto 4, se ve claramente la discrecionalidad, el clientelismo y, sobre todo, el amiguismo que ahí se consolida al dejar que a los inspectores que han accedido por vías que en la Administración no pueden contemplarse, luego se les incluya en un cuerpo directamente, sin concurso-oposición, y que queden integrados como tales.

Nosotros hablamos de clientelismo, aunque usted conozca casos como el de los doce inspectores que ninguno es del PSOE. Tampoco hay por qué criticar el que un inspector sea del PSOE o de otro grupo político, pero resulta curioso, porque si usted trajese aquí, ahora, dirección por dirección, la relación de los inspectores que han accedido en los últimos años a la Inspección en todas las provincias españolas, vería que todos han sido nombrados por la Administración del Gobierno socialista y, cómo no, la gran mayoría son o militantes socialistas, o colaboradores socialistas, o de la FETE-UGT. Eso es una evidencia. Si de 40 inspectores, el 39 por ciento son suyos, a la hora de votar cualificadamente no se corresponde el cuerpo social con esa proporción que hay dentro de la Inspección. ¡Qué curiosidad! Nos denuncian y critican por hablar de clientelismo político y a la hora de comprobarlo vemos que se va a heredar una Inspección excesivamente politizada y no sujeta a las reglas del juego, es decir, al procedimiento para integrarse en un cuerpo, y ustedes lo saben muy bien.

Respecto a los temas de financiación —y tengo que finalizar—, es verdad —y aquí me pongo de parte del portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya— que la financiación juega un papel tan importante en el desarrollo de un sistema educativo como lo juega el propio papel del profesorado. Fueron ustedes, en el desarrollo de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, de la LOGSE, donde se atrevieron a plantear unas reformas en el tiempo, desde el año 1990 para acá, acompañando paralelamente una memoria económica en la que cuantificaban los medios que deberían establecerse, a lo largo de los años siguientes para el cumplimiento de esas reformas. Curiosamente, señorías, nosotros decíamos: hágase no una memoria económica, sino una ley de financiación que garantice a los gobiernos el cumplimiento estricto de esa cuantificación económica porque, de lo contrario, al amarrarse el cinturón, puede afectar cuantitativamente al área de la educación, perjudicando el cumplimiento de los objetivos de calidad de enseñanza que propone la propia LOGSE.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, ha consumido su tiempo.

El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Eso no ha querido aprobarse. Al final, con la memoria económica vienen los recortes, el Gobierno socialista no apuesta por la educación y seguimos con la boca grande diciendo que se van a cumplir los objetivos de calidad de enseñanza, cuando se ha disminuido en el 50 por ciento la aportación económica que los mismos socialistas habían previsto para desarrollar esa ley en los años siguientes. Con el 50 por ciento pueden

decir lo mismo, la ley es francamente buena y, al final, tenemos un sistema educativo degradado, falta de calidad y sin posibilidad de poder homologarnos con Europa. Ésa es la realidad, señorías.

Muchas gracias, señor Presidente. *(Aplausos desde los escaños de la derecha. Protestas desde los escaños de la izquierda.—El señor Presidente ocupa la Presidencia.)*

El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación el voto particular número 3, enmienda de veto número 1, sostenida por el Grupo Parlamentario Mixto.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 249; a favor, 120; en contra, 128; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: No habiendo alcanzado la mayoría necesaria, queda rechazada.

Votamos la enmienda de veto número 3, del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 249; a favor, 119; en contra, 129; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada al no haber alcanzado la mayoría requerida.

Entramos en el debate del articulado. Voto particular número 2, enmiendas números 126 a 129; 131 a 152, y 155 a 167.

Para su defensa, tiene la palabra la Senadora De Boneta. Señorías, rogaría silencio, porque la Senadora De Boneta está en el uso de la palabra.

Muchas gracias.

La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.

Señorías, voy a hacer una defensa global de todas las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Mixto-Eusko Alkartasuna al citado proyecto de ley que ahora debatimos, porque me parece que puede entenderse con más coherencia nuestra posición.

Las enmiendas presentadas por Eusko Alkartasuna van encaminadas en dos direcciones complementarias. Por una parte, salvaguardar las competencias que ostentan las Comunidades Autónomas en los ámbitos materiales afectados por el presente proyecto de ley y, por otra, procurar la autonomía real de los centros escolares en cuanto a su organización, gobierno y gestión. *(Rumores.)*

El señor PRESIDENTE: Rogaría silencio en la Cámara. Tiene la palabra la Senadora De Boneta.

La señora DE BONETA Y PIEDRA: Insisto, señorías, voy a defender todas las enmiendas al proyecto de una sola vez.

He iniciado mi intervención indicando que, por una parte, pretendemos agrupar todas aquellas enmiendas que van a salvaguardar las competencias que ostentan las Comunidades Autónomas en la materia y, por otra parte, debemos manifestar que el texto que se presenta para la aprobación de la Cámara trata de limitar las competencias que las Comunidades Autónomas han ido asumiendo y que en su desarrollo han ido dotándose de instrumentos para su efectividad; instrumentos que, al menos, van a ser tocados para la aplicación del presente proyecto, una vez que entre en vigor.

Ésta es la razón por la que se presenta una enmienda cuya referencia son los ámbitos competenciales. Esta enmienda, respetando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, trata de evitar la intromisión del proyecto en materias de Educación y de Función Pública que tienen las Comunidades Autónomas con competencia plena en las referidas materias. Así, éstas podrán seguir adecuando sus peculiaridades específicas en los citados ámbitos sin separarse del modelo general estatal.

A este fin, es preciso delimitar el objeto y la finalidad del texto puesto a debate. El objeto y finalidad del mismo es dotar de normas básicas el desarrollo del artículo 27 de la Constitución por mandato expreso del artículo 149.1.30.^a de la misma. A este respecto, la Sentencia del Tribunal Constitucional 137/1986, de 6 de noviembre, viene a señalar que las normas básicas de desarrollo del apartado referido a la intervención de los profesores, padres y, en su caso, alumnos, en el control de gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos del artículo 27 de la Constitución deben conformarse por las características esenciales de su desarrollo, conteniendo las grandes opciones de política legislativa. Estas opciones se deberán concretar en principios generales de regulación de la materia, correspondiendo al legislador autonómico su adecuación a la realidad educativa de cada Comunidad. Es decir, el legislador estatal deberá determinar las líneas generales, y éste es el sentido cautelar que concibió la Constitución respecto a esta competencia estatal, debiendo el legislador estatal marcar solamente las líneas fundamentales del sistema de gobierno escolar. En este sentido, las Cortes Generales deberán realizar el diseño general de los órganos de gobierno de los centros, sus atribuciones esenciales, su composición y participación de los sectores, pero este diseño no requiere, por ejemplo, que todos los órganos de gobierno tengan las mismas atribuciones en todos los centros escolares del Estado.

Ésta es la razón de nuestra enmienda competencial. No podemos perjudicar las facultades que tienen las Comunidades Autónomas con competencias plenas en la materia si no dejamos que aquéllas puedan desarrollar éstas atendiendo a sus peculiaridades específicas, siempre que no supongan divergencias radicales con el modelo general estatal —insistimos—, porque estaríamos defraudando en este caso el sentido que quiso dar la Constitución a los preceptos que en su virtud ahora desarrollamos.

Determinar un sistema uniforme y cerrado para todos los centros escolares del Estado nos puede llevar a que, sin reconocer las peculiaridades específicas periféricas, nos

dotemos de un sistema rígido que cree distorsiones en las Comunidades Autónomas y más en aquellas que, atendiendo a la razón de sus competencias, ya se han dotado de los mecanismos adecuados para el control y gestión de los centros públicos estableciendo su propio modelo.

El actual proyecto de ley orgánica debió ser redactado con un respeto estricto a las competencias plenas en la materia de las Comunidades Autónomas, una vez que éstas ya habían establecido su modelo de escuela y no verse atornilladas de nuevo por una nueva ley que ya haya modificado sus planteamientos.

En ese sentido, hemos presentado las enmiendas números 156, 157, 158, 159 y 160, en relación a la función inspectora; la enmienda número 150, que se refiere a las Comunidades Autónomas con lengua propia; la enmienda 167, a la disposición final cuarta bis, y en el mismo sentido la número 162, a la disposición derogatoria única.

En las enmiendas a que hemos hecho referencia, las números 156, 157, 158 y 159, pedimos la supresión de estos artículos en función de la enmienda 160, en la cual proponemos una modificación a la disposición adicional primera del siguiente tenor: «Las Comunidades Autónomas ordenarán su función inspectora de conformidad con lo señalado en la disposición adicional novena del punto 2 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo; y en el Título IV y disposición final tercera de la presente ley.» Esto está en congruencia con la enmienda y la justificación de la disposición final tercera.

A la vez, en la enmienda 150, a la que también hemos hecho referencia, proponemos una adición a la disposición final primera en la que introduciríamos el siguiente texto: «En aquellas Comunidades Autónomas que posean otra lengua oficial además del castellano, se entenderán necesidades de escolarización las derivadas de procesos de normalización lingüística y la demanda educativa en dicha lengua en los términos que establezcan las Administraciones educativas.»

Esta misma dirección de defensa de estas competencias nos obligan a presentar la enmienda número 167, en relación a la disposición final cuarta bis, que modificaríamos en el sentido de incluir una disposición final tercera, con el epígrafe de ámbitos competenciales, que diría: «La presente ley se dicta al amparo del apartado 30 del artículo 149.1 de la Constitución, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas con competencias plenas en las materias de función pública y educación para adecuar a sus peculiaridades específicas, siempre y cuando no supongan divergencias radicales con el modelo general estatal, los cauces de participación en los centros escolares sobre los que ostenten competencias, el régimen jurídico de los órganos de gobierno de estos últimos y las medidas tendentes a mejorar la calidad de la educación a través de la evaluación del sistema educativo y del establecimiento y constitución de la inspección adecuada a tal fin; así como las cuestiones atinentes a la admisión de alumnos, centros concertados y función pública propia.» En este mismo sentido, modificaríamos la disposición derogatoria única y, por la misma razón, hemos propuesto la supresión del ar-

tículo 37, a través de la enmienda número 156, a la que antes nos hemos referido, y la de los artículos 38, 39 y 40, a través de las enmiendas números 157, 158 y 159.

Respecto a la segunda dirección en la cual nosotros planteamos las enmiendas a este proyecto, éstas tratan de perfeccionar la autonomía que se debe garantizar a los centros escolares en cuanto a organización, gobierno y gestión. El texto, procurando una uniformidad para todos los centros docentes públicos, en nuestra opinión, constriñe la autonomía que deben tener éstos y, a su vez, va a limitar la realización del proyecto educativo de cada centro, asunto éste que nos preocupa en tanto en cuanto que la realización del proyecto educativo de cada centro va a ser la mayor garantía del respeto del principio constitucional de libertad de enseñanza y de la intervención en el control y en la gestión de los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos en los centros sostenidos con fondos públicos.

En este sentido, y respecto al Título I, presentamos las enmiendas 126, 127, 128 y 129, referidas a la participación de la comunidad educativa en la organización y gobierno de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, una vez que el texto consagra la participación en los mismos de los profesores, padres y, en su caso, alumnos. No podemos entender la vinculación que se hace del proyecto educativo a las consideraciones del claustro de profesores, cuando el proyecto educativo debería ser aprobado por el Consejo Escolar, máximo órgano del centro, y debería atender no sólo a las consideraciones del mencionado claustro, sino también a las de los padres y, en su caso, de los alumnos. Este precepto parece querer dejar el proyecto educativo en manos del estamento correspondiente a los profesores, dándoles una importancia, a nuestro juicio, desmesurada respecto de los otros dos estamentos y justo en el aspecto más importante, ya que entendemos que el proyecto educativo va ser la finalidad hacia la que todas las acciones del centro deben ir encaminadas directa o indirectamente y el mismo debe ser determinante para la elección del centro docente por parte de alumnos, padres y profesores. De otra parte, si se quiere que la autonomía de los centros docentes sea real en cuanto al gobierno y gestión de los recursos deberán suprimirse las limitaciones que el texto determina en cuanto a recursos de los centros, sus gastos y, a su vez, ampliar la gestión respecto al personal de los mismos.

En cuanto al Título III, el texto ordena los órganos de gobierno de manera uniforme para todos los centros docentes —ya nos hemos referido antes a esta cuestión— y creemos que en ningún caso va a solucionar los problemas que padecen la totalidad de los centros. Da la sensación de que a quien lo propone le da miedo hacer una reforma en profundidad. Así, vemos que regula aspectos que deberían quedar para la autoorganización de los propios centros, cierra la participación de sectores, que sin ser en sentido estricto comunidad escolar, de algún modo inciden o pueden incidir en ella, y no permite desligar la figura del administrador de la del secretario aun a sabiendas de la existencia de centros que por sus dimensiones requieren de la existencia de las dos figuras con funciones diferenciadas.

De otra parte, se vuelve a ponderar el claustro de profesores sobre los demás estamentos de la comunidad escolar y no se permite al Consejo Escolar elegir el director y demás órganos de dicho Consejo fuera de los profesores del centro debidamente acreditados, facultando en estos casos a la Administración educativa competente. No llegamos a entender esta cuestión de que la Administración educativa puede recabar en estos casos a profesores acreditados para el desempeño de las funciones de director no correspondientes al centro escolar. Señorías, esta cuestión es muy importante porque si verdaderamente creemos en la autonomía organizativa de los centros, ¿por qué no son los propios centros los que puedan buscar al profesor acreditado idóneo como director fuera de su propio centro cuando no lo tienen en el suyo propio?

También se nos hace difícil entender el mantenimiento de la mayoría de dos tercios del Consejo Escolar para la revocación de los cargos directivos y, en particular, del director, aun en el caso que se pretende, porque es bueno dar estabilidad a los equipos directivos y creemos que una mayoría de tres quintos daría esta misma estabilidad y a la vez evitaría la existencia de conflictos continuados y el mantenimiento de equipos directivos teniendo la mayor parte del Consejo Escolar en contra de su gestión. Tanta protección va en contra de la autonomía y puede perturbar las actuaciones del Consejo Escolar en cumplimiento de sus funciones.

Las enmiendas números 131 a 147, ambas inclusive, y la número 155 responden a esta filosofía y hemos explicado ya que, respecto del Título IV, reconocemos que el texto que viene a esta Cámara ha sufrido modificaciones que lo hacen más coherente con la regulación que se pretende y, sin embargo, entendemos que la materia que se regula no corresponde a esta ley. Se estima conveniente que para la modificación de la reforma de la función inspectora respecto a la creación del cuerpo de inspectores, acceso al mismo y demás cuestiones inherentes, se deberá acudir a la modificación de la Ley 30/1984 de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, al ser la mencionada Ley su ámbito material natural.

No podemos dejar de señalar que la Administración educativa debe obligarse a financiar el segundo ciclo de educación infantil y que los centros de enseñanzas artísticas deberían tener régimen distinto de organización, ya que tienen unas funciones perfectamente diferenciadas. En este sentido van dirigidas nuestras enmiendas 148, 149, 151, 152, 161, 163, 164 y 165.

No se entiende que no se recojan como necesidades de escolarización a la hora de determinar las preferencias de los centros para acogerse al régimen de conciertos aquellas, insistimos, determinadas por la demanda educativa en lengua distinta del castellano. Ya lo hemos explicado en nuestra intervención inicial al tratar de aquellas enmiendas dirigidas a preservar la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas que tienen atribuida tal competencia en sus Estatutos. Por tanto, pensamos que en aquellas Comunidades que tengan otra lengua oficial, además del

castellano, no puede obviarse dicha lengua a la hora de establecer las necesidades de escolarización y la propia demanda de los implicados, padres y alumnos, en los centros.

Asimismo, pensamos que se deben equiparar los centros públicos a los centros concertados en relación a los salarios del personal docente, así como en la elección y funcionamiento de los órganos de gobierno. Somos partidarios de una profundización en la autonomía de gestión en todos los casos, tanto en los centros públicos, como en aquellos centros concertados cuya financiación se hace a través de los Presupuestos Generales del Estado o de las Comunidades Autónomas correspondientes.

Para finalizar, vamos a exponer la problemática que se ha suscitado en nuestra Comunidad con motivo de los procesos de publicación de las «ikastolas». En este sentido, presentamos una enmienda cuya aprobación estimamos, señorías, vital para el buen fin de su publicación. Ésta es la enmienda número 166.

Como ustedes conocerán, el proceso de negociación y posterior publicación de las «ikastolas» fue un proceso largo, cargado de dificultades, en el que se tuvieron que poner de acuerdo la Administración educativa vasca, los distintos sectores afectados, titulares de centros, personal docente y no docente, ayuntamientos, además de los partidos políticos, que, finalmente, conformamos un pacto escolar.

No vamos a exponer ni a pormenorizar en este momento toda la negociación, que, insisto, fue ardua y difícil, pero el caso es que al día de hoy nos encontramos con la imposibilidad material de poder cumplir con la finalidad que tiene la disposición transitoria sexta de la LOGSE respecto de un colectivo afectado por la misma, que es el personal docente, que, aun teniendo titulación universitaria —insisto, titulación universitaria—, no es la específica para impartir enseñanza en centros de educación infantil y primaria.

Debo insistir en este aspecto porque puede parecer que por la vía de la enmienda que proponemos alguien pudiera pensar que queremos colocar a aquellos profesores que, procedentes de las «ikastolas», entran en el proceso de publicación de las mismas y tienen establecida una posibilidad legal para su acceso, mediante una prueba específica, al sistema educativo público vasco. Debo insistir, pues, en que únicamente pueden realizar esta prueba específica aquellos profesores de «ikastolas» que tuvieron en el momento de publicación previsto por la Ley vasca la titulación de diplomados o licenciados universitarios. Ninguna persona puede, en función de una previa experiencia docente, entrar en la red pública si no es titulada.

La disposición transitoria sexta previó que el personal docente al servicio de los centros escolares que se integraban en la red de centros públicos de la Comunidad Autónoma vasca se integrasen en la función pública docente mediante pruebas específicas. La mencionada disposición no contempló situaciones de excepción, dado que su formulación genérica parecía que podía recoger todas las situaciones del personal docente —por supuesto, diplomado o titulado universitario— al servicio de las «ikastolas». Una lectura actual de la LOGSE parece que obliga a todo

aquel personal docente al servicio de las «ikastolas» a cumplir los requisitos de titulación —en este caso, diplomatura— para acceder al cuerpo de maestros.

En este sentido, quiero comunicar a sus señorías que, precisamente en razón a todos aquellos que intervenimos en su día en ese pacto escolar vasco, precisamente en razón a la notable intervención de un consejero socialista, sin perjuicio de que la negociación de este proceso de publicación que fue muy largo, pasara por las consejerías tanto del PNV como de Eusko Alkartasuna pensábamos que podríamos lograr explicarlo y llegar a una transacción que de alguna manera impidiera que esta situación se reabriese en la Comunidad Autónoma vasca. Esta transacción incluso llegó a ser redactada y parece que el Grupo Parlamentario Socialista estaba de acuerdo en presentarla. No obstante, tenemos que decir que, si nuestras informaciones no son equivocadas, esta transacción no ha podido llegar a buen fin por la posición de veto —insolidario, en nuestra opinión— de Convergència i Unió. En Cataluña un proceso análogo fue cerrado sin la suficiente capacidad negociadora. En el País Vasco no fue así. Fue duro en su momento, pero, como he dicho antes, se consiguió el objetivo de la publicación de las «ikastolas» y, al final, resultó ser un proceso no traumático. Ahora, si se quiebran los acuerdos alcanzados en ese pacto escolar al que he hecho ya varias veces referencia, se abriría de nuevo un conflicto de gran incidencia en la sociedad vasca, por cierto, sobrada, por otra parte, de elementos de confrontación.

Ésta es la razón por la que se presenta la citada enmienda y en la misma no se pretende nada distinto a lo que la LOGSE mantiene en su disposición transitoria quinta, apartado tercero, que permite sustituir el requisito de titulación —insisto, concreta— por la experiencia docente previa, pero con la titulación exigible, en todo caso, a nivel superior. Con esto conseguiríamos dar un trato de igualdad a todo el personal docente proveniente de las «ikastolas» que ha confluído en la red pública vasca y que en una gran parte es licenciado o titulado superior universitario.

Creo que esta exposición, en la que he tratado de sintetizar el sentido de nuestras enmiendas y el carácter constructivo de las mismas, es suficientemente explicativa y espero que sus señorías tomen en consideración lo que se propone, haciendo especial énfasis en esta última enmienda, que no dudo que entenderán y aceptarán.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, para la defensa de las enmiendas 1 a 84, el Senador Nieto.

El señor NIETO CICUÉNDEZ: Señor Presidente, señorías, con la máxima brevedad posible, voy a intentar hacer una exposición, lógicamente genérica, al tratarse de tantas enmiendas, aunque ya, con ocasión de la exposición del veto que hemos debatido anteriormente, se han expresado los motivos y la coherencia de una serie de enmiendas que, independientemente del veto, pretenden mejorar la Ley, o, si no mejorarla, por lo menos no empeorarla.

En estas enmiendas nos referimos a la participación, fundamentalmente y, desde luego, de una manera diferente a como la entiende tanto el proyecto del Gobierno, como el Grupo Parlamentario Popular. Por eso hay motivaciones diferentes y una coherencia del desarrollo democrático, que es lo que planteamos con estas enmiendas.

En nuestra opinión, es en la comunidad educativa donde reside fundamentalmente la participación. Por un lado existe una tendencia que se inclina por que el profesorado, de una manera corporativa, sea el determinante en la orientación de los centros, y por otro lado en el proyecto del Gobierno se percibe un papel de injerencia por parte de la Administración, tanto en el nombramiento de los directores, como al poner trabas en la práctica a la participación, cuando uno de los objetivos fundamentales para nosotros es que esta ley debe situarse, como mínimo, en el marco y en el espíritu de la LOGSE.

Y voy a referirme ahora a una cuestión que ha sido planteada antes por el Senador Iglesias cuando se preguntaba qué entendíamos por contrarreforma.

Señorías, con nuestras enmiendas nosotros pretendemos que se avance en el aspecto participativo y que se mire, por tanto, hacia adelante y no hacia atrás. Ahora bien, se nos dice que este proyecto de ley es una contrarreforma. ¿Y qué es una contrarreforma? Pues en este caso es una marcha hacia atrás. Es decir, es Trento de alguna manera, pero si esto que digo les parece muy duro, diré que es un proyecto regresivo en comparación con lo que anteriormente ya se había conseguido. En todo caso, el dogmatismo —como se ha dicho aquí— es, efectivamente, el de la Ley Pertierra. Es decir, Pertierra, además de hacer una Ley regresiva y dogmática, tiene como premio, lógicamente, el Ministerio de Defensa.

Indudablemente, el tema de fondo que nosotros planteamos, aunque sin ninguna ilusión visto el debate y los componentes del mismo —legítimos todos, aunque luego eso se paga con la incoherencia en tantas cosas—, es que, sobre la base de conseguir el acuerdo —repito que legítimo— con los Senadores de Convergència i Unió y con los del grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, lo cierto es que se rechazan todas las enmiendas, cuando resulta que los compañeros del Grupo Socialista, que lógicamente tienen vinculación con los sindicatos, saben que éstos están radicalmente en contra de esta ley. Pero como en aras de una correlación determinada de fuerzas siempre se está mirando hacia una misma sensibilidad, resulta que se hace ese acuerdo con los compañeros de Convergència i Unió, y en este caso también con los del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, con lo cual repito que al final también eso se pagará puesto que estaremos permanentemente chalaneando con modelos de Estado, etcétera, cosa que nada tiene que ver con lo que en la práctica y en la realidad debe ser la configuración de un Estado español, soberano, solidario, etcétera. Es decir, que se van introduciendo una serie de cuestiones en función de correlación de fuerzas y, por supuesto, en sentido regresivo, señor Iglesias.

En cuanto a la sensibilidad de sus Senadores, que consulten con los sindicatos sean del signo que sean. Comisio-

nes Obreras, UGT, todos ellos están radicalmente en contra de cómo se plantea el problema de la participación.

Señores, repito que si no se aceptan todas estas enmiendas de mejora lo que vamos a conseguir es sacar una ley que tendrá radicalmente en contra a la comunidad educativa, comunidad que es la que, en definitiva, tiene que aplicarla.

Señores, aunque ustedes no acepten ninguna de estas enmiendas, nosotros las vamos a mantener. Explique usted todo eso a la comunidad educativa de este país.

Nada más, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Nieto Ciucédez.

El representante del Grupo de Coalición Canaria tiene ahora la oportunidad de defender sus enmiendas números 96 a 122.

El señor RÍOS PÉREZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Por no repetir lo que ya dije en mi intervención a propósito del debate sobre el veto, voy a ser lo más breve posible intentando sintetizar al máximo las enmiendas de mi Grupo que permanecen vivas.

En cuanto al Título I del proyecto, referente a la participación en los centros, precisamente el apartado 2 del artículo 2 ha dado lugar a una enmienda consensuada en relación con la presencia también de personal de las administraciones y servicios a efectos de la participación en los centros educativos que consideramos insuficiente.

La progresía no está vinculada al Partido Comunista. La progresía es, simplemente, un intento de mejorar nuestras propias estructuras.

En relación con la intervención de la Administración Local, es indudable que sería interesantísimo que pudiéramos involucrar de verdad a los ayuntamientos en la realidad de cada día, es decir, en su participación en los centros educativos. Por eso hemos presentado la enmienda número 97.

Nuestra enmienda número 98 se refiere a una mayor capacidad de autonomía en los recursos y a la forma de aplicar éstos en los centros.

Éstas son las enmiendas que hemos presentado al Título I.

Pasando ya a nuestras enmiendas al Título II, quisiera decir que hacemos especial hincapié en la número 99, que está en relación con que los centros superiores de enseñanzas artísticas están un poco a caballo —como saben ustedes— entre la educación universitaria y la no universitaria a efectos de organización. Establecemos, por tanto, que todo ello debería regularse a través de lo que se reglamente en las respectivas administraciones educativas.

Igualmente, solicitamos en nuestra enmienda número 100 una ampliación de competencias de los Consejos escolares, que podrán hacer propuestas a la administración educativa, para que con sus indicadores puedan completar esa evaluación.

En este mismo sentido va nuestra enmienda número 101. Solicitamos un aumento de participación en la evaluación de los centros.

Comentaré ahora todo un paquete de enmiendas en relación con la dirección de los centros educativos, y fundamentalmente y como caballo de batalla la acreditación previa para ser elegidos o designados. Tal y como está planteada en este proyecto de ley, creo que no tiene futuro por cuanto se producirá una desmotivación por parte del profesorado en este sentido. De aplicarse esta acreditación en profundidad, puede llevarnos a un cuerpo de directores que resultaría contraproducente.

Este paquete abarca las enmiendas números 102 a 107.

En cuanto a la número 108, se refiere a añadir después de «mandato» la expresión «... o al producirse las circunstancias de traslado voluntario o forzoso...», en relación con otras circunstancias en que pueda encontrarse el profesorado.

Pasamos al Título III, de la evaluación. A este Título también presentamos unas enmiendas con las que intentamos aumentar la participación, que no intervenga solamente el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación sino que también puedan intervenir en la misma otros órganos. Se trata de las enmiendas números 109 y 110.

Con la número 111 intentamos que más de una vez al año, los centros puedan intervenir en la evaluación.

Pasamos por fin al Título IV, al que presentamos una serie de enmiendas todas ellas en función de nuestro rechazo a la formación del Cuerpo de inspectores. Por tanto, todas ellas están en relación con la formación, requisitos, oposiciones, prácticas, etcétera.

La enmienda número 120 se refiere al modo en que se debe organizar la inspección. Indicamos en ella que las administraciones educativas, en el marco de sus competencias, desarrollarán la estructura y no solamente el funcionamiento.

Y llegamos ya a las disposiciones adicionales. Solicitamos que se añada un punto 2 a la disposición adicional cuarta referido a los centros superiores de enseñanzas artísticas a los que aludí al principio de mi intervención. Intentamos que, de acuerdo con el régimen especial que cada administración educativa competente pueda llevar a cabo, debido a las profundas diferencias que existen entre unas y otras disciplinas, se pueda conseguir, además, una mayor flexibilidad en la contratación así como también en la forma de estructurar esas enseñanzas.

También solicitamos que se añada una disposición adicional novena en concreto para las enseñanzas de música y danza.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ríos Pérez.

A continuación el Grupo Parlamentario Popular defenderá sus enmiendas integradas en el voto particular número 4.

Para su defensa tiene la palabra el señor González Caviedes.

El señor GONZÁLEZ CAVIEDES: Señor Presidente, Señorías, dado que hemos defendido una enmienda de veto y que creo que ha quedado bien marcada la filosofía

del partido Popular en el proyecto de esta ley orgánica de participación, evaluación y gobierno de los centros docentes, me voy a limitar brevemente a exponer las enmiendas que hemos presentado, únicamente con la intención de mejorar en la medida de lo posible esta ley. *(El señor Vicepresidente Ortí Bordás ocupa la Presidencial.)*

A la exposición de motivos hemos presentado siete enmiendas correspondientes a las números 168 a 174, a excepción de la 170, que fue admitida en Comisión, donde pretendemos sentar las bases de las modificaciones que posteriormente vamos a proponer al articulado de la Ley.

En la enmienda número 168 creemos que se debe de partir de la libertad de enseñanza, y por tanto no se debe hacer una interpretación sesgada, por parcial, del tema de la libertad, teniendo en cuenta, además, que surge precisamente de un mandato constitucional. En la enmienda número 169, de admitir la 168, lógicamente tendríamos que referirnos a tales derechos.

En la enmienda número 171 abogamos por reforzar las funciones encomendadas al Consejo escolar, pero a la vez proponemos también que se potencie y se prestigie el claustro de profesores, quedando bien claro que sin menoscabo de las competencias que pueda tener el Consejo escolar.

En la enmienda número 172 abogamos por la no intervención de la administración educativa en la acreditación, y en la misma línea estamos en contra de la designación.

Pasamos, por último, a la enmienda número 174, donde abogamos por el Cuerpo Superior de Inspectores de Educación, a la vez que hablamos de los requisitos necesarios para acceder al mismo Cuerpo.

En el Título I mantenemos seis enmiendas, unas van encaminadas a mejorar técnicamente el texto y las otras marcan nuestra postura en este título, y me estoy refiriendo especialmente a las enmiendas números 177, 178 y 181.

Con la enmienda número 177 proponemos que las administraciones educativas regulen el modo en que se hará público el proyecto educativo de cada centro y establezcan medidas que faciliten la libre elección por parte de los alumnos o de sus padres o tutores. Pretendemos evitar la posible imposición de proyectos educativos por parte de la administración educativa, con detrimento de la libertad de la enseñanza.

En la enmienda número 178, al artículo 6.3, nuestra postura queda clara, pretendemos que los proyectos educativos de los centros surjan de la libertad educativa a la que hacíamos referencia en la exposición de motivos, libertad educativa que está consagrada en la propia Constitución.

En la enmienda número 181 pedimos que el director, en el ejercicio de la autoridad derivada de su cargo, asuma la responsabilidad de la gestión de los recursos que la administración educativa pone a su disposición. Manifestamos nuestra postura en contra a que la dirección del centro dependa de la administración educativa y que ésta pueda unilateralmente delegar competencias en los órganos de gobierno de los centros.

En el Título II hemos presentado veintisiete enmiendas, las comprendidas entre las números 182 y 209, a excepción de la número 195, que fue aceptada en Comisión.

Con las enmiendas número 182, 184 y 185 pretendemos una mejora en la redacción del texto, por tanto, son enmiendas de carácter técnico. Con la enmienda número 183 entendemos que puede incluirse la Junta de delegados estudiantiles como órganos de gobierno en los centros docentes públicos. En la enmienda número 186 proponemos que, a propuesta del claustro, se aprueben las directrices para la elaboración de este proyecto educativo.

La enmienda número 187 va encaminada a potenciar el claustro de profesores en la elección del Director, teniendo en cuenta que es precisamente este director el que preside el claustro, sin detrimento, y queremos que quede bien claro, de las competencias que tiene el Consejo Escolar.

De acuerdo con las propuestas marcadas en las enmiendas número 186 y 187, por coherencia, proponemos las modificaciones oportunas en el artículo 15, reconociendo responsabilidades del claustro. Éste es el objetivo de estas enmiendas número 189 y 190.

Al Capítulo III, que trata de la dirección de los centros públicos de este Título II y que consideramos como uno de los capítulos más importantes de este proyecto de ley, pues no nos cabe la menor duda de que una dirección eficaz constituye un factor determinante en el buen funcionamiento de los centros, van dirigidas la mayor parte de las enmiendas del Título II. Por supuesto, tenemos un concepto distinto de la elección del director, que consideramos que debe ser elegido por el Consejo Escolar, de acuerdo con lo previsto en esta ley, y nombrado por la administración educativa competente. Rechazamos, por tanto, la necesidad de la acreditación. Esta elección será por mayoría absoluta de los miembros del Consejo Escolar del centro. Si en la primera votación nadie obtuviera esa mayoría absoluta, se procederá a una segunda votación, y serán elegidos aquellos que tengan una mayoría aunque sea simple de votos. Éste es el objeto de la enmienda número 192. Pretendemos, por tanto, evitar que este nombramiento se pueda hacer, incluso por cuatro años, a dedo por la Administración, con profesores que ni siquiera forman parte de ese centro y que pueden venir de fuera por lo que ni siquiera podemos saber con qué número de votos podrían contar.

El Director ostenta oficialmente la representación del centro, sin perjuicio de los deberes que el cargo pueda entrañar en sus relaciones con la Administración, pero entendemos que no representa a la administración educativa. Éste es el objeto de la enmienda número 204, y tanto en la elección del Director como en la del Jefe de estudios y el Secretario, así como su cese, debe jugar un papel importante el claustro de profesores.

El resto de las enmiendas del Capítulo III del Título II van encaminadas a modificar o suprimir todo aquello que se oponga a la filosofía que acabamos de exponer con respecto a la dirección de los Centros.

Al Título III, que habla de la evolución, hemos presentado dos enmiendas: en la 210 solicitamos sustituir el término «desarrollo profesional» por el de «promoción profesional» por entender que es un término quizá más correcto y apropiado. En la 211, de modificación al artículo 34, proponemos la filosofía que entendemos se debería de tener

en cuenta a la hora de la evaluación para intentar llevar a cabo una evaluación seria y completa, y no excluir aspectos importantes que creo que hay que considerar. Ése es precisamente el sentido que damos a la modificación de ese artículo 34, a la evaluación del sistema educativo.

En el Título IV, que trata de la inspección educativa, mantenemos 16 enmiendas, a través de las cuales, además de marcar nuestra tesis y postura con respecto a la inspección educativa, pretendemos una reordenación sistemática de todo este Título, que dividimos en tres Capítulos: en el Capítulo I hablamos de las funciones de la inspección educativa. La enmienda número 213, de modificación al artículo 36, propone una nueva redacción que mejoraría el texto, y a través de las enmiendas número 214, 215 y 216 proponemos, en coherencia con el nuevo contenido propuesto, la creación del Cuerpo Superior de Inspectores de Educación, cuyos miembros ejercerán las funciones que en esta ley se atribuyen a la inspección educativa, preferentemente en los niveles educativos, programas y especialidades para las que estén más cualificados. Para acceder a este Cuerpo será necesario contar con seis años de ejercicios efectivos en la docencia en centros de cualquier nivel educativo. Si se quiere una inspección técnica permanente, independiente y profesional, es prioritario la creación de este Cuerpo de Inspectores.

Del acceso al Cuerpo Superior de Inspectores de Educación trataría la enmienda número 217. Entendemos que tiene que ser a través de un concurso-oposición, teniendo en cuenta y respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad, pero no pasarían al concurso en tanto en cuanto no hubieran pasado primero el trámite de la oposición. Todo ello va encaminado a conseguir una inspección educativa de calidad, garantizando la especialización y los conocimientos de quienes la lleven a cabo.

El Capítulo III de este Título va dedicado a la alta inspección para cumplir el objetivo que se marca precisamente en la LODE.

En las disposiciones adicionales mantenemos ocho enmiendas. En la enmienda número 228, de modificación a la disposición adicional primera, proponemos que los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa, creado por la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, queden integrados en el Cuerpo Superior de Inspectores de Educación. Todo ello en reconocimiento a su mérito y capacidad, ya demostrados para realizar de modo especializado las funciones de Inspección.

A la disposición adicional primera hemos presentado también la enmienda número 229 en la que proponemos que los funcionarios de cuerpos docentes que hayan accedido a la función inspectora, de conformidad con las disposiciones anteriormente marcadas de la Ley 30/1984, podrán acceder al Cuerpo Superior de Inspectores de Educación mediante la realización de un concurso-oposición que será restringido. Estos funcionarios, los que hayan sido nombrados para un período de tiempo definido y que no hayan completado dicho plazo, podrán continuar ejercitando dichas funciones hasta que llegue a su término, con lo cual evitamos perturbaciones en las tareas de la inspec-

ción. Éste es precisamente el objeto de la enmienda número 230.

A través de las enmiendas números 231 y 232 proponemos que la administración educativa garantizará la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales, pero, desde luego, en centros que dispongan de medios humanos y materiales para poder atender esas necesidades que tienen los propios alumnos a los que hay que escolarizar.

En cuanto a la educación infantil, al menos en el segundo ciclo, entendemos que debe ser gratuita, para lo cual se propone la posibilidad de firmar convenios entre los centros privados sostenidos con fondos públicos y la Administración educativa, especialmente allí donde exista insuficiencia de plazas en centros estatales; esto creo que se ha venido persiguiendo a través de las distintas leyes, es decir, intentar que efectivamente la educación infantil en el segundo ciclo tenga carácter gratuito.

A las disposiciones transitorias mantenemos la enmienda número 236, mediante la que rechazamos la creación del Cuerpo de Candidatos a Directores Escolares, y la enmienda número 238 que hace referencia a la creación de una comisión de estudio entre la Administración Educativa y los empresarios de Centros concertados para hacer una evaluación y determinar el coste real de los puestos de trabajo, evitando, de esta forma, las diferentes interpretaciones sobre este particular.

Por último, a las disposiciones finales hemos presentado cinco enmiendas. En la enmienda número 239 pretendemos que el gasto por alumno sea igual en los centros públicos que en los de iniciativa social, de aquí que a la hora de computar dichos gastos deban computarse también las amortizaciones e intereses de capital propio.

La enmienda número 240 es de adición a la disposición final primera y pretendemos la equiparación real entre las cantidades percibidas por el profesorado de los centros concertados y los estatales.

Las enmiendas números 241 y 242 hablan del carácter de las actividades extraescolares complementarias, que entendemos que no deben tener un carácter lucrativo y que el cobro de cualquier cantidad debe estar aprobada previamente por el Consejo escolar del centro y comunicado a la Administración educativa.

La enmienda número 243 es de supresión y hace referencia al Cuerpo de profesores de escuelas oficiales de idiomas.

Repito que con estas enmiendas, ya que no se ha admitido el veto, pretendemos que se pueda mejorar esta ley para lograr que la participación, la evaluación y el gobierno de los centros sea una realidad.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señoría.

Para turno en contra, el Senador Herranz Martínez tiene la palabra.

El señor HERRANZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Nos vamos a repartir el turno en contra de las enmiendas que han defendido los diferentes Grupos políticos: yo me encargaré de la Exposición de Motivos hasta el Título II incluido y el Senador Juan Iglesias hará la parte correspondiente al resto del proyecto de ley.

El Grupo Parlamentario Socialista va a rechazar las enmiendas que como votos particulares mantiene el Grupo Parlamentario Popular a la Exposición de Motivos, en primer lugar, porque este proyecto de ley trata concretamente del derecho a la educación y no de otros derechos, tal y como se recoge en el artículo 27 de nuestra Constitución, en el que también se hace referencia a otros extremos relacionados con este derecho. Por lo tanto, entendemos que no tienen sentido las enmiendas que se presentan con respecto a este apartado.

En segundo lugar, el Consejo escolar, como órgano de participación en los centros de enseñanza de todos los sectores de la comunidad educativa, no quita protagonismo ni competencias a otros órganos colegiados y en concreto al claustro. Para nosotros es una expresión innecesaria la de la enmienda y, por tanto, vamos a rechazarla.

Este proyecto de ley determina la elección del director, los requisitos y acreditación para ejercer la dirección del centro, mejorando la realidad actual, por lo que no podemos admitir que se hagan valoraciones negativas con respecto a este procedimiento y tampoco que se supriman aspectos fundamentales del proceso, como ya señalaremos más adelante.

Finalmente, también votaremos en contra de la enmienda número 174 a la Exposición de Motivos, ya que trata de la creación de un hipotético cuerpo superior de inspectores que no queda reflejado como tal en el proyecto de ley.

El texto del dictamen que vamos a debatir en la parte correspondiente al Título I fomenta la participación en el gobierno de los centros educativos, incrementando de forma importante el papel que tiene asignado el Consejo escolar y el Claustro, y da más protagonismo a las asociaciones de padres que funcionan en los centros de enseñanza. Dota, además, de mayor autonomía a los centros docentes, tanto en la definición del proyecto educativo, como en la gestión de los recursos económicos. (*El señor Vicepresidente Rigol i Roig ocupa la Presidencia.*) Este proyecto de ley va a posibilitar que todos los centros públicos puedan tener los recursos suficientes para garantizar una enseñanza de calidad en condiciones de igualdad para todos los alumnos, que cada uno de los centros realice su propia oferta educativa y haga público su proyecto educativo, para que, puesto en conocimiento de la sociedad, de los padres, de los profesores y de los alumnos, puedan optar por uno u otro centro.

Por estas razones el Grupo Parlamentario Socialista va a rechazar todas las enmiendas que se han presentado a este Título por parte de los distintos Grupos políticos. Ofrecemos una transaccional al Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la base de la enmienda número 2 al artículo 2.2 para que las administraciones educativas regulen el procedimiento con el fin de que uno de los representantes de los padres en el Consejo

escolar sea designado por la asociación de padres más representativa del centro y, asimismo, las Administraciones educativas refuerzan la participación de los alumnos y alumnas a través del apoyo a sus representantes en el Consejo escolar, parecida a una enmienda que presenta también el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Este principio con carácter general hace innecesario el apartado 4 del artículo 10 que, a nuestro entender, debe ser suprimido.

Votaremos en contra de las enmiendas presentadas al artículo 6 en sus distintos apartados, ya que algunas contienen, a nuestro entender, precisiones innecesarias que ya están reflejadas en el texto del proyecto y porque obviamente el proyecto educativo que elaborará y aprobará cada centro se hará teniendo en cuenta los principios generales del sistema educativo, y en los centros concertados se incluirá indudablemente el ideario del centro que no se contraponen, a nuestro entender, con su carácter propio. Por estas razones las enmiendas que ha presentado a este artículo el Grupo Parlamentario Popular las vamos a rechazar.

El Grupo Parlamentario Popular, al igual que Izquierda Unida, han presentado otro grupo de enmiendas al artículo 7.

En cuanto a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular —y me refiero a él porque los otros grupos políticos no han aludido a este aspecto—, entendemos que el artículo concreta la responsabilidad de la gestión de los recursos económicos en el director, lo que no supone menoscabo de su representatividad.

El Título II, referente a los órganos de gobierno de los centros docentes públicos, es, a nuestro entender, uno de los más importantes de este proyecto de ley. La participación democrática de la comunidad escolar en la gestión de estos centros ha supuesto un importante progreso, con un mayor acercamiento de éstos a la sociedad y, en este sentido, han mejorado la calidad de la enseñanza. A nuestro entender, hay que mejorar este logro irrenunciable de nuestro sistema educativo, y eso es lo que pretende este Título, tanto en lo que se refiere al Consejo Escolar como al Claustro de Profesores y a la Dirección de los centros.

Para justificar el rechazo que el Grupo Parlamentario Socialista hace a las enmiendas presentadas por los distintos grupos políticos, voy a intentar contestar a aquellas intervenciones que se han reflejado en este Título, sin hacer referencia puntual a cada una de las enmiendas, sino que las agruparé por bloques.

Votaremos en contra de todas las enmiendas que se refieren a la composición y competencias del Consejo Escolar, así como de las que lo hacen al claustro de profesores y a su participación. Rechazamos todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular que se ocupan de las funciones del claustro y del Consejo Escolar porque no permiten la participación e implicación de todos los sectores de la comunidad escolar en la elaboración del proyecto educativo del centro.

Antes de debatir las enmiendas a los artículos 17 y 26 de este proyecto de ley, dedicados a la dirección de los centros, permítanme una breve reflexión para explicar nuestra posición y rechazo.

El Grupo Parlamentario Socialista comparte el modelo de dirección recogido en este proyecto de ley porque crea unos equipos directivos con mayor capacidad de gestión y de dirección de los centros y da estabilidad y profesionalidad a los órganos de dirección, aspectos que, indudablemente, mejorarán la calidad del sistema educativo.

En el texto del dictamen se proponen estos cambios sin modificar la participación democrática de la comunidad educativa en la elección del director a través del Consejo Escolar, tal y como está establecido por la LODE. El director así elegido será nombrado por un período de cuatro años. Por tanto, este proyecto de ley, además de fomentar la elección democrática de los directores, incentiva la profesionalización de los equipos directivos para que éstos sean más eficaces, estén mejor preparados y se pueda producir un reconocimiento de su gestión, tanto desde el punto de vista profesional como económico, motivos que favorecerán una mayor afluencia en la presentación de los candidatos a directores y una mayor calidad de la enseñanza.

Creemos que son razones suficientes para rechazar las enmiendas que han presentado los diferentes grupos políticos a estos artículos, puesto que entendemos que si incorporáramos las enmiendas propuestas desvirtuaríamos totalmente el sentido del dictamen aprobado en Comisión.

Nos parece, además, que el sistema de acreditación por parte de la Administración es el más adecuado, riguroso y objetivo. Es un sistema que será suficientemente conocido por los profesores, que contarán con unos criterios por los que han sido acreditados los candidatos a directores, y que estas condiciones serán conocidas por el Consejo Escolar, que es el órgano que votará en última instancia al director.

El Grupo Parlamentario Popular critica la acreditación que deben tener los candidatos a la dirección, aunque indirectamente pretende que la acreditación la dé el claustro de profesores. A nuestro entender, esto corporativizaría en exceso el sistema.

Me referiré brevemente al resto de las enmiendas, entendiendo que lo que pretende el Grupo Parlamentario Popular, tanto con respecto al Consejo Escolar como al claustro de profesores, son enmiendas que no podemos aceptar, ya que lo que queremos es dar estabilidad a los equipos directivos para que funcionen mejor los centros y porque, a nuestro entender, el claustro siempre tiene una participación importante. Como ya se ha dicho en la exposición de motivos, los profesores del equipo directivo son componentes del claustro. Pero, además, sería una temeridad que el director y el equipo directivo no contaran con el apoyo, el conocimiento y las críticas del claustro para realizar sus funciones.

Las competencias del Consejo Escolar y del claustro de profesores quedan reforzadas en el proyecto; simplemente hay que leer el texto, en especial lo que se refiere al proyecto educativo. Pero nosotros entendemos que tanto los padres como los profesores y los alumnos tienen que participar en igualdad de condiciones a la hora de elegir y de cesar al director, al igual que a su equipo directivo, porque éste es el sistema participativo y democrático que defendemos.

El Grupo Parlamentario Popular mantiene que el director sólo debe representar al centro. Desde nuestro punto de vista, el director debe ser el representante del centro y de la Administración educativa, porque el centro está conectado e inmerso en el sistema educativo. Un centro debe funcionar con autonomía de gestión, con autonomía en la elaboración del proyecto educativo, con autonomía en la utilización de los recursos económicos, entre otros. En este sentido, el director debe ser el representante del centro, pero también debe ser el representante de la Administración educativa a la que éste pertenece.

Muchas gracias, señor Presidente. He terminado la parte correspondiente al Título II y, ahora, el compañero Juan Iglesias hablará de los títulos restantes.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Herranz.

Tiene la palabra el Senador Iglesias Marcelo.

El señor IGLESIAS MARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.

Intervengo muy brevemente para consumir un turno en contra de las enmiendas que los grupos parlamentarios han presentado a los Títulos III, IV y disposiciones del proyecto de ley que estamos debatiendo.

Hay una razón de fondo para oponernos a la aprobación de estas enmiendas, y es que, a través de todas ellas, los grupos parlamentarios y los Senadores enmendantes proponen alternativas radicalmente diferentes de lo que configura, como instrumento técnico al servicio de la tarea de la educación, el proyecto de ley que estamos contemplando. Plantean una opción distinta de lo que son la función y los cargos directivos, una visión distinta de lo que es la evaluación del sistema educativo, de los centros, de los profesores, y también presenta una opción diferente de lo que es la Inspección y, en algún caso, pretenden añadir una nueva regulación de la función de la alta Inspección, que reconoce la LOGSE. Y como el planteamiento global de esos instrumentos técnicos es radicalmente diferente, salvo en alguna cuestión puntual, nuestra posición es de rechazo respecto de estas enmiendas que los grupos parlamentarios han presentado. Me referiré concretamente a algunas de las enmiendas que sus señorías han defendido en la tribuna —no a todas ellas pues, naturalmente, es imposible—, que tienen una significación mayor y que pudieran ejercer una cierta función pedagógica respecto de la Cámara para entender el significado del debate que puede sonar como excesivamente técnico y difícil de entender para quienes no hayan seguido puntualmente el debate en la Ponencia, en la Comisión y en el Congreso de los Diputados.

Me referiré ahora a las enmiendas que la Senadora De Boneta ha defendido en la tribuna. Hay una enmienda de carácter global sobre la regulación de la inspección que quiere suprimir este proyecto de ley sin plantear ninguna alternativa, por entender que el sitio de esa regulación no es este proyecto de ley, sino una Ley, análoga a la de agosto de 1984, Reguladora de la Función Pública.

Tiene razón en parte. Efectivamente, los inspectores son funcionarios públicos y su función y su estructura or-

gánica puede regularse en otro sitio, pero no es inconveniente, ni imposible ni incoherente que esa regulación se haga en una ley que trata de la organización de los centros docentes y de su evaluación. Naturalmente, en todo ello la Inspección de Educación tiene un papel relevante. Por lo tanto, no está de más, no es ociosa su regulación en esta ley. Nosotros preferimos que se regule esta cuestión.

Para contestar a todas las enmiendas que sobre inspección se han planteado por todos los grupos parlamentarios, les diré que hay dos cuestiones fundamentales que atender y que resolver sobre la inspección. Hay dos temas esenciales y diferentes entre sí a los que hay que dar contestación. La primera cuestión sería la de dilucidar el carácter temporal, transitorio o estable de la función de inspección, si la función de inspección ha de realizarse de un modo estable o ha de realizarse de un modo temporal y transitorio como decía la Ley de 1984. La segunda cuestión sería saber qué estatuto orgánico deben tener esos inspectores que ejercen esa función y cuál es su estructura orgánica que sería, evidentemente, diferente a la de las funciones que realizan. No será ocioso recordar a sus señorías que no hay ninguna función que sea propiedad exclusiva de un cuerpo de funcionarios. Los Cuerpos de funcionarios no son propietarios de las funciones; aunque les sean encomendadas la realización de determinadas funciones no tiene por qué ser necesariamente así y con mucha claridad se establece en la legislación que está vigente en estos momentos.

Vincular la eficacia de la función con el estatuto orgánico de los funcionarios es una extrapolación absolutamente sin fundamento. El carácter orgánico de un grupo de funcionarios y la eficacia de la función que ejercen no tienen por qué estar exclusiva y necesariamente vinculados. Se puede hacer bien una función sin tener un estatuto orgánico específico y se puede tener un estatuto orgánico específico y hacer muy mal la función que está encomendada, de manera que hay que separar rigurosamente las dos cuestiones porque son diferentes.

Respecto de la primera cuestión, si la función de inspección ha de ser temporal o estable, hemos de decir que los inspectores de educación deben tener estabilidad en el ejercicio de su función. ¿Por qué? Hay una razón convincente. De las dos funciones esencialmente consideradas que ejercen los inspectores, la de asesoramiento a los padres, a los centros y a los profesores no afecta a la estabilidad o temporalidad en absoluto. Pero la segunda función sí, porque la segunda función es la de supervisión y control. Las dos funciones son esenciales a la función inspectora. Los inspectores asesoran, ayudan, promueven, incentivan, estimulan una función. Los inspectores controlan, supervisan, detectan regularidades o irregularidades. Esa función de control, esa función de supervisión, en la hipótesis de los inspectores de ida y vuelta con carácter temporal, inspectores que son hoy inspectores y mañana profesores de este mismo centro, se ve gravemente dañada. Esto lo prueba la experiencia que tenemos de estos años de ejercicio de la función inspectora. Por lo tanto, se precisa la estabilidad en el ejercicio de la función inspectora, aunque haya conexión porque todos los inspectores proceden de la función docente. Ahora bien, estos inspectores estables,

¿qué estatuto orgánico requieren? Ésta es la segunda cuestión.

En el proyecto de ley se hablaba de categoría de inspección y ahora el proyecto de ley habla de Cuerpos de Inspectores de Educación, estatuto orgánico que resuelve determinados problemas de carácter orgánico, funcional, no del carácter funcional que tienen los inspectores de educación, problemas dignos de ser considerados y resueltos. Ésa es la razón por la que este proyecto de ley contempla la creación de un Cuerpo de Inspectores de Educación, no porque pensemos que con eso la función inspectora va a resultar mejorada, que en uno de sus aspectos sí lo será, en la función de control, sino porque hay problemas orgánicos que estos inspectores han planteado a lo largo de los últimos diez años que requieren una contestación positiva por parte de la legislación. A eso es a lo que responde este proyecto de ley que intenta resolver problemas que están vivos hoy en el ejercicio de la función inspectora y de los funcionarios.

La Senadora De Boneta presenta una enmienda en la que ha hecho un especial hincapié, la número 166. Fuera de cualquier contexto, nos parece una enmienda razonable y hemos estado estudiando una posible transacción sobre ella. Si olvidamos que esa enmienda puede tener repercusiones en otros ámbitos competenciales diferentes, y por lo tanto, reducida a sus propios términos, podría ser apoyada o votada mediante una transacción. Pero se plantea un problema y es que esa enmienda supone un agravio comparativo con otras Comunidades que han resuelto de manera diferente el mismo problema que quieren resolver para la administración educativa vasca que plantearían automáticamente contenciosos de funcionarios que no han visto atendidas sus reivindicaciones en el mismo sentido.

La posibilidad de que se abra un campo de agravios comparativos y, por lo tanto, de que haya funcionarios de otras administraciones educativas que se vean lesionados por el reconocimiento que esa enmienda podría introducir en este proyecto de ley, es la razón por la cual nosotros vamos a votar en contra de esa enmienda.

Las enmiendas presentadas por el Senador Nieto, de Izquierda Unida, que ha hecho una defensa muy rápida de ellas, tampoco vamos a apoyarlas. No compartimos su criterio sobre la supresión del Título III que alude a la evaluación. Nosotros creemos que lo que contempla el proyecto de ley es suficiente en un tema extraordinariamente delicado y difícil. La evaluación del sistema, la evaluación de los centros, la evaluación de los profesores y evaluación de los cargos directivos es un tema extraordinariamente difícil, pues, como dicen sus señorías, hay un déficit histórico en el sistema educativo español. Por lo tanto, hay que proceder con pasos contados en este tema para hacer lo que es posible y conveniente y no querer ir demasiado lejos.

De todos modos, no deja de sorprender, y hay que decirlo públicamente, que quieran que los resultados de la evaluación no sean públicos. Es una hipótesis sorprendente que cuando se evalúa algo del sistema educativo los resultados no se hagan públicos, lo cual no tiene ningún sentido, y lo que resulta más sorprendente todavía es que se nieguen a que los resultados de la evaluación tengan

algo que ver con el desarrollo profesional de los profesores. Evaluar a un profesor no tiene nada que ver con su desarrollo profesional. Los buenos profesores no recibirán el mérito de sus actos. Los malos profesores no recibirán el demérito de sus actos. ¿Qué sentido tiene eso? La evaluación siempre tiene consecuencias para el sistema educativo y para las personas y esperemos que sean consecuencias favorables para éstas. Por tanto, no se puede desvincular el resultado de la evaluación de la carrera, el desarrollo profesional de los profesores.

También hay un grupo de enmiendas curiosas —las números 45, 50 y 55—, con las que Izquierda Unida quiere establecer el compromiso obligatorio para todas las Administraciones educativas competentes de tomar decisiones presupuestarias para corregir los resultados deficientes que la evaluación haya puesto al descubierto. A nosotros nos parece bien que la evaluación tenga resultados en cuanto a las Administraciones educativas se refiere para mejorar los aspectos deficitarios, porque para eso sirve la evaluación. Si no sirviera para eso, no serviría para nada y, por tanto, está bien que eso se conecte.

Pero lo que está mal es que su señoría quiera que ese compromiso se establezca con carácter obligatorio desde esta ley para todas las Administraciones educativas competentes, lo que sería una invasión de las capacidades de decisión de las Administraciones educativas que rebasa absolutamente cualquier medida. Nosotros no podemos establecer la obligación de que, por ejemplo, las Administraciones educativas Catalana, del País Vasco, de Galicia, o de Canarias, hagan determinadas previsiones presupuestarias. Insisto, no las podemos obligar. Eso es absolutamente imposible. Recomendamos que se haga, pero no podemos obligar a que se tomen esas medidas.

Hay un grupo de enmiendas con cuyo fondo estamos conformes. Estamos de acuerdo con lo que establecen, pero no con que haya que tratarlo en esta ley; por ejemplo, el compromiso del mantenimiento del empleo, la jubilación anticipada de los profesores de la enseñanza concertada, o el compromiso de establecer un lenguaje no sexista en la educación. Todos esos objetivos son plausibles, son convenientes, merecen apoyo y aplauso, pero es evidente que nada tienen que ver con lo que estamos estableciendo en esta ley. Así, los profesores de la enseñanza concertada están regidos por la Seguridad Social de carácter general laboral, no son funcionarios públicos y, por tanto, lo que se propone tendría que establecerse en una norma que no pertenezca al ámbito de esta ley. Es, pues, un añadido que está fuera de lugar.

En cuanto a los planteamientos del Grupo de Coalición Canaria, he contestado a su posición sobre la Inspección, en general, haciendo un razonamiento sobre el contenido de la ley respecto de la Inspección educativa, intentando que se viera con claridad cuáles son las funciones y las respuestas que damos a los problemas de la Inspección. Pero no compartimos la visión que ustedes presentan, y ésa es la razón por la que votaremos en contra de sus enmiendas, reconociendo que tienen todo el derecho del mundo a presentar y defender un modelo instrumental diferente. En este caso no estamos manteniendo discusiones de fondo,

sino discusiones de instrumentos al servicio de la educación y, naturalmente, puede haber concepciones diferentes.

Hay otra enmienda con la que también estamos de acuerdo; se trata de la número 122, relativa a la reestructuración de las enseñanzas de la música y la danza. Como digo, la enmienda está absolutamente de acuerdo con lo que pensamos, es correcta. Pero, ¿qué tiene que ver la organización de las enseñanzas de la música y la danza con este proyecto de ley? No tiene nada que ver, es una cuestión absolutamente ajena al contenido del proyecto, aunque se aprovecha éste para intentar regular algo que seguramente terminará regulándose, tal como su señoría ha defendido. Pero, insisto, en este momento y en este proyecto de ley esa propuesta está absolutamente fuera de lugar.

Por último, me referiré a las enmiendas —que han sido numerosas— del Grupo Parlamentario Popular con brevedad, porque en el debate general hemos expuesto las razones de fondo de nuestras discrepancias. Razones de fondo que tengo que repetir a los portavoces del Grupo Parlamentario Popular que son siempre respetadas. Digo esto, porque en algún momento la intervención del Senador Fernández Rozada ha presentado un tinte de crispación absolutamente ajeno al deseo de los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista. Insisto, los portavoces no comparten ningún tipo de crispación en el debate con su señoría. Sabe usted que discrepamos en muchas cosas, que discutimos sobre nuestras discrepancias y que respetamos nuestras diferencias. Y algunas de las cosas que su señoría dice, o algunas actitudes, me merecen una estimación positiva. Por ejemplo, la pasión con que su señoría defiende los temas de su posición educativa, pasión que yo también vivo —aunque quizá menos radicalmente que su señoría, un poco más fríamente, pero que comparto—, me merece sólo elogios. Realmente, poner pasión en el trabajo que hacemos es siempre un signo de que lo tomamos con rigor, seriedad y verdad y que, por tanto, estamos defendiendo lo que creemos que debemos defender. No hay, pues, ningún tipo de radicalismo ni de enfrentamiento crispado con su señoría; en absoluto. Creo que tenemos derecho a defender con sinceridad nuestras posiciones, y cuente con que las suyas serán siempre respetadas, aunque a veces tengamos que discrepar profundamente de lo que se dice desde la tribuna.

Como decía, en cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular...

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, se le ha terminado el tiempo. Le ruego la máxima brevedad.

El señor IGLESIAS MARCELO: Sí, señor Presidente.

Sólo me referiré a dos enmiendas que me parecen significativas. Se trata de las números 231 y 232, relativas a la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales. Con ambas se añade al texto de la ley una frase que, a mi juicio, pretende eximir a determinados centros de la obligación de escolarizar a alumnos con estas necesidades, al establecer que se escolarizará a alumnos con necesidades educativas especiales siempre que se dis-

ponga de los medios humanos y materiales necesarios para esa escolarización. Con lo cual, aquéllos que no tuvieran esos medios estarían exentos del cumplimiento de la obligación legal. Sin embargo, nosotros proponemos que todos tengan esa obligación legal y, naturalmente, las Administraciones competentes tendrán la obligación de poner a su disposición los medios materiales y humanos necesarios para que se cumpla dicha obligación. Lo demás sería abrir una puerta de escape para algunos centros que impedirían la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales.

Por todas estas razones, y por algunas otras que me excusó de no poder exponer, votaremos en contra de las enmiendas de sus señorías.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

En turno de portavoces, tiene la palabra la Senadora De Boneta y Piedra.

La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.

Intervendré muy brevemente, porque breves han sido las referencias, en general, al Grupo Mixto, y más breves aún las relativas a las enmiendas presentadas por esta Senadora de Eusko Alkartasuna.

En primer lugar, en relación con las enmiendas presentadas a los Títulos I y II, entiendo que el Senador Herranz, que ha defendido el turno en contra por parte del Grupo Socialista, no ha tenido argumentos para rebatirlas, puesto que no se ha referido en ningún caso a ninguna de las enmiendas que yo he presentado. Quiero entenderlo así, puesto que de otra forma debería interpretarlo como una descortesía parlamentaria o una falta de respeto a la mínima minoría que esta Senadora representa en esta Cámara. Pero en ambos casos pienso que no debo responder a nada que no se haya planteado aquí.

Respecto de las dos cuestiones, creo que fundamentales, que ha defendido el Senador Iglesias en contra de mis posiciones, efectivamente, nosotros hemos planteado unas enmiendas globales al tratamiento de la Inspección. Ha dicho, lo cual no es exacto, que presentábamos como alternativa la regulación fuera de esta ley, en el ámbito material de la Ley 30/1984, de la Función Pública, y de las disposiciones que la modifican. Debo decir que eso no es así, puesto que nosotros establecemos en tres enmiendas que la Inspección educativa tiene que depender, de acuerdo con la propia LOGSE, de las Comunidades Autónomas que, respondiendo a unos principios generales, tienen que adecuar su Inspección educativa.

Decimos, además, que nos parece más correcto que el ámbito material sea el de la Ley de la Función Pública. Pero, en todo caso, nuestro elemento principal de discrepancia con el proyecto se mantiene desde el respeto que estimamos se debe tener a las Comunidades Autónomas con competencia exclusiva en la materia.

Por último, quiero referirme muy brevemente a la transacción frustrada, a la que ha hecho referencia el Senador

Iglesias, y decirle que reconozco el esfuerzo que ha realizado el Grupo Parlamentario Socialista para llegar a un acuerdo que, por otra parte, supongo que ellos consideraban absolutamente necesario, puesto que su propio Grupo y el resto de los grupos presentes en el País Vasco, formaron parte de ese pacto escolar, que terminó con el difícil conflicto de la publicación de las «ikastolas» y precisamente fue a un Consejero socialista, vuelvo a decir, el señor Buesa, a quien le tocó culminar el proceso, sin perjuicio de que sea a un Consejero de mi partido político a quien le toque deshacer el entuerto que se plantea con esta ley.

En cuanto al agravio comparativo, tengo que decir que no es tal, que afecta a una situación muy determinada en una Comunidad muy concreta y que me parece insolidaria la posición de Convergència i Unió. Agradeciendo de nuevo el esfuerzo, lamento la tremenda sumisión del Grupo Parlamentario Socialista a los dictados de Convergència i Unió.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

¿Algún turno más de portavoces? (Pausa.)

Tiene la palabra el Senador Ríos Pérez.

El señor RÍOS PÉREZ: Solamente voy a referirme a unas cuestiones que no han quedado bien determinadas. En primer lugar, no hay ninguna razón para que esto haya sido debatido con la urgencia que ha tenido. En segundo lugar, quiero recordar que los dos temas importantes, la acreditación de los directores y la creación de los cuerpos de inspectores, tienen el rechazo mayoritario del profesorado y de todos los sindicatos y, por tanto, va a ser muy difícil su puesta en marcha. Creo que hubiera sido mucho más prudente hacerlo más despacio, debatirlo en profundidad y llegar a un mayor consenso.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

¿Algún otro portavoz? (Pausa. El señor Nieto Cicuéndez pide la palabra.)

Senador Nieto, no le puedo dar la palabra porque ya ha hecho uso del turno de portavoces la Senadora De Boneta y Piedra. Sería sentar un precedente que no sería válido.

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos no hace uso de la palabra.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tampoco.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Herranz.

El señor HERRANZ MARTÍNEZ: Señor Presidente, señorías, voy a referirme a algunos aspectos en este turno de portavoces. No está en mi intención, Senadora De Boneta, ser descortés y de ninguna manera ignorar aquellas argumentaciones que usted ha dado a las diferentes enmiendas que ha presentado a este proyecto de ley. Lo que

he hecho es referirme de forma global, con unos argumentos generales, a todas las enmiendas que habían presentado los diferentes grupos políticos —y así lo he recogido y así lo he manifestado— por no hacer un debate aburrido, enmienda por enmienda, que es lo que se debería haber hecho en Comisión y no se hizo.

Al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado le diré que este proyecto de ley se ha enriquecido considerablemente a través de las numerosas enmiendas que se han admitido en el trámite parlamentario, enriquecido por todas las argumentaciones y enmiendas que han presentado los diferentes grupos políticos y por todas las propuestas que ha hecho la comunidad escolar y todas aquellas personas que están preocupadas por la materia de la enseñanza, sean profesores, padres o alumnos, puesto que nos olvidamos de que aunque los alumnos no votan, es a ellos a quienes fundamentalmente va dirigida la calidad de la enseñanza y el sistema educativo de nuestro país.

Ha habido todo el consenso que se ha podido. Se han aceptado todas aquellas enmiendas que no desvirtúan el sentido del proyecto de ley y entendemos que este proyecto de ley —que lo que hace es desarrollar aquellos aspectos que ya se debatieron en las 77 medidas que propuso el Ministerio de Educación y Ciencia con la comunidad educativa y que recoge aspectos que era necesario actualizar, ponerlos al día, tanto de la LODE como de la LOGSE— va a cumplir una función importante, y es que nuestro país siga mejorando la calidad de la enseñanza, porque será un bien para el desarrollo de nuestro país y para la mejora de la educación.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

Tiene la palabra el Senador Fernández Rozada.

El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Senadores, en primer lugar, lamento que nuestras enmiendas no hayan sido tenidas en consideración por el Grupo Parlamentario Socialista más que para hacer una crítica, a mi juicio, muy poco rigurosa.

En segundo lugar, quiero decir que nosotros vamos a mantener la posición de defensa y aprobación de las enmiendas de otros grupos parlamentarios, Mixto y Canario, de acuerdo con la coherencia que hemos mantenido a lo largo de todo el trámite de esta ley en cuanto a la participación, evaluación y gobierno de los centros.

Creemos que ésta no es una buena ley. Pensamos que sería mejor, buscando un mayor diálogo social, encontrar un consenso que permita, devolviendo esta ley al Gobierno, lograr una nueva y lamento —a pesar de lo significativas que son las voces de todos los sindicatos de la enseñanza y del porcentaje tan elevado de profesorado que claman en el día de hoy, desde las respectivas direcciones provinciales porque esta ley no se apruebe en el Senado— que al final se apruebe y vuelva al Congreso de los Diputados. En todo caso, no será nuestra responsabilidad, más que en la medida de haber cumplido con nues-

tro deber de querer distanciarnos de una ley que no va a propiciar, como decía ahora el portavoz socialista, una mejor calidad de la enseñanza, sino más bien todo lo contrario.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Fernández Rozada. *(El señor Presidente ocupa la Presidencia.)*

El señor PRESIDENTE: Sometemos, en primer lugar, a votación, de acuerdo con la propuesta efectuada, las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto defendidas por la Senadora De Boneta, en un primer grupo, números 132, 139, 144, 149, 152, 163 y 166.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 253; a favor, 127; en contra, 125; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Segundo bloque de votación, enmiendas números 150, 156, 157, 158, 159, 161 y 162.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 253; a favor, nueve; en contra, 126; abstenciones, 118.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, en el tercer bloque de enmiendas agrupadas, las restantes de la enmendante.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 252; a favor, nueve; en contra, 237; abstenciones, seis.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. A continuación sometemos a votación las enmiendas suscritas por los Senadores del Grupo Parlamentario Mixto Martínez Sevilla y Nieto Cicuéndez, números 1 a 84; de ellas, votamos, en primer lugar, las enmiendas números 22, 23, 25, 33, 65, 69, 72 y 83.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 254; a favor, 117; en contra, 127; abstenciones, diez.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, en segundo lugar, las enmiendas números 1, 35, 36, 68, 73, 74 y 84.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 254; a favor, tres; en contra, 126; abstenciones, 125.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Sometemos a votación el resto de las enmiendas de los dos señores enmendantes. *(El señor Garrido Ávila pide la palabra.)*

Tiene la palabra el señor Garrido Ávila.

El señor GARRIDO ÁVILA: Es que no he oído bien, señor Presidente, si ha incluido también la número 2.

El señor PRESIDENTE: ¿Se pide votación separada de la enmienda número 2?

El señor GARRIDO ÁVILA: Efectivamente, porque sustenta una transaccional, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Es que yo había propuesto someter a votación las todavía no votadas de los Senadores Martínez Sevilla y Nieto, y la número 2 estaría incluida en este acto. De acuerdo con su solicitud, la aislamos de la votación, y votamos todas las demás, excepto la número 2, que, efectivamente, está sosteniendo una enmienda transaccional.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 253; a favor, tres; en contra, 238; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, sometemos a votación las enmiendas números 96 a 122. *(El señor Ortiz Pérez pide la palabra.)*

Tiene la palabra, Senador Ortiz.

El señor ORTIZ PÉREZ: Gracias, señor Presidente.

Solicitamos votación separada de las enmiendas números 104, 105, 121 y 122, en un acto; de la número 100, en otro y las restantes en otro acto.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Votamos en primer lugar las enmiendas números 104, 105, 121 y 122.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 253; a favor, 122; en contra, 125; abstenciones, seis.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda número 100.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 254; a favor, ocho; en contra, 128; abstenciones, 118.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Sometemos a votación las restantes enmiendas.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 254; a favor, nueve; en contra, 238; abstenciones, siete.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. ¿Solicitan sus señorías algún criterio para efectuar la votación? *(El señor Martínez Sevilla pide la palabra.)*

Tiene la palabra, Senador Martínez Sevilla.

El señor MARTÍNEZ SEVILLA: Señor Presidente, solicitamos votación separada de las enmiendas números 168, 169, 170, 172, 173, 181, 182, 183, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 207, 208 y 209.

El señor PRESIDENTE: Gracias. *(La señora De Boneta y Piedra pide la palabra.)*

Tiene la palabra, Senadora De Boneta.

La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señor Presidente, solicitamos votación separada de las enmiendas números 174, 214, 215, 216 y 230. Y, por otro lado, de los números 177, 178, 182, 184, 185, 192, 210, 235, 239, 240, 241 y 242.

El señor PRESIDENTE: Ruego a sus señorías que nos presenten un listado de las enmiendas para no tener que votarlas una por una. *(Pausa.)*

En primer lugar, sometemos a votación la enmienda número 182.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 252; a favor, 121; en contra, 124; abstenciones, siete.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Sometemos a votación las siguientes enmiendas: 168, 169, 170, 172, 173, 181, 183, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 207, 208 y 209.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 253; a favor, 121; en contra, 126; abstenciones, seis.

La señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Advierto a la Cámara que en las propuestas que nos han hecho los Senadores hay algunas enmiendas que ya no figuran porque fueron admitidas en Ponencia o en Comisión, de manera que corremos el riesgo de redundancias. *(Pausa.)*

Vamos a someter a votación las enmiendas números 177, 178, 184, 185, 192, 210, 235, 239, 240, 241, 242, 174, 214, 215, 216 y 230.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 253; a favor, 114; en contra, 126; abstenciones 13.

La señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 253; a favor, 118; en contra, 128; abstenciones, siete.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos a someter a votación la enmienda suscrita por cinco grupos parlamentarios —con excepción del Grupo Parlamentario Popular— de modificación del artículo 2.2, cuyo texto será: «Los padres podrán participar también en el funcionamiento de los centros docentes a través de sus asociaciones. Las administraciones educativas regularán el procedimiento para que uno de los representantes de los padres en el Consejo Escolar sea designado por la asociación de padres más representativa en el centro. Asimismo, las administraciones educativas reforzarán la participación de los alumnos y alumnas a través del apoyo a sus representantes en el Consejo Escolar».

Por lo tanto, el apartado 4 del artículo 10 queda suprimido.
Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 254; a favor, 140; en contra, uno; abstenciones 113.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Somemos a votación el texto del dictamen. Votación de los artículos 1 a 43, disposiciones adicionales primera a octava, disposiciones transitorias primera a cuarta, disposición derogatoria, disposiciones finales primera a séptima y exposición de motivos, en un solo acto.
Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 254; a favor, 132; en contra 116; abstenciones, seis.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado y, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad El Rey.
Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.

Eran las catorce horas y quince minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Se reanuda la sesión.

— DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE DECLARACIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS. PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S. 621/000091) (C. D. 121/000099)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente punto del orden del día es el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en relación con el proyecto de ley de declaración del Parque Nacional de Cabañeros. Se tramita por el procedimiento de urgencia.

¿La Comisión ha designado a algún Senador para que presente el dictamen de la Comisión?

El señor GALÁN CANO: Señor Presidente, la Comisión ha designado al Senador López Carrasco.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
El Senador López Carrasco tiene la palabra.

El señor LÓPEZ CARRASCO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, permítanme, en primer lugar, que exprese mi agradecimiento a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca por haberme designado para este cometido de presentar a la consideración del Pleno de la Cámara, para su debate y votación, el dictamen del proyecto de ley de declaración del Parque Nacional de Cabañeros.

En segundo lugar, expreso mi satisfacción por estrenar esta tribuna subiendo por primera vez para presentar, precisamente, para su debate y votación, el dictamen del proyecto de ley de declaración del Parque Nacional de Cabañeros, ya viejo deseo mío y de muchos ciudadanos y ciudadanas que yo me atrevería a calificar de viejo sueño que hoy vemos cumplido en la realidad.

Conozco bien Cabañeros, además de visitarlo muchas veces, porque durante doce años he desempeñado el cargo de Consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y de esos doce años diez he tenido la responsabilidad de la gestión, ordenación y protección de ese privilegiado paraje.

Les aseguro que no ha sido una tarea fácil, pero sí hermosa y apasionante. Me siento satisfecho por el deber cumplido y por haber colaborado desde mis responsabilidades a salvar Cabañeros. Un lugar que ofrece hoy día una de las más amplias representaciones del bosque y matorral mediterráneo de España no podía ser destinado a campo de tiro del Ejército del Aire; hubiese sido un auténtico desastre ecológico. Llegamos a tiempo de salvarlo entre todos y de declararlo con la máxima protección establecida en la

legislación vigente como Parque Nacional. Cabañeros se merece esta protección.

Este proyecto de ley de declaración del Parque Nacional de Cabañeros, cuyo debate se inicia en este instante en el Pleno del Senado, fue aprobado por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso de los Diputados, con competencia legislativa plena, el día 19 de septiembre de 1995, y tuvo entrada en esta Cámara el día 28 del mismo mes.

La Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca acordó designar ponentes a los siguientes Senadores: don Ángel Samuel Galán Cano, del Grupo Parlamentario Socialista; don Diego Alonso Colacios, del Grupo Parlamentario Socialista; don Manuel Acacio Collado del Grupo Parlamentario Popular; don José Manuel Molina García, del Grupo Parlamentario Popular, y don Manuel Ferrer i Profitós, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

Se emitió informe de la Ponencia el pasado día 5 de octubre. En este informe se consideraban incluidas las enmiendas números 5 y 6 de los señores Martínez Sevilla y Nieto Cicuéndez, que no aparecían incorporadas al texto remitido al Senado como consecuencia de un simple error material. Se rechazaron las enmiendas números 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12 y 13 del Grupo Parlamentario Popular; la enmienda número 14 fue desestimada y la número 10 retirada.

El día 11 de octubre se reunió la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, y el señor Martínez Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto, retiró las enmiendas números 1, 2, 3 y 4 y se reservó el mantenimiento de las números 5 y 6 al hecho de la efectiva incorporación de las mismas al texto del proyecto.

Votadas las enmiendas, fueron aprobadas por unanimidad las números 5 y 6, del Grupo Parlamentario Mixto; la enmienda número 7, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que fue aprobada por 30 votos a favor y uno en contra; las enmiendas números 9 y 12, del Grupo Parlamentario Popular, que fueron aprobadas por 16 votos a favor, 14 en contra y una abstención; la enmienda número 11, del Grupo Parlamentario Popular, que fue aprobada por 16 votos a favor y 15 en contra. Las enmiendas números 8 y 14, del Grupo Parlamentario Popular, fueron rechazadas por 14 votos a favor y 16 en contra, y la número 13, del mismo Grupo, fue retirada al haberse aprobado la número 7 del Grupo de Coalición Canaria.

A continuación, tuvo lugar un debate que finalizó con la propuesta del Presidente sometiendo a votación el texto del proyecto de ley remitido por el Congreso de los Diputados, excepto lo referido a la parte afectada por las enmiendas recién aprobadas. Dicho texto fue aprobado por unanimidad.

Así pues, señor Presidente, señoras y señores Senadores, éstas son las circunstancias más destacadas que han concurrido en la tramitación de este Proyecto de ley de declaración del Parque Nacional de Cabañeros, cuyo debate va a tener lugar a continuación, y que esperamos contribuya a dar a Cabañeros la protección que tan singular parece se merece.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

Se me ha anunciado que no habría debate a la totalidad. Por lo tanto, pasaremos al debate de los votos particulares. (*El señor Martínez Sevilla pide la palabra.*) Tiene la palabra el Senador Martínez Sevilla.

¿Me podría indicar en base a qué pide la palabra?

El señor MARTÍNEZ SEVILLA: Gracias, señor Presidente.

Simplemente deseo manifestar que he detectado algunas imprecisiones en el Informe de la Ponencia. En particular, hay alguna enmienda en concreto la número 4 que se ha dicho que está retirada por parte de mi Grupo pero no es así, únicamente estaba transaccionada, aunque las números 1, 2 y 3 sí estaban retiradas. Asimismo, he notado algunas imprecisiones, que supongo que son de mera lectura, y que espero que en el turno de Portavoces, después del posicionamiento sobre las enmiendas, podremos pronunciarnos al respecto.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias. (*El señor Galán Cano pide la palabra.*) Tiene la palabra el Senador Galán.

El señor GALÁN CANO: Gracias, señor Presidente.

Creo que podemos rápidamente liquidar este trámite previo recordando que quizá ha habido un momento de confusión porque se ha hablado del Informe de la Ponencia en primer lugar, y después del Dictamen de la Comisión, que se ajustaba al informe remitido por el señor Letrado.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.

En todo caso, pueden cotejarlo mientras tanto.

Pasamos al debate de los diversos votos particulares. El primero es el que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, en relación con el apartado e) del artículo 2, subapartado f) del apartado 2 del artículo 8 y párrafo inicial del apartado 2 del artículo 10.

Para su defensa, tiene la palabra el Senador Galán.

El señor GALÁN CANO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, subirme a la tribuna a defender los votos particulares presentados por el Grupo Parlamentario Socialista a la ley de conservación y declaración del Parque Nacional de Cabañeros, la verdad es que me produce una extraña sensación que quiero explicar, porque el proyecto de ley de declaración del Parque Nacional de Cabañeros desde que es presentado como proyecto de ley por el Gobierno en el Congreso ha seguido un camino en el que se han ido aunando voluntades por parte de los grupos parlamentarios y se han ido introduciendo una serie de enmiendas por acuerdo de los Grupos que han permitido que en la Comisión de Agricultura del Congreso, con competencia legislativa plena, se llegara a aprobar, con el acuerdo de to-

dos los grupos parlamentarios salvo el del Partido Popular, un texto plenamente acordado, muy acordado, en el que se ha ido buscando la participación de absolutamente todos los sectores, además de la participación política de todos los grupos. Y nos llevamos la sorpresa de que en su trámite de Comisión en el Senado se introducen tres enmiendas que dan la vuelta al sentir de la ley. Y una ley muy consensuada por los grupos políticos y, además, muy aceptada por todos los grupos sociales de la Comunidad Castellano-Manchega se convierte con estas tres enmiendas en una ley, como demostraré ahora, bastante inoperante y que desde luego no recoge el sentir de amplios grupos sociales castellano-manchegos, ni el sentir de la comunidad de Castilla-La Mancha cuando inicia el trámite de declaración del Parque Nacional de Cabañeros.

De ahí mi extrañeza, porque yo venía aquí a cantar las loas de este proceso y a hablar de la bondad de declarar el Parque Nacional de Cabañeros. Pero tengo que consumir mi turno para oponerme a esas tres enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y pedir a la Cámara que las rechace mediante la aprobación de nuestros votos particulares y conseguir así recuperar el texto que nos han remitido del Congreso. Porque no se trata sólo de que el Grupo Parlamentario Popular haya suprimido un punto tan importante como es la representación de los grupos ecologistas o de las organizaciones no gubernamentales que están recogidos en la constitución del patronato, que de tres representantes que tenían los grupos ecologistas, el Grupo Popular los convierte en uno, rompiendo el equilibrio que se había establecido en las diferentes representaciones que se iban a dar en el patronato del parque, donde también hay tres representantes de los propietarios, donde está representada la Universidad castellano-manchega y donde están representados los seis alcaldes que componen los municipios del entorno de Cabañeros que están afectados por el Parque, sino que además introduce otro elemento o matiz y es que esa representación ecologista será a nivel autonómico y comarcal, suprimiendo el término de grupos ecologistas que tengan una organización a nivel nacional. Y ahí está la trampa. ¿Qué se persigue con eso de comarcales? El texto de la ley dice claramente que no se impide para nada cualquier tipo de organización ecologista que quiera estar representada en el patronato del Parque. No impide, para nada, ninguna representación. Sin embargo, este texto sí impide la representación; impide que haya dos representantes de los ecologistas y, además, impide que organizaciones a nivel nacional puedan tener representación, e introduce lo de «comarcal». A nadie se nos escapa que en una comarca como ésta, con un índice bajo de población, quizás un pequeño grupo pueda constituir una agrupación ecologista y deformar o pervertir esa representación que tratamos de establecer mediante ley, que de esa manera quedaría bastante mermada y, desde luego, restringida por lo que se refiere a la representación de las organizaciones no gubernamentales.

Pero hay, sobre todo, un aspecto en el que me extenderé un poco más porque creo que rebate el sentir de la Ley. En el texto que proponen se dice que el Plan Rector de Uso y Gestión del parque será elaborado no por la administración

que es responsable de la gestión del parque, la Junta de la Comunidad de Castilla-La Mancha, el Gobierno castellano-manchego, o el Gobierno de la nación si es considerado como Parque Nacional, sino mediante acuerdo o convenio con los propietarios del parque. Por tanto, la iniciativa que pueda tomar el Gobierno de Castilla-La Mancha tendrá que estar condicionada al acuerdo que se firme con los propietarios del Parque, y no al acuerdo que se tenga que adoptar con el Patronato del Parque, donde están representadas todas las organizaciones que antes mencionaba.

En esta circunstancia, cabe preguntarse qué sentido tiene, por ejemplo, dar carácter de acuerdo a la propiedad en el modelo de difusión de la imagen del Parque en los pueblos de la comarca, qué sentido tiene que la propiedad intervenga y decida sobre los programas de educación ambiental que se puedan elaborar con respecto al parque, los programas de investigación o las propias relaciones del parque con otros parques en España y de otros países. ¿Por qué no incluir, entonces, a los ayuntamientos con los que se fomentan actividades locales y programas de desarrollo, a los empresarios del sector con los que se ejecutan las inversiones, o parte de las mismas, que se prevean en el parque, a las organizaciones no gubernamentales que colaborarán, sin duda, y que desarrollarán programas de difusión y conservación, a los científicos que desarrollarán las líneas de investigación, a la comunidad educativa con la que se establecerán programa de educación ambiental, a la comunidad turística, incluso, que tendrá interés en desarrollar iniciativas en la zona? ¿Por qué todos estos quedan excluidos y se condiciona que el plan rector de uso y gestión se hará mediante un convenio con los propietarios? Se está, por tanto, pervirtiendo el interés y el sentido que se tenía al declararlo Parque, primero natural, y ahora Nacional. Se pervierte la voluntad soberana de la Junta de Castilla-La Mancha cuando propuso la declaración de Cabañeros como Parque Nacional, extremo este que, dado que hablamos de competencias propias de la citada Comunidad, arrastra incluso a un principio de inconstitucionalidad, caso de ser aprobado hoy por el Senado este texto.

Y la única razón que se argumenta y que se argumentó en la Comisión para defender este texto es la referida a que la directiva de la Comunidad Económica Europea 92/43 recomienda los acuerdos con particulares en los espacios protegidos. Pero tenemos que preguntar a este particular en qué texto de la directiva europea, en qué punto de cualquiera de sus artículos se dice que tenga que llegarse a un acuerdo con los propietarios para la protección de las zonas o las reservas naturales. En ningún punto; es radicalmente falso. Creo que todos estos argumentos se utilizan para defender algo que no se acaba de decir si en el texto de sus enmiendas ni en el texto que defendía entonces el Grupo Parlamentario Popular. En realidad, todos estos argumentos se refieren a intentar dar una mayor importancia a una docena de propietarios que hay en el Parque y que adquieren una importancia predominante sobre el resto de la comunidad.

Señorías, lo que ocurre, en definitiva, es que se introduce en la declaración del Parque Nacional de Cabañeros

un elemento perturbador por el que una docena de propietarios adquieren la facilidad de intervenir en la elaboración del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque frente a los colectivos autonómicos castellano-manchegos allí representados y, sobre todo, en absoluta contraposición con las personas que de verdad representan a los ciudadanos que viven en los alrededores del Parque y que, por tanto, deben participar en la gestión del mismo, es decir, los seis alcaldes de los seis municipios correspondientes representados en el Consejo Rector y a los que de esta manera se les sustrae la posibilidad de intervenir en la elaboración del Plan Rector de Uso y Gestión.

Nada más, señor Presidente, muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Popular tiene la palabra el Senador Molina.

El señor MOLINA GARCÍA: Gracias, señor Presidente.

Por un acuerdo establecido por la Presidencia, este primer turno de intervenciones va a limitarse, no a contestar al Grupo Socialista, que presenta sus votos particulares, sino a defender los que cada uno de los demás grupos plantea ante esta Cámara. Por tanto, en este turno me voy a limitar a presentar y a defender precisamente los votos particulares que el Grupo Popular mantiene en este Pleno, y más tarde, en el turno de portavoces, tendrá oportunidad —y lo haré con mucho gusto— de contestar a los argumentos expuestos por el Portavoz del Grupo Socialista.

Ciñéndome, por tanto, al acuerdo establecido, quiero decir que el Grupo Popular plantea las enmiendas números 8 y 14 en un voto particular que establece la necesidad de reformar el Plan de Ordenación de Recursos de Cabañeros tras la aprobación de esta ley, necesidad que está justificada fundamentalmente por dos cuestiones.

La primera de ellas es que hasta que fue emitida la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de junio de este año, los parques nacionales eran competencia prácticamente exclusiva del Gobierno central, y si bien existía esa fórmula de protección —que no es acorde con el Estado de las Autonomías y que parte fundamentalmente de un objetivo que el Grupo Socialista ha venido defendiendo siempre, cual es hablar en los grandes discursos de la autonomía pero en los casos concretos, cuando hay competencias, excluir o eludir la competencia de la Comunidad Autónoma—, esa sentencia establece una cogestión obligatoria, por lo que precisamente es necesario adaptar en esta ley —que ya en su propio texto recoge esta sentencia del Tribunal Constitucional— el Plan de Ordenación de Recursos Naturales, Plan que, como quedó aprobado previamente a la sentencia, requiere asimismo de aprobación.

En segundo lugar, porque tampoco existe ningún precepto legal que afecte a este planteamiento. Se ha dicho que no podía existir Parque Nacional si no había un Plan de Ordenación de Recursos, pero eso no es correcto ya que el propio Decreto de 1989 regula perfectamente la posibilidad excepcional, que se da en este caso, de que se declare

un Parque Nacional sin necesidad de tener ya un texto aprobado e inamovible.

Además, es que estamos hablando de un Plan de Ordenación que no recoge el espíritu fundamental que ha inspirado las enmiendas del Grupo Popular: el mantenimiento de los usos tradicionales, de aquellos usos que dan de comer a miles de personas en Cabañeros y que han permitido hoy que Cabañeros sea precisamente objeto de declaración de Parque Nacional.

Que nadie se engañe: lo que hay hoy en el Parque Nacional es el fruto del esfuerzo —incluido el de los propietarios— de las miles de familias que han estado allí viviendo, pero el Plan de Ordenación de Recursos no recoge esos usos tradicionales que dan de comer a tantas familias y que han hecho posible esta realidad.

Éstos son los argumentos fundamentales.

Por otra parte, cumpliendo con el acuerdo de los grupos parlamentarios, en el turno de portavoces tendré ocasión de contestar al Grupo Socialista y de expresar asimismo la opinión y la posición del Grupo Popular a este respecto.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría. En turno de portavoces tiene la palabra el Senador Martínez Sevilla.

El señor MARTÍNEZ SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señores Senadores, señoras Senadoras, la declaración como Parque Nacional del ecosistema de Cabañeros supone la creación del primer Parque Nacional que contiene una buena representación del ecosistema mediterráneo, que contiene una buena representación del bosque mediterráneo. Entre los tres ecosistemas posibles como candidatos a constituir este espacio estaban el parque natural de Monfragüe, el monte de El Pardo y Cabañeros. El parque natural de Monfragüe es quizá el mejor conservado, el que más idoneidad tenía para esta declaración, el monte de El Pardo es quizá el que más características simbólicas reúne; sin embargo, es Cabañeros el que se declara, lo cual supone, por así decirlo, la más amplia transformación, la más amplia metamorfosis, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político, de un espacio que cabía concebir como polígono de tiro a Parque Nacional, y probablemente por eso es muy importante esta declaración como Parque.

Sin embargo, en el curso del proceso seguido en la tramitación del proyecto de ley se han introducido unas enmiendas, precisamente en el trámite de Comisión en el Senado, que consideramos que son altamente perjudiciales para lo que es el carácter del Parque, y no son nada beneficiosos con respecto a lo que supone la declaración de Parque Nacional.

En concreto, la enmienda número 7 del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado nos parece que no tiene sentido. Nos parece sin sentido aprobar una enmienda que descalifica como infracción muy grave el portar armas de caza dentro del Parque. Esta enmienda está en contradicción con la Ley de Caza de Castilla-La Mancha,

que en sus artículos 47 y 49 declara que precisamente está prohibido llevar armas de caza dentro de los espacios naturales protegidos. Por tanto, nos manifestamos en contra de esta enmienda, no tanto por la realidad que va a suponer en la configuración de actividades dentro del parque —el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, y la Ley de Caza de Castilla-La Mancha dejan muy claro esto—, sino por lo que supone de no calificar como infracción grave una actividad que debería estar taxativamente prohibida en parques nacionales. Por tanto, nos oponemos a esta enmienda, y no entendemos en modo alguno el apoyo por parte del Grupo Parlamentario Socialista ni su proposición por parte del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado.

Respecto a las tres enmiendas que ha introducido el Grupo Parlamentario Popular en el trámite de Comisión, entendemos que algunas de ellas si modifican sustancialmente el carácter de Parque Nacional, en particular las enmiendas números 11 y 12. En concreto, la enmienda número 11 rebaja la participación de representantes de las asociaciones ecologistas de tres miembros a uno. Entendemos que la actual composición del patronato era ya una composición con cesiones, pactada. No es normal que en un patronato de un Parque Nacional haya tres representantes de los propietarios de los terrenos ubicados en el interior del Parque en igualdad con los tres representantes ecologistas que había en el proyecto, y no entendemos tampoco que la cantidad de representantes de las asociaciones agrarias, que en este caso son dos, sea tan elevada.

En cualquier caso, éste era un proyecto consensuado en cuanto a la representación. La enmienda del Grupo Parlamentario Popular rompe ese consenso en cuanto a la representación y deja sólo a un representante de los grupos ecologistas, en franca minoría respecto a los tres representantes de los propietarios de terreno o a los dos representantes de los agricultores dentro del Patronato del Parque Nacional; además con un inconveniente añadido: se dice que ese representante debe ser exclusivamente de organizaciones ecologistas de ámbito autonómico o comarcal. Naturalmente, podrá argüirse que para quien defiende principios autonomistas, como es el caso de este Senador, o el de mi Grupo Parlamentario, puede existir una contradicción aparente en defender que puedan ser organizaciones ecologistas de ámbito estatal o autonómico. En modo alguno existe contradicción en este punto.

El Parque Nacional se declara inmerso dentro de la red estatal de parques nacionales. El Parque Nacional se declara por representantes del Estado, del Gobierno Central —porque también el Estado son los Gobiernos autonómicos, por supuesto— dentro del Patronato del Parque y se declara, por tanto, con una composición y una gestión mixta —siguiendo la reciente doctrina del Tribunal Constitucional en este sentido— dentro del Patronato. No tiene, pues, sentido hacer recaer el peso del autonomismo exclusivamente en los representantes ecologistas, mientras que no se hace recaer ese peso del autonomismo en los representantes de la Administración. Si hay representantes de la Administración estatal y si hay representantes de la Administración autonómica, no entendemos por qué hay que li-

mitar los representantes ecologistas únicamente a grupos de carácter autonómico o comarcal, y es conocido que hay muchas organizaciones ecologistas que tienen ámbito de actuación estatal, aunque tienen y mantienen grupos asociados precisamente en todos y cada uno de los municipios que en este caso componen el Parque o de ámbito comarcal o de ámbito autonómico, pero que su configuración jurídica es estatal, algunas, incluso, tienen configuración jurídica internacional, y esas organizaciones ecologistas se verían privadas de poder tener representantes dentro del Patronato del Parque.

Por tanto, no hagamos soportar la carga de la representación aquí en los representantes ecologistas, mientras que salvamos para ellos a los representantes de la Administración, y aquí cabría invocar una doctrina de coherencia, una doctrina de café para todos: si hay representantes del Gobierno Central, por qué no puede haber representantes de grupos ecologistas de ámbito estatal. Por tanto, mi más absoluto desacuerdo tanto con el número como con la restricción de la proveniencia de estos representantes ecologistas en el Patronato del Parque.

La enmienda número 12, que es aprobada en el trámite de Comisión con el apoyo de Convergència i Unió y con el apoyo del Grupo Popular, entendemos que es mucho más grave. La enmienda número 12 dice, literalmente, que los titulares de los terrenos afectados deben establecer un convenio o acuerdo entre la Administración autonómica, el Estado y ellos mismos para participar en la redacción del Plan Rector de Uso y Gestión, y esto no es comprensible desde ningún punto de vista. No es comprensible que un espacio que se declara Parque Nacional por su interés colectivo quede mediatizado por los intereses particulares, por muy dignos que sean esos intereses particulares, de los titulares de los terrenos afectados, y no es de recibo porque entendemos que esos representantes que mantienen unos intereses propios que a veces están en contraposición con los intereses de la generalidad, con los intereses del Parque Nacional, de alguna manera pueden obstaculizar, pueden demorar, pueden, en definitiva, espaciar lo suficiente el Plan Rector de Uso y Gestión como para que éste finalmente se convierta en un instrumento poco válido o, peor aún, en un instrumento inútil para la buena gestión y para el buen uso de los ecologistas del Parque.

Por tanto, reconociéndoles todo el derecho a mantener actividades, reconociéndoles toda la titularidad de los terrenos, la declaración de un Parque Nacional implica un interés colectivo que no puede nunca supeditarse a intereses particulares y menos aún que esos intereses pudieran derivar mediante el Plan Rector de Uso y Gestión en la obstaculización precisamente de la buena gestión y uso de este Parque Nacional.

Entendemos que esta enmienda hace un parque desnaturalizado, crea un PRUG, plan rector de uso y gestión, bloqueado y, además, no sólo eso, sino que entendemos que sienta un precedente muy grave sobre la gestión en los parques nacionales. Si ya observamos que era demasiado numerosa la representación de los titulares de los terrenos en el Patronato, entendemos que además darle la posibilidad de influir directamente en la legislación o en la regula-

ción interna del mismo, es llevar las cosas por completo fuera de órbita. Sería algo así como darle a los empresarios la posibilidad de que regularan internamente las normas de funcionamiento de las organizaciones sindicales u otras comparaciones que pudiéramos establecer al respecto.

Desde este punto de vista, en nombre de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, pero también en nombre del movimiento ecologista en el Estado español con el que he consultado estos días, me manifiesto absolutamente contrario a la inclusión de esta enmienda. El movimiento ecologista lo rechaza por completo porque las pretensiones de los titulares en este caso vendrían a bloquear, vendrían a paralizar de alguna manera la protección y la defensa de este espacio natural.

Con todo esto, quería decir que me voy a sumar a la enmienda número 1 del Grupo Parlamentario Socialista que, de hecho, no ha sido presentada por mi Grupo Parlamentario, ya que sería literalmente la misma y del mismo tenor: volver al texto del Congreso. Un texto que entendemos que es mejorable, un texto que entendemos que podría ser susceptible de modificación pero, en cualquier caso, un texto que es fruto del consenso, un consenso que se ha roto en el trámite de Comisión del Senado, y un consenso que se ha roto en un punto débil que afecta precisamente a la representación del movimiento ecologista y a la conservación íntegra de los ecosistemas.

Pido al conjunto de los grupos parlamentarios, y más específicamente al Grupo Parlamentario Popular, que en este caso se dé marcha atrás, se reconsidere, se reflexione sobre la postura respecto de esa enmienda, una postura que pensamos que no está canalizada como debiera desde el punto de vista jurídico.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, tiene la palabra el Senador Miguel Ángel Barbuzano.

El señor BARBUZANO GONZÁLEZ: Gracias, Presidente.

Con su venia, vamos a hacer una intervención de tipo general, porque nosotros no hemos mantenido ninguna enmienda como voto particular para el Pleno. Teníamos una enmienda que defendimos en Comisión y que fue aceptada, lo cual agradecemos a todos aquellos que votaron a su favor, y que no era nada más que una discrepancia de matiz sobre dónde debería contenerse la regulación que debía hacerse en el Parque Natural respecto a la caza. Nosotros opinábamos que esto debía ser desarrollado en el Plan Rector de Uso y Gestión con muchísima más amplitud de la que lo hacía el apartado g) del artículo 11 del proyecto de ley.

Dicho lo anterior, no queríamos dejar pasar esta ocasión. Nunca lo hacemos cuando viene a esta Cámara Alta un proyecto de ley sobre un parque natural, un parque nacional o una zona que haya que proteger. Nos felicitamos de que este proyecto de ley sobre un parque nacional venga a la Cámara Alta. El proyecto que nos remitió el Congreso

de los Diputados, salvo ese matiz que ya he dicho que fue aceptado en Comisión, era aceptable.

En la Comunidad Autónoma de la que procedo, que posee más del 50 por ciento de los parques nacionales del Estado español, damos una importancia bastante alta al hecho de proteger una zona, un territorio, en definitiva, al hecho de conservar ecosistemas que se producen en el medio natural, y cuantos más protejamos, muchísimo mejor. Por lo tanto, estamos satisfechos y contentos de que este proyecto de ley haya venido, y estaremos aún más contentos si la racionalidad marca que se vuelva al texto que nos remitió la Cámara Baja, porque lo que se introdujo en el dictamen de la Comisión no es acorde con el desarrollo de un parque nacional.

Éste no es un parque nacional «sui generis». Éste es un parque nacional que significa un trozo de territorio que hay que conservar, un trozo de territorio sobre el que hay que mantener una legislación, un plan de ordenación de sus recursos y un plan rector de uso y gestión correcto. Por lo tanto, no tiene por qué mantener —voy a decir una burrada— «suigeneridades» porque sea Cabañeros ni por lo que haya sucedido anteriormente en Cabañeros. Es un parque nacional y hay que depositar en él —eso sí— la experiencia que se ha adquirido, en años sucesivos, en otros parques nacionales, como en algunos de los canarios, que provienen de la década de los años sesenta. Por consiguiente, nosotros nos felicitamos. Pero esto, sin duda, es sólo un paso. Posteriormente hay que dar dos pasos muy importantes, y no hay que dejar de darlos. Uno es la elaboración de un nuevo —o una modificación o como se le quiera denominar— plan de ordenación de sus recursos naturales y, rápidamente, un plan rector de uso y gestión que contemple eso que se llama la utilización de los usos habituales y que le tiembla a cualquiera. Eso hay que recogerlo muy claramente en el plan rector. Esas dos cosas son fundamentales. Pero una buena legislación, y apelo a la racionalidad de todos los senadores, sería volver al texto que nos remitió la Cámara Baja.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Barbuzano.

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Ferrer i Profitós.

El señor FERRER I PROFITÓS: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Presidente, señorías, quiero, en primer lugar y en nombre de Convergència i Unió, hacer unas aclaraciones previas. Yo no creo, y pienso que la ley me asiste, que se pueda dramatizar de esta forma y decir que es irracional que la Cámara Alta modifique el texto de cualquier proyecto de ley que viene del Congreso. No me quiero extender haciendo otras consideraciones, pero, quizás, la ineficacia que por parte de muchos se achaca a esta Cámara quizá proviene de estas cuestiones.

En segundo lugar, quisiera decir con todos los respetos a las asociaciones conservadoras o ecologistas que no pueden monopolizar de ninguna manera la conservación del medio. Lo digo con la autoridad moral que me da el ser agricultor de toda la vida. El medio no lo conservan solamente los miembros de las asociaciones ecologistas. El medio lo conserva la gente que vive en él y, sobre todo, la gente que vive de él. No hay nadie que viva de una cosa o que saque rentas de una actividad que tenga interés en destruir, en extorsionar o en prostituir aquel medio que le procura su forma de vida.

En tercer lugar, y antes de entrar a exponer la posición de nuestro Grupo, quiero dejar claro que no es verdad que a los titulares de terrenos se les pueda tildar, con falacia, de que tienen siempre intereses escondidos. Yo conozco poco los Montes de Toledo, pero hablar, en principio, de titulares no es análogo a hablar de defensa de intereses perversos. Nuestro Grupo no lo entiende así. Y tampoco entiende que la colaboración de los titulares pueda ser, como se ha dicho aquí, la de bloquear el cuidado o el desarrollo del medio.

Señor Presidente, quiero anunciar ahora la posición de nuestro Grupo, que es la siguiente: Nosotros apoyaremos íntegramente el proyecto de ley de declaración del Parque Nacional de Cabañeros tal como ha sido dictaminado por la Comisión de Agricultura del Senado a la cual me honro en pertenecer, como ha dicho el portavoz que ha presentado el dictamen de la Comisión ante esta Cámara.

En Comisión se aceptaron algunas enmiendas, pero del desarrollo del debate parece que las perniciosas, las contradictorias, las que distorsionan el proyecto de ley, son tres. En este sentido, quiero hacer referencia a lo que ha dicho el portavoz del Grupo Socialista en su exposición, al afirmar que éste era un viejo sueño, pero hoy vemos que ya es una realidad la declaración de Parque Nacional de Cabañeros. Yo me sumo a esta manifestación, es decir, a que era un sueño, pero hoy es una realidad, que ofrece muchas perspectivas positivas para todos los que están en cierta manera relacionados con el Parque de Cabañeros.

Nosotros aceptamos la enmienda número 11, al artículo 8, letra f), que dice: Un representante de las asociaciones ecologistas de ámbito autonómico o comarcal, o que, estatutariamente..., etcétera. Es decir, se suprime el término «estatal» y se propone que sea autonómico o comarcal. En Comisión, y en nombre de mi Grupo, ya di las razones de por qué hacíamos esto. Porque, ¿quién puede tener más interés en conservar el Parque que los representantes de una asociación más cercana a la riqueza del medio?

Introducida la enmienda, en el texto figura un solo representante, pero esto no es culpa del Grupo proponente, ni de nosotros, que ayudamos a que esta enmienda se introdujera. El portavoz del Grupo Popular dijo en Comisión —y hay que hacer justicia— que de admitirse la enmienda tenía que hacerse íntegramente, tal como estaba redactada. Pero también se comprometió —y ha cumplido su palabra— a que se pudiera presentar una enmienda transaccional para que en vez de un representante, fueran tres. Y el que no figuren tres representantes en el texto definitivo sólo se deberá a la responsabilidad de los grupos que no

han querido firmar la transaccional que, como digo, en vez de uno, proponía tres.

Hay otra enmienda —ésta parece que es la peor—, al artículo 10, apartado 2, que propone que los acuerdos para el Plan Rector de Uso y Gestión se realicen entre la Administración autonómica, el Estado y los titulares de los terrenos afectados. En este sentido, he leído la Ley 4/1989, de 27 de marzo, y en su artículo 19 no he visto nada que establezca que la participación de los titulares en este tipo de convenios pueda ser sancionable. Además, la Directiva europea 92/43, de 21 de mayo, establece la conveniencia de que las Administraciones y los particulares lleguen a acuerdos. Creo que Europa avanza hacia esta realidad, es decir, hacia la eliminación de reservas entre las propiedades, las actividades y las Administraciones.

Por otro lado, el interés de todos los titulares es llegar a convenios para continuar desarrollando las actividades que allí llevan a cabo, y para que el Parque sea lo más rico posible y la actividad que ellos desarrollan produzca las rentas que toda la vida les ha dado.

En este mismo voto particular hay un enmienda, que se aprobó en Comisión, al artículo 2, apartado e), que dice: Promover el desarrollo sensible, social, económico y cultural de los habitantes de la comarca de Cabañeros, así como mantener sus usos tradicionales.

El artículo 5 habla del régimen jurídico y dice que «se mantendrán y apoyarán». El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió entiende que lo que abunda no daña, ya que muchas veces, no solamente en este proyecto de ley sino en otros, se ha menospreciado la responsabilidad y la consideración que tiene que tener la gente del lugar, tanto si está en régimen de titularidad como en régimen de explotación...

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, vaya terminando, por favor.

El señor FERRER I PROFITÓS: Acabo enseguida, señor Presidente.

Nosotros entendemos que no tiene que cambiar la ley porque el punto e) del artículo 2 diga que se mantengan los usos tradicionales.

En resumen, señor Presidente, señorías, nosotros no vamos a apoyar los votos particulares presentados por el Partido Socialista y por el Partido Popular porque se refieren a unas enmiendas que rechazamos en el trámite de Comisión. Apoyaremos íntegramente con satisfacción el proyecto de ley de declaración del Parque Nacional de Cabañeros tal como lo ha dictaminado la Comisión. Además, damos la enhorabuena a las gentes de Toledo y Ciudad Real implicadas en esta riqueza ecológica medioambiental mediterránea. Nosotros desde Cataluña, desde el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, expresamos nuestra satisfacción porque se apruebe que este territorio sea Parque Nacional.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchísimas gracias, Senador Ferrer i Profitós.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Galán.

El señor GALÁN CANO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, en este turno de portavoces agradezco su apoyo a nuestra enmienda a los grupos que así lo han manifestado, pues lo que con ella se persigue, en definitiva, es volver al texto que nos enviaron del Congreso de los Diputados para recuperar el sentido de esta ley.

Muy rápidamente quiero decir al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió que lo tiene muy claro. Si no quiere que la representación de los ecologistas disminuya y pase de uno a tres, lo que tiene que hacer es apoyar la enmienda que tiene presentada en este momento el Grupo Parlamentario Socialista, con lo que inmediatamente pasa de nuevo al texto del Congreso de los Diputados, que es el que votaron y aprobaron allí. También tiene la solución para que la gestión del Parque no se convierta, como dicen, en la monopolización de unos o de otros. Precisamente por una enmienda de Convergència i Unió se elevó la propuesta de los propietarios, que pasaron a tres, a la vez que se elevaba la de las organizaciones agrarias. Lo único que le pedimos es que sea consecuente con lo que allí se aprobó. Si aprueba nuestra enmienda quedará inmediatamente recuperado el texto y los argumentos que yo he creído entender y que comparto con usted.

Señor Molina, con las dos enmiendas que defiende el Grupo Parlamentario Popular, no sólo con las tres que había introducido, dejamos completamente inhábil esta ley. Con las dos enmiendas que introduce, lo que dice es que no debe existir el Plan de ordenación de recursos naturales, en el que se ha basado la Comunidad castellano-manchega para elevar este texto y la propuesta de Parque Nacional de Cabañeros. El Gobierno de la nación, sensible a esa propuesta y a lo que demanda la sociedad castellano-manchega, recoge ese Plan de ordenación y basándose en él, lo convierte en el proyecto de ley que hoy estamos debatiendo después de haber pasado por el Congreso de los Diputados. Y que lo que dice la Ley de Espacios Naturales, en su artículo 15, es que a partir de la publicación de esta Ley —y la declaración del Parque Nacional de Cabañeros se produce precisamente después de la aprobación de esa Ley y después del dictamen del Tribunal Jurisdiccional— es necesario el Plan de ordenación, salvo en unos casos especiales, que no se dan en este momento. Por tanto, que haya parques nacionales que se hayan aprobado con anterioridad sin que haya un Plan de ordenación no justifica que se haga ahora, porque antes se hacía de acuerdo a la ley y ahora sí se hace de acuerdo a la ley, y si suprimiéramos el Plan de ordenación, no lo haríamos de acuerdo a la ley vigente en este momento en nuestro país.

Luego decir que se retire el Plan de ordenación es, precisamente, posibilitar que esta ley sea recurrida y que, por tanto, no tenga ninguna validez. En definitiva, usted, señor Molina, está haciendo algo que propone en sus cinco enmiendas y que es la trayectoria del Partido Popular cada vez que se ha tratado de proteger la zona de Cabañeros: oponerse a la protección de dicha zona. Y lo que usted está

haciendo en este momento es boicotear la declaración del Parque Nacional, lo mismo que se opusieron a la declaración de Parque Nacional. Eso es lo que usted está haciendo, dígalo claro. ¿Y por qué lo hace? Lo hace porque hay una docena de propietarios, que son los que recurrieron en su momento la Ley de Parque Nacional y recurren también esta ley, que son los que se oponen. Y son esos propietarios los que le insisten, y por eso usted lo defiende, en que se declaren legales todos los usos tradicionales. Pero es que hay usos tradicionales que van en contra de la conservación del Parque y, por ello, no puede esta Cámara, señores Senadores, aprobar esos usos tradicionales indiscriminadamente, para que los apliquen, además, con la intensidad que crean oportuna los propietarios del Parque.

Estamos, por tanto, con esa declaración, allanando no sólo la ley, sino también los intereses generales de Castilla-La Mancha y los intereses generales de la nación, que es lo que tratamos de declarar aquí hoy. Por ello, quisiera quitar el mal sabor de boca que les queda a algunos Senadores cuando ven esta propuesta que nos han pasado desde la Comisión, y que podemos rebatir con nuestros votos en este Pleno, y quisiera yo quitármelo también recordando la satisfacción que debe ser para este Parlamento declarar este Parque Nacional después que el Tribunal Constitucional ha dictaminado aquellos temas de discusión que pudiera tener la Ley de Conservación de Espacios Naturales. Precisamente por eso, en el recorrido que sigue la ley en el Congreso se llega a un acuerdo con el resto de los grupos políticos en lo que es fundamental de esta Ley, y que era lo que originaba los problemas competenciales, que es la organización de los órganos de gestión. Efectivamente, hay un completo acuerdo en la redacción del artículo 7, y esos órganos persiguen la responsabilidad compartida de la gestión de todos los componentes de la sociedad no sólo castellano-manchega, sino también nacional; se establecen esquemas de colaboración con entidades nacionales e internacionales; desaparece todo problema competencial y se establece un cauce de participación autonómico y, sobre todo, local. *(El señor Vicepresidente Ortí Bordás ocupa la Presidencia.)*

Hay que tener en cuenta que aprobamos en esta ley que en el Patronato están los seis alcaldes de los ayuntamientos, y esos seis alcaldes, señores Senadores, sí representan a todos aquellos ciudadanos que pueden depender del Parque y tienen intereses en el Parque y en sus alrededores. Y precisamente con ellos se podrá hacer después un plan de desarrollo sostenible para la zona.

Por último, quiero felicitar —cómo no— a quien fue durante doce años Consejero del Gobierno de Castilla-La Mancha, que hoy ha presentado el dictamen, que hoy está aquí sentado como Senador y que en su momento adoptó la decisión, junto con el Presidente José Bono, de declararlo parque nacional, para de este modo pasar de estar declarado —tal como hizo el anterior Gobierno de UCD— como campo de tiro a ser un Parque Nacional, con todos los esquemas de protección que en este momento le vamos a dar los Senadores.

Asimismo, debemos felicitarlos porque con esta declaración nos aproximamos a ese 1 por ciento del territorio

dedicado a parque nacional que nos recomiendan las organizaciones internacionales y que cuando se aprobó la Ley de Espacios Naturales nos propusimos los socialistas. Con esta declaración, más otras que seguirán, los socialistas intentamos llegar a ese objetivo electoral, tanto a nivel autonómico como a nivel del Estado.

Muchas Gracias, señor Presidente (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Molina.

El señor MOLINA GARCÍA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, intervengo en este turno para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular sobre el texto del dictamen y los votos particulares que presenta el Grupo Parlamentario Socialista.

En primer lugar, respecto al voto particular presentado a las enmiendas números 8 y 14, tengo que decir que no ha habido ninguna justificación por parte del Grupo Parlamentario Socialista que establezca ni legal ni sensatamente lo que algún portavoz ha dicho en esta tribuna: que se tiene que adaptar ese PORN. Nosotros no pedimos que se retire, lo que pedimos, sencillamente, es que se elabore uno nuevo en un plazo razonable adaptado, precisamente, a la situación actual, y ello porque creo que una sentencia del Tribunal Constitucional, que cambia radicalmente la gestión de los parques nacionales, es suficiente excepcionalidad como para que la propia ley lo contemple.

Y dicho esto, paso a las enmiendas en las que se analizan los tres aspectos que el Grupo Parlamentario Socialista plantea. Respecto al primero, sobre el que ha pasado casi de puntillas el portavoz socialista y que habla de los usos tradicionales, ha intentado decirse desde esta Cámara que nosotros con tal de mantener los usos tradicionales estamos en contra de la protección del parque nacional. Y, claro, cualquier persona que no tenga el texto en la mano puede ir a esa conclusión.

Señorías, el artículo 2, Objeto, dedica seis puntos a los objetivos del Parque. El primero, proteger la integridad de sus ecosistemas, que constituyen una extraordinaria representación del bosque mediterráneo, y el Grupo Parlamentario Popular y esta Cámara dicen sí. El apartado segundo, asegurar la conservación y la recuperación, en su caso, de los hábitats que lo forman y las especies que lo pueblan, y la Cámara y el Grupo Parlamentario Popular dicen que sí. Tercero, contribuir a la protección, el fomento y la difusión de los valores culturales que conforman su historia, y decimos que sí. Cuarto, facilitar su conocimiento y disfrute por los ciudadanos de forma que sea compatible con su conservación, y decimos que sí. Y en el punto quinto, cuando habla del desarrollo sostenible económico, decimos: ¿de qué han vivido las miles de familias que viven en Cabañeros, no tienen derecho a seguir viviendo, o es que se les va a privar de su fuente de ingreso fundamental? Por ello, nosotros añadimos en este punto «y que se mantengan esos

usos tradicionales». Después hay otro apartado más: aportar al patrimonio nacional, europeo y mundial una muestra representativa, etcétera.

Por tanto, se trata de introducir un punto en un elemento fundamental, y es que nos preocupa la gente que está viviendo, nos preocupan muchas personas que han protestado en la calle diciendo: déjeme usted seguir viviendo como estoy viviendo de esos ingresos, porque nosotros hemos mantenido este parque durante tantos años. Esas familias no tienen otro tipo de ingreso que no sean los usos tradicionales, ¿o es que van a venir aquí ustedes a decir que les va a tocar la lotería, que les va a tocar la lotería o que a partir de ahora sueldos para todos, todos colocados? ¡Hombre, por Dios! Esas cosas no se pueden plantear. ¿O es que van a crear un PER especial para esa zona? La gente quiere vivir dignamente con un puesto de trabajo, y dignamente han vivido y dignamente tienen que seguir progresando en su fuente de ingreso. Por eso lo incluimos, y ese es el espíritu de nuestra enmienda. (*Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

Yo entiendo que eso evita que en algunos casos se pueda hablar del voto cautivo que a ustedes tanto les molesta, pero lo que nosotros queremos es que la gente tenga su sueldo digno y vote a quien le dé la gana, con un sueldo digno. (*Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*) Es evidente, como ha sido hasta la fecha, que esos usos tradicionales son compatibles con la conservación del medio ambiente.

Vamos, porque no deja de ser interesante, al tema del número de representantes.

El Grupo Parlamentario Popular ha introducido en todo el debate la defensa de las competencias de las Comunidades Autónomas, y a usted, señor portavoz socialista, que decía al representante del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió: si quiere usted tres, vótenos, yo le digo: si quiere usted tres representantes, firme esta enmienda transaccional, sólo falta su firma aquí. Con esta firma habría tres representantes de ecologistas en ese Patronato.

Por tanto, no escuden ni ataquen esa responsabilidad, es responsabilidad suya. Nosotros lo que decimos es que las asociaciones ecologistas con representación y con competencia autonómica o comarcal, ¿son menos ecologistas que otras? ¿Es que ustedes están diciendo que el representante de Castilla-La Mancha no defiende el medio ambiente? ¿Que los cuatro representantes de la Administración del Estado no defienden el medio ambiente? ¿Que los autonómicos tampoco? ¿Que los representantes de los ayuntamientos tampoco? ¿Que los representantes agrarios, que tienen uno, tampoco defienden el medio ambiente? Es muy grave esa afirmación.

Nosotros hemos dicho: hagamos lo que está haciendo todo el mundo, lo que están haciendo organizaciones representativas, partidos políticos y, lo más importante, la propia Administración se tiene que descentralizar, y son las Comunidades Autónomas, con organizaciones representativas de allí, quienes conocen muy bien la realidad de la que estamos hablando en Cabañeros y en los Montes de Toledo. Por eso le decíamos que fuera comarcal, lo que su-

cede es que ustedes desde el primer momento han empezado a atacar en esta ley el posicionamiento nacional.

Señorías, quiero enseñarles una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, que propone: El presidente del Patronato será nombrado por el Gobierno de la nación, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, oído el órgano competente de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Esto lo tuvieron que rectificar de prisa y corriendo luego en el debate. Aquí es donde se ve quién está defendiendo a las Comunidades Autónomas. No se defienden simplemente en declaraciones, se defienden en leyes concretas, como ésta, en la que se demuestra que creemos en las Comunidades Autónomas y que tenemos fe absoluta.

Lo que ya me sorprende totalmente es que dicen: ... ¿y eso de comarcal? Como si estuviéramos hablando de una cosa rarísima. Los ayuntamientos, los entes locales son los que tienen el origen histórico más importante de todas las instituciones en nuestro país, y las comarcas son asociaciones de ayuntamientos con intereses comunes. Fíjese usted qué sorpresa cuando desde el Partido Socialista en Castilla-La Mancha nos proponen una ley electoral, que se incluyan distritos comarcales para elegir diputados regionales, y aquí, en una ley que es —entiendo yo— menos importante, para poner uno o tres representantes ecologistas, nos dicen: ¡Qué barbaridad! ¿Qué dice usted? ¿La comarca? Pero si dentro de unos meses vamos a elegir a los representantes del pueblo por comarcas, ¿cómo me cuenta usted esta barbaridad? No hay quien les entienda.

Lo último que me falta por oír es que cuando se llega al tema de los ayuntamientos, dicen: ustedes les van a quitar las competencias a los ayuntamientos. ¡Esto ya es increíble!

Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y el Grupo Parlamentario Socialista retiran la enmienda número 1, que dice lo siguiente: «Se modifica el artículo 22.4 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales...», y habla de las corporaciones locales para la propia gestión. Después manifiestan que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que establece la co-gestión entre las Comunidades Autónomas y entre la Comunidad o el Gobierno central, y añaden: ¿quién está aquí afectando a los ayuntamientos? Nosotros ni los hemos citado, nosotros estamos hablando de las comarcas.

Aquí el problema es que desde el primer momento no se ha querido entender la realidad de la que estamos hablando. Estamos hablando de un parque en el que deben tener una presencia fundamental las Comunidades Autónomas; estamos hablando de la conservación del medio ambiente desde el agente que tiene competencias; estamos hablando de dos posiciones, una, que deja para la tribuna la defensa autonómica, y otra muy distinta la que deja para los temas concretos la defensa autonómica.

La Directiva 92/43 —que ustedes parece ser que no se han enterado que existe— que habla de los convenios con los particulares, establece ya en el principio que la protección del medio ambiente debe hacerse teniendo en cuenta las exigencias económicas, sociales, culturales y regionales de cada una de las zonas. Dice en uno de los artículos que debe ser el convenio la fórmula mejor para adaptarlo.

Y, fíjense, don Felipe González ha firmado esta Directiva; no se ha trasladado a la legislación. No estamos diciendo nada raro.

Pero es que, además, estamos hablando de un parque que en su 90 por ciento está en manos privadas. ¿Ustedes qué pretenden? ¿Convertirlo en un parque estatizado, nacional o público? Quieren hacer una cosa que es una barbaridad, y que voy a leer a todos los Senadores. Fíjense ustedes: el Parque Nacional natural de Cabañeros en la parte pública, en la que es propiedad pública, no privada, este año se va a autorizar que maten 1.200 reses —está publicado en este documento—. ¿Saben por qué? Por la nefasta gestión. No sé cómo van a matar 1.200 reses —será con ametralladora, no sé lo que van a hacer ustedes—, pero ¿éste es el ejemplo de la gestión de un ente público? (*Rumores.*) Eso no se le ocurre a nadie: sacan 1.200 reses para matar en un terreno de carácter público —lo tengo en un documento que obra en mi poder—. Es increíble, y tal vez lo que busquen ustedes sea repetir esas comidas de carácter político que tienen tan habituales en los terrenos públicos. Hay una muy famosa que ustedes recordarán (*Fuertes rumores.*), con la presencia de don Felipe González, del juez Garzón y del señor Bono en el famoso fichaje. A alguno le habrá sentado mal esa comida. (*Fuertes rumores.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Señor Molina, ruego que vaya concluyendo.

El señor MOLINA GARCÍA: Voy terminando, señor Presidente.

¿Eso es lo que pretenden? No. Nosotros tenemos una filosofía muy clara desde el primer momento; jamás nos hemos opuestos a la protección del Parque Nacional. Ha habido algunos, como ustedes, que han defendido un campo de tiro y ahora defienden el Parque Nacional. Nosotros hemos venido diciendo lo mismo desde hace mucho tiempo. En segundo lugar, hemos venido defendiendo las competencias autonómicas y, en tercer lugar, y con esto termino... (*Rumores.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Ruego silencio a la Cámara. Silencio. Atendan al orador.

Señor Molina, su tiempo ha transcurrido en exceso.

El señor MOLINA GARCÍA: Me gustaría terminar, si me permiten, diciendo algo que me parece muy grave. Se ha dicho públicamente por dirigentes políticos: Da igual lo que apruebe el Senado, que en el Congreso vamos a cambiarlo. A mí me parece que este ejemplo, como representantes por excelencia de los territorios que residen precisamente en esta Cámara del Senado, de un partido político como el socialista diciendo que esto no va a valer para nada, demuestra, desde el principio hasta el final, que la filosofía de sus palabras son distintas a los hechos.

Muchas gracias. (*Aplausos en los escaños del Grupo Popular.—Protestas en los escaños del Grupo Socialista.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Molina. (*Los señores Galán Cano y Barbuzano Gon-*

zález piden la palabra.) ¿Los señores Barbuzano y Galán solicitan la palabra en función de qué artículo?

El señor BARBUZANO GONZÁLEZ: Por el artículo 87, señor Presidente, porque he sido discutido en mis argumentaciones.

El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Si el Senador ha resultado discutido en sus argumentaciones, tiene tres minutos en virtud del artículo 87.

El señor BARBUZANO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor Presidente, me sobran.

Nuestro Grupo no se considera responsable, en absoluto, de que el proyecto de ley, como se ha dicho, salga con un representante de las asociaciones ecologistas. Nuestro Grupo votó a favor del texto remitido por la Cámara que decía: tres representantes de las asociaciones. Imagínese usted, señor Presidente, y lo digo a efectos del «Diario de Sesiones», si cada vez que un grupo parlamentario no firma una enmienda transaccional es responsable de lo que la enmienda transaccional pretende. Nada más que ésa era la argumentación que me habían discutido, no digo quién. No es costumbre de nuestro Grupo entre grupos de la oposición hacer estas cosas, sino con el Grupo que sostiene al Gobierno que es lo parlamentariamente correcto.

Muchas gracias, señor Presidente. (*Aplausos en los escaños del Grupo Socialista.—El señor Vicepresidente Rigol i Roig ocupa la Presidencia.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Vamos a conceder primero la palabra al Senador Martínez Sevilla.

El señor MARTÍNEZ SEVILLA: Señor Presidente, también pido la palabra por el artículo 87, ya que me he sentido aludido en los argumentos.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Tiene un minuto.

El señor MARTÍNEZ SEVILLA: Voy a tratar de ser breve.

En cualquier caso, señor Presidente, quiero manifestar, por supuesto, que los responsables de que aparezca un representante ecologista en el Patronato son los que han votado esa enmienda, no los que hemos votado que hubiese tres representantes ecologistas. El colmo ya sería pretender que el cántaro pagase la leche; es algo absolutamente fuera de razón. Por tanto, cargue cada uno con la responsabilidad que tiene.

En segundo lugar, quiero decir al representante de Convergència i Unió, que ha aludido a ello, que los representantes ecologistas no nos sentimos dueños del medio ambiente. Ahora bien, somos los que con más ardor, los que con mayor interés y los que sin duda alguna hemos defendido el Parque Nacional de Cabañeros y hoy Cabañeros se está declarando Parque Nacional porque allí ha habido ecologistas acampados durante mucho tiempo y porque se ha desarrollado una lucha intensa y larga por ese parque.

Por tanto, hoy se declara Parque Nacional Cabañeros debido y gracias al movimiento ecologista. (*Rumores.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señorías, estamos sustanciando la última parte de un debate pedido, no programado. Pido silencio, por favor.

Tiene la palabra el Senador Galán por el artículo 87. Tiene un minuto.

El señor GALÁN CANO: Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero decir al Grupo Parlamentario Popular que en el programa electoral del Partido Socialista aparecía: Declararemos Parque Nacional a Cabañeros; que en la declaración que se hace cuando se aprueba la Ley de Espacios Naturales el Ministro dice: Declararemos Parque Nacional a Cabañeros y que la dignidad con la que trabajan y quieren vivir los que habitan en la zona se la deben preguntar a los seis alcaldes que cuando han oído las enmiendas que introducía el Grupo Parlamentario Popular aquí en el Senado han dicho que no permitirán que se apliquen esas enmiendas para la gestión del Parque. (*Aplausos en los escaños del Grupo Socialista.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, muchas gracias.

El Senador Ferrer tiene la palabra por un minuto, me imagino que por el artículo 87.

El señor FERRER I PROFITÓS: Muchas gracias, señor Presidente.

Sólo quiero expresar mi satisfacción al representante de Izquierda Unida por manifestar públicamente que las asociaciones ecologistas no se consideran monopolizadoras del cuidado del medio ambiente.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.

El minuto correspondiente al Senador Molina. Tiene la palabra.

El señor MOLINA GARCÍA: Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero decir al portavoz socialista que tiene usted razón; en el programa electoral venía que Cabañeros iba a ser un parque nacional. Lo que no han dicho es que a pocos kilómetros tienen ustedes un campo de tiro que está en Anchuras y que ésa es la coherencia de su partido.

Muchas gracias. (*Protestas en los escaños del Grupo Socialista.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Vamos a someter a votación... (*Rumores.*)

Les aseguro, señorías, que a lo largo de la tarde tendremos más emociones fuertes. Se pueden contener un rato. Les pido, por favor, de veras, que podamos entrar en la votación con la seriedad que corresponde a esta Cámara. Muchas gracias.

Vamos a someter a votación el voto particular número 1, del Grupo Parlamentario Socialista.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 252; a favor, 125; en contra, 127.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazado.

Vamos a someter a votación el voto particular número 2, del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 251; a favor, 114; en contra, 135; abstenciones, dos.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazado.

Vamos a someter a votación el texto del dictamen, artículos 1 a 11 y disposiciones adicionales primera a cuarta. (*El señor Martínez Sevilla pide la palabra.*)

Senador Martínez Sevilla, ¿por qué pide la palabra?

El señor MARTÍNEZ SEVILLA: Para pedir votación separada del texto del dictamen, si es posible, del artículo 2, e), del artículo 8, f) y del primer párrafo del apartado 2 del artículo 10. (*El señor Garrido Ávila pide la palabra.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Tiene la palabra el Senador Garrido.

El señor GARRIDO ÁVILA: Señor Presidente, también es para una petición de votación separada, complementando lo que ha pedido el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, en el sentido de que también nos referimos al subapartado f) del apartado 2 del artículo 8, el objeto específico del voto particular del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.

Primero vamos a someter a votación lo que ha sido anunciado en último lugar, el subapartado f) del apartado 2 del artículo 8. (*El señor Ferrer i Profitós pide la palabra.*)

Tiene la palabra el señor Ferrer.

El señor FERRER I PROFITÓS: Señor Presidente, para una cuestión de orden.

Nuestro Grupo no quiere hacer cuestión de si se puede votar separando los artículos, esa es función de la Presidencia.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Así es.

El señor FERRER I PROFITÓS: Pero, para no confundirnos, lo que sí quiere saber nuestro Grupo es si al final habrá votación del dictamen en su conjunto. Si no, váyanos advirtiendo, por favor, de cuál es la votación definitiva de cada parte del dictamen de la Comisión.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Habrá votación definitiva del texto global. (*Rumores.—Pausa.*)

Vamos a suspender la sesión por cinco minutos.

Ruego a sus señorías que no se ausenten. (*El señor Presidente ocupa la Presidencia.—Pausa.*)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

La Mesa, a tenor de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento y por mayoría, ha decidido someter a votación por párrafos, tal y como había sido solicitado por dos grupos parlamentarios, el texto del proyecto de ley de declaración del Parque Nacional de Cabañeros.

Vamos a someter, por tanto a votación, en primer lugar, antes de pasar a someter el conjunto del dictamen, y solicito, en todo caso, auxilio de los señores portavoces, el subapartado f) del apartado 2 del artículo 8.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 249; a favor, 128; en contra, 113; abstenciones, ocho.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Sometemos a votación el primer párrafo del apartado 2 del artículo 10.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 253; a favor, 249; en contra, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. Sometemos a votación el artículo 8 apartado f). Se anula la votación. (*Rumores en los escaños del Grupo Popular.*)

El señor Martínez Sevilla tiene la palabra.

El señor MARTÍNEZ SEVILLA: Señor Presidente, si es posible para la ordenación del debate podría haber sido posible hacer toda la votación separada de artículos en un solo bloque, pero en todo caso los que quedan se pueden hacer en un único acto, es decir, el artículo 8 apartado f) y el artículo 2 letra e).

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación el artículo 2, apartado e).

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 249; a favor, 246; en contra, dos; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Sometemos a votación el resto del articulado, disposiciones, anexos y exposición de motivos del dictamen.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 252; a favor, 251; en contra, uno.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados. Por tanto, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución se dará traslado a las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.

— DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 38/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DE IMPUESTOS ESPECIALES. PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S. 21/000092) (C. D. 121/000103.)

El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. ¿Algún miembro de la Comisión va a hacer presentación del dictamen? (Pausa.)

El señor González Laxe tiene la palabra.

El señor GONZÁLEZ LAXE: Muchas gracias, señor Presidente.

Por parte de la Comisión de Economía y Hacienda va a hacer la presentación el Senador don Arseni Gibert.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. El Senador Gibert tiene la palabra.

El señor GIBERT BOSCH: Muchas gracias, señor Presidente.

El texto remitido por el Congreso de los Diputados del proyecto de ley por el que se modifica la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, fue publicado el 28 de septiembre en el Boletín Oficial del Senado. El día 29 dicho Boletín publicó una corrección de errores del Congreso que quedó incorporada al texto. El proyecto de ley pretende adaptar a la legislación española la Directiva 94/74 CE del Consejo de 22 de diciembre de 1994, conocida como segunda Directiva de simplificación de impuestos especiales, así como clarificar algunos aspectos de conformidad con los criterios interpretativos, emanados a nivel comunitario después de dos años de aplicación del sistema determinado por tres directivas de 1992.

El plazo de presentación de enmiendas finalizó el día 2 de octubre, y dentro de él fueron presentadas seis: dos del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y cuatro del Grupo Parlamentario Popular. La tramitación del proyecto fue encomendada por la Mesa de la Cámara a la Comisión de Economía y Hacienda, que nombró una Ponencia. Ésta elaboró un informe que fue rechazado en votación por la comisión reunida en pleno el día 9 de octubre.

En aplicación del artículo 116.2 del Reglamento del Senado, se pasó a la votación de las enmiendas, aprobándose la número 1 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y siendo rechazadas las restantes.

El dictamen que la Comisión de Economía y Hacienda somete a la consideración del Pleno es, pues, el texto remitido por el Congreso —con corrección de errores incluida— con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, aprobada en Comisión.

Los grupos enmendantes han mantenido, mediante los correspondientes votos particulares, la totalidad de sus enmiendas, cinco en total.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Vamos a abrir el debate de totalidad.

Turnos a favor y en contra. ¿Señores portavoces que deseen intervenir?

Tiene la palabra el Senador Barbuzano.

El señor BARBUZANO GONZÁLEZ: Gracias, Presidente.

Voy a ser muy breve. Sólo deseo mostrar nuestra conformidad con el dictamen de la Comisión y, por lo tanto, con el texto remitido por la Cámara Baja.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor Marca.

El señor MARCA I CAÑELLAS: Gracias, señor Presidente.

No han transcurrido todavía tres años y ya nos vemos en la necesidad de actualizar algunos aspectos de esta ley. Recientes modificaciones acaecidas en la normativa comunitaria dentro del marco de la llamada armonización nos obligan a ello.

La Directiva 94/74 del Consejo de la Comunidad Económica Europea, de 22 de diciembre de 1994, ha modificado directivas anteriores relativas al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto del impuesto especial. Esta Directiva simplifica la aplicación del impuesto y aclara los criterios interpretativos emanados desde la Comunidad. Los conceptos de uso, como carburante o combustible, el alcance de determinadas sanciones respecto a ciertos productos importados que contienen alcohol y la tenencia de productos distintos de éste pero que lo contienen, han quedado bien definidos y enmarcados.

El hecho de que a su paso por el Congreso fuera mínimamente enmendado el proyecto y de que en el trámite que hoy nos ocupa sólo se hayan añadido seis enmiendas ya dice por sí solo que el proyecto es poco discutible y, por lo tanto, difícilmente enmendable.

Nuestro Grupo entiende que el proyecto es correcto, necesario y, desde el punto de vista comunitario, obligatorio. En consecuencia, vamos a votarlo afirmativamente al final de este último trámite.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Marca.

¿Algún otro señor portavoz desea intervenir? (Pausa.)

Entramos en el debate del articulado.

Voto particular del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convèrgencia i Unió a la enmienda número 2. ¿Se da por defendida?

Tiene la palabra el Senador Marca.

El señor MARCA I CAÑELLAS: Gracias.

Quiero hacer una pequeña aclaración, señor Presidente.

Después de que en el trámite en Comisión fuera aceptada nuestra enmienda número 1, ya sólo queda para este trámite de defensa de las enmiendas la número 2, que, con un texto prácticamente igual a la número 4 del Grupo Parlamentario Popular, ha sido transaccionada y supongo que habrá llegado a la Mesa.

Esta enmienda transaccional se refiere a la delimitación que la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas hace respecto de los hidrocarburos distintos de aquellos para los que se ha especificado un nivel de impuesto especial, en este caso la tarifa 1.ª y se destinen a la venta, se utilicen como combustible o como carburante.

En este caso se aplicará el impuesto correspondiente al tipo de combustible o carburante equivalente, lo que nos parece justo. Esta transaccional quedaría incompleta si no se aprobara la enmienda número 4, del Grupo Parlamentario Popular, que da coherencia a lo que acabo de exponer. Con ello creo que habremos contribuido a que este proyecto de ley de modificación de la Ley de Impuestos Especiales quede mejorado y, sobre todo, adecuado a las directivas europeas.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a las enmiendas números 3 a 6, del Grupo Parlamentario Popular.

Tiene la palabra el Senador Escudero Sirerol.

El señor ESCUDERO SIREROL: Muchas gracias, señor Presidente.

Intervengo en este turno para defender las enmiendas a este proyecto de ley que modifica los impuestos especiales y que tiene dos objetivos especialmente declarados. El primer objetivo, que es el de incorporar modificaciones normativas comunitarias, sólo lo consigue de una forma parcial. Por ello, nuestras enmiendas números 5 y 6 pueden mejorar la definición de instrumentos esenciales para la gestión del impuesto. El segundo objetivo, que es el de perfeccionar algunos aspectos del impuesto, no se consigue en absoluto; por el contrario, se produce un importante retroceso que tratamos de subsanar con nuestras enmiendas números 3 y 4.

En efecto, con este proyecto de ley se sujetan a gravamen y se declaran después exentas operaciones relativas a productos que no van a ser utilizados como combustible o carburante, aumentando las obligaciones formales de fabricantes de lubricantes, de barnices y de otros productos químicos que deberían estar excluidos. Por ello, nuestra enmienda número 3 dice: «Los hidrocarburos distintos de los especificados en la Tarifa 1.ª» —combustible y carburantes en sentido estricto— «estarán sometidos al impues-

to si se destinan al consumo o se ponen a la venta como combustible o carburante. El tipo impositivo se fijará, en función de la utilización, de acuerdo con el tipo aplicable al combustible o carburante equivalente.» Aquellos que no son combustibles o carburantes, aunque sean susceptibles de ser utilizados como tales, no pueden ser objeto del impuesto.

La enmienda número 4 supone, en coherencia con la anterior, la exención de aquellos productos que no van a ser utilizados como combustible o carburante.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Escudero Sirerol.

Para turno en contra, tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos.

La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.

Subo a la tribuna, en primer lugar, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista en contra de las enmiendas presentadas por los Grupos de Convèrgencia i Unió y Popular. Si me lo permiten, como cuestión previa, quisiera puntualizar dos cosas. En primer lugar, como decía el Senador Marca, que se trata de un proyecto de ley que viene a dar cumplimiento a una directiva comunitaria de simplificación de estos impuestos y, por tanto, nos obliga. Pero también diré que se ha aprovechado este proyecto de ley para clarificar algunos otros aspectos de la normativa de la reglamentación de este impuesto que, tras dos años o más de actualización y de cumplimiento, parecían oportunos.

En ese contexto hay que indicar que esta modificación legislativa no supone ninguna modificación de la carga tributaria y que sólo viene a cubrir y a modificar determinados aspectos técnicos que están conectados con la simplificación en el cumplimiento de las obligaciones formales de estos impuestos.

Paso ahora a referirme puntualmente a las enmiendas. La número 3, del Grupo Popular, coincidente con la número 2, del Grupo de Convèrgencia i Unió, pretende añadir un nuevo apartado, tratando de transcribir de forma literal la Directiva europea. Sin duda, señorías, cualquier directiva comunitaria tiene un carácter genérico de obligación, pero son los Estados miembros los que tienen que adaptarla a sus normas tributarias. Y en cuanto a la forma de aplicar esta Directiva en concreto —sobre todo, después de la experiencia, como antes indicaba, de más de dos años de cumplimiento de la norma—, se ha preferido hacerlo, no en un solo precepto, recogido en un solo artículo, sino a través del engarce de varios preceptos, recogidos en los Capítulos I y VII del Título I.

En el caso de esta enmienda, al traducir la expresión «estarán sometidos al impuesto» a lo que es la técnica tributaria española, resulta un hecho imponible combinado con diversos supuestos de exención en función del uso del producto como carburante o como combustible. Señorías, la transcripción literal que proponen los Grupos Popular y de Convèrgencia i Unió en sus enmiendas supondría dejar

al margen del ámbito objetivo de la ley —y, por tanto, que no puedan ser objeto no sólo de la imputación del impuesto, sino de los posibles beneficios de exención que pudieran devenir— algunos productos; en este caso, a los que no se utilizan como carburante o como combustible.

La propia Comisión Europea, al formular la Directiva de simplificación, ha matizado los criterios que, con anterioridad, recogía el Decreto-ley de 1993, y llega a la conclusión de que en la Tarifa 2.^a hay comprendidos algunos productos —los sensibles— que, por su idoneidad técnica para ser usados como combustible o como carburante —y, por tanto, poder ser una fuente de fraude—, no podían quedar fuera de los sistemas de control. Eso ha exigido un enfoque en la normativa española y, en consecuencia, que se recogiera la norma en esta modificación de la Ley 38/1992, de Impuestos Especiales, en el sentido en que se hace. De ahí que el Grupo Socialista vaya a votar en contra de estas enmiendas y, en consecuencia, de la número 4, que viene a dar cumplimiento a la propuesta por el Grupo Popular como número 3.

Por otra parte, Senador Escudero Sírerol, en cuanto a la enmienda número 5, que también pretende una transcripción literal de la Directiva, ya le dije al Senador Utrera —ausente en estos momentos de la Cámara— que al adaptar la norma comunitaria a nuestro Derecho tributario hemos hablado de dos tipos de depósitos fiscales: el de fábrica, que no sólo hace las funciones de almacenamiento, envío y recepción, sino también la de producción, y aquella otra titularidad de depósito fiscal «stricto sensu», que no realiza operaciones de producción y, por tanto, tampoco de fábrica. Pero ambos son depósitos fiscales, y no se trata más que de una forma de gestionar el impuesto con mayor eficacia, pero totalmente respetuosa con la norma comunitaria.

Con respecto a la enmienda número 6, que también plantea una transcripción literal y entra en el campo de las definiciones, haciendo referencia a lo que es el régimen suspensivo, tengo que decir que aceptar esta enmienda implicaría suprimir de la ley una frase, que leo literalmente: En el que habiéndose realizado el hecho imponible, es decir, la fabricación o la importación, no se ha producido el devengo, es decir, la salida o fábrica o depósito fiscal en el momento del consumo y, en consecuencia, no sería exigible el impuesto.

Señorías, y se lo decía también al Senador Utrera en Comisión, salvo por el deseo de la transcripción literal, no es entendible que se quiera modificar este precepto, esta definición, que está perfectamente traducida a la terminología tributaria del Derecho español.

Para terminar, les diré que las directivas no pueden transcribirse literalmente al ordenamiento de cada país, sino traducirse a ese ordenamiento y ser respetuoso con nuestras normas, dentro, sin duda, del marco comunitario.

Por todo ello, vamos a votar en contra de las enmiendas presentadas por los grupos.

Muchas gracias, señor Presidente. *(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)*

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Pleguezuelos.

Turnos de portavoces.

Tiene la palabra don David Marca.

El señor MARCA I CAÑELLAS: Está clarísimo, Senadora Pleguezuelos, que su señoría o su asesoría jurídica ha hecho una interpretación de la Directiva muy diferente a la nuestra. Sabemos que no hay ninguna necesidad, ninguna obligación de transcribirla directiva y textualmente, pero nosotros lo interpretamos tal y como lo hemos hecho en nuestra enmienda. También lo ha interpretado así el Partido Popular. Por eso hemos hecho la transaccional y vamos a votar en consecuencia.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Escudero.

El señor ESCUDERO SIREROL: Muchas gracias, señor Presidente.

Únicamente quiero hacer la observación de que uno de los objetivos fundamentales del proyecto de modificación de Impuestos Especiales era el de corregir el fraude y, desgraciadamente, tal y como va a quedar no se va a conseguir.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Tiene la palabra la señora Pleguezuelos.

La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.

En efecto, Senador Marca, la interpretación que hemos hecho de la Directiva, como su señoría plantea, se ha adaptado al ordenamiento tributario español, pero debemos cuidar que los controles burocráticos, siendo los mínimos, no sean fuente de fraude. Ésa es la interpretación que hemos hecho. Además, pensamos que crea un equilibrio adecuado entre lo que fue la Directiva originaria de la Ley 38, la Directiva intermedia que originó el Decreto-ley y esta última, que pone de manifiesto que en los países de la Unión Europea se han detectado fraudes por este tipo de productos sensibles al mismo.

Toda fuente de control debe ser prioritaria y así lo hemos interpretado. Senador Escudero Sírerol, cualquier posibilidad de evitar que cualquier contribuyente cometa un fraude es importante, entendiéndolo, sin duda alguna, que posiblemente la lucha contra el fraude se manifieste desde distintos puntos de vista para su Grupo y el nuestro. Por eso la mantenemos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: No vamos a someter a votación la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, puesto que está integrada, junto con la número 3, del Grupo Parlamentario Popular, en la enmienda transaccional. ¿Es así, Senador Marca? *(Pausa.)*

Entonces, restan por votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, números 4, 5 y 6. *(El señor Marca i Cañellas pide la palabra.)*

Senador Marca, tiene su señoría la palabra.

El señor MARCA I CAÑELLAS: Le pido, por favor, votación separada de la número 4.

El señor PRESIDENTE: Así se hará.

¿Alguna otra indicación? (Pausa.)

Votamos la enmienda número 4, del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 249; a favor, 131; en contra, 110; abstenciones, ocho.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Se someten a votación las enmiendas números 5 y 6. Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 248; a favor, 112; en contra, 110; abstenciones, 26.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Vamos a someter a votación la enmienda transaccional que suscriben cinco grupos parlamentarios, con excepción del Grupo Parlamentario Socialista, cuya redacción es la siguiente: Se añade un nuevo apartado al artículo 46, con la siguiente redacción: Los hidrocarburos distintos de aquellos especificados en la Tarifa 1.ª estarán sometidos al impuesto especial si se destinan al consumo, se ponen a la venta o se utilizan como combustible o como carburante. El tipo impositivo se fijará en función de la utilización, de acuerdo con el tipo aplicable al combustible o carburante equivalente.

La sometemos a votación.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 249; a favor, 137; en contra, 110; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Vamos a someter a votación el texto del dictamen con las modificaciones introducidas.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 249; a favor, 248; en contra, uno.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado y, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.

— DE LA COMISIÓN DE INTERIOR Y FUNCIÓN PÚBLICA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE

LEY SOBRE LA CREACIÓN DE UN FONDO PROCEDENTE DE LOS BIENES DECOMISADOS POR TRÁFICO DE DROGAS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS. (S. 621/000093.) (C. D. 121/000102.)

El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Interior y Función Pública en relación con el Proyecto de ley sobre la creación de un fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el Senador Barranco.

El señor BARRANCO GALLARDO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, me cumple el honor de presentar ante este Pleno el dictamen de la Comisión de Interior y Función Pública sobre el Proyecto de ley sobre la creación de un fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados con el mismo. Es una ley que se ha tramitado por la vía de urgencia, que entró en esta Cámara el día 28 de septiembre y que se vio tanto en Ponencia como en Comisión el día 4 de este mes. El dictamen ha sido aprobado por unanimidad, pero sigue manteniendo vivas en este momento cuatro enmiendas: dos correspondientes al Grupo Parlamentario Popular, una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y otra enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

Quiero resaltar, fundamentalmente en nombre de la Comisión —a cuyos miembros, además, les agradezco la representación que me han otorgado—, el grado de consenso que ha habido sobre este Proyecto de ley, así como que responde a un problema real, concreto, posiblemente al factor de quiebra más importante con el que se enfrenta la sociedad contemporánea, que es la irrupción del tráfico y el consumo de drogas en nuestro país. Es, por lo tanto, una exigencia del conjunto de la sociedad, que se transforma para esta Cámara en una obligación moral y política.

Con la aprobación de este dictamen, por unanimidad, en la Comisión hemos dado un paso importante para la lucha contra la droga en su faceta de la prevención, de la asistencia a los toxicómanos y también en la reinserción de toxicómanos y drogodependientes. Los destinatarios y los beneficiarios de este fondo estatal, que se creará a partir de la aprobación definitiva de esta ley, son el Plan Nacional sobre las Drogas, pero también las Comunidades Autónomas, las corporaciones locales y las ONG dedicadas a la lucha contra la drogadicción.

Por lo tanto, el Senado, con este acto, que espero que culmine con una votación unánime de este Proyecto de ley, demuestra que no es indiferente a este grave problema y pone también de manifiesto que hay problemas en esta sociedad con los que no podemos convivir pacíficamente. Uno de ellos es el problema de la droga.

Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Abrimos el debate de totalidad. ¿Qué señores portavoces desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)

No habiéndose sostenido enmiendas de voto, vamos a iniciar el debate del articulado.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió dispone del tiempo para la defensa de la enmienda número 3.

Tiene la palabra el Senador Codina.

El señor CODINA I CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente.

En este momento retiramos la enmienda citada y anunciamos que nuestro Grupo intervendrá exclusivamente en el turno de portavoces.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Tiene la palabra el Senador Ardaiz, por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de su enmienda número 1.

El señor ARDAIZ EGÜÉS: Muchas gracias, señor Presidente.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una sola enmienda a este proyecto de ley; una enmienda meramente técnica que trata de mejorar la redacción del apartado b), número 1, del artículo 3 del proyecto. Con ella se trata de facilitar una más correcta aplicación de la ley en el ámbito autonómico y en el ámbito local en relación con las organizaciones no gubernamentales y las entidades privadas sin ánimo de lucro que operan en los respectivos ámbitos territoriales que acabo de citar.

Por otra parte, señor Presidente, quiero anunciarle que vamos a pasar a la Mesa de la Cámara una enmienda del mismo carácter que la anterior, suscrita por todos los grupos parlamentarios.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ardaiz.

Grupo Parlamentario Popular, enmiendas números 4 y 5.

Tiene la palabra el Senador Escuin.

El señor ESCUIN MONFORT: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular mantiene dos enmiendas al proyecto de ley que vamos a defender. Con una de ellas pretendemos una composición diferente de los miembros que, según el proyecto, en su artículo 4, conforman la Mesa de Coordinación de Asignaciones, órgano colegiado que crea el proyecto para el cumplimiento de los fines que en el mismo se relacionan.

Según el proyecto, la Mesa está compuesta por el Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, tres representantes del Ministerio de Justicia e Interior y otros tres del Ministerio de Economía y Hacienda. La modificación que proponemos consiste en mantener los mismos miembros que figuran en el proyecto, sustituyendo a uno de los tres representantes del Ministerio de Economía y Hacienda por un representante de la Intervención General del Estado e incorporando como nuevos vocales a un fiscal de la Fiscalía especial para la Prevención y Repre-

sión del Tráfico Ilegal de Drogas y a tres representantes de las asociaciones y organizaciones no gubernamentales dedicadas a la lucha contra la drogodependencia con mayor implantación nacional.

Si nos atenemos a la propia denominación de la Mesa, que es «de coordinación de asignaciones» y a que en su actividad debe seguir los criterios que anualmente acuerde el Consejo de Ministros, como así se repite y se insiste en los últimos párrafos de sus artículos 4 y 6, se configura esta Mesa no como un órgano decisorio, sino, más bien, como ya hemos indicado, de coordinación, de asesoramiento, de información, de consulta, pues esto, en definitiva, es lo que representa la propuesta de iniciativas que la Mesa hace al Consejo de Ministros anualmente para la adopción de los criterios en su actuación.

El proyecto de ley crea un fondo de bienes para distribuirlos y ser utilizados en programas de prevención de toxicomanías, asistencia a drogodependientes e inserción social y laboral de los mismos. Por ello parece obvio —diría más, nos parece indispensable— la incorporación de quienes, indudablemente, tienen una larga experiencia, competencia y especial interés en estos temas; además, los que son más afectados, los que sufren las consecuencias del consumo de drogas, que no son otros, claro está, que las asociaciones y organizaciones no gubernamentales, son también los que, a la postre, necesitan mayores recursos económicos para poder seguir su humanitaria labor. (*El señor Vicepresidente Rigol i Roig ocupa la Presidencia.*)

De otro lado, estimamos que la futura ley será más eficaz en su oportunidad y acierto si en el proceso de iniciativas de la mesa de coordinación todos los diferentes sectores que intervienen en el mundo de la droga pueden dar su opinión, pueden formular sus propuestas.

Así, pues, se puede alcanzar la perseguida coordinación y conocer todo el amplio campo de acción donde es necesario actuar. Con la distribución de fondos es igualmente necesaria, cómo no, la colaboración de las organizaciones y asociaciones que ya hemos citado y que pretendemos se incorporen a este órgano colegiado. Tenemos que recalcar que este proceso legislativo, este proyecto de ley nace a instancias de las organizaciones no gubernamentales, a las que precisamente el proyecto excluye sin considerar, aunque parezca inaudito, lo mucho que pueden aportar, aunque sólo sea a nivel de propuesta.

Nos resulta difícil pensar que esta exclusión pueda obedecer a recelos o desconfianzas para dejar toda la iniciativa únicamente en los representantes de los ministerios y en el Delegado del Gobierno, para que todo, en definitiva, controlado por el Gobierno, no sólo en la decisión, sino hasta en la iniciativa de las propuestas de distribución de fondos. Nos es difícil pensar en ello, pero así parece ser, más aún todavía cuando no encontramos argumentos convincentes que nos puedan demostrar lo contrario.

Ningún recelo para el Grupo Parlamentario Popular inspiran las citadas asociaciones u organizaciones, más bien todo lo contrario. Por las razones expuestas las consideramos absolutamente indispensables, porque su ausencia puede, incluso, provocar un fracaso de esta ley, un fracaso que en modo alguno nos gustaría se produjera, todo lo

contrario. Nuestro Grupo valora muy positivamente este proyecto de ley y esta enmienda que defendemos aspira, simplemente, a mejorar este proyecto, a que sea un éxito en el momento en que nazca y se aplique.

Por las mismas razones expuestas, consideramos que si beneficiario en la distribución de fondos es la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas, es oportuno, para prestar la debida información de las necesidades de la Fiscalía, que figure en el seno de la mesa un representante perteneciente a la Fiscalía Especial. Igual sucede con la representación de la Intervención General del Estado para poder desempeñar mejor su labor de control en la actividad del fondo.

La otra enmienda que mantenemos —con esto acabo, señor Presidente— es de adición a la disposición adicional primera, punto 2. Pretende añadir al final de este punto el siguiente texto: «En ningún caso se incluirán los gastos derivados de la aprehensión, tanto ocasionados a la Administración General del Estado como a otras Administraciones Públicas, así como tampoco los ocasionados por la venta en pública subasta de los bienes.»

Queremos que se imputen los menores gastos posibles a este fondo para que la mayoría de ellos puedan dedicarse al fin primordial que debe perseguir esta ley, que para nosotros es la asistencia a los drogodependientes.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

¿Turno en contra? (Pausa.)

¿Turno de portavoces? (Pausa.)

El Senador Codina tiene la palabra.

El señor CODINA I CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, subo a la tribuna, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, para posicionarme tanto respecto a la enmienda que ha defendido el Grupo Parlamentario Socialista, como de las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, y para dar una breve explicación de por qué hemos retirado nuestra propia enmienda. Antes quiero decir que es una ley que nos complace y, tal como se ha dicho por parte del Senador Barranco cuando ha presentado esta iniciativa, ha sido una ley que desde primera hora ha sido querida por todos; es una ley que se va a aprobar por unanimidad y el interés que han demostrado todos los miembros y, por tanto, los diferentes grupos de la Cámara, demuestra la sensibilidad que sienten y recogen en torno a un problema tan difícil como es el de la droga.

La finalidad de esta Ley es conseguir mayores fondos para la lucha y la represión del tráfico de drogas, en beneficio de los drogadictos y de la sociedad en general que está padeciendo una situación difícil. Como hasta este momento no ha habido las suficientes aportaciones en los Presupuestos Generales del Estado, se han querido destinar unos dineros, como materia finalista, que se recogerán de la venta de cualquiera de los elementos que se hayan podido decomisar, para la lucha contra la droga.

Dicho esto, querría comentar, muy brevemente, las enmiendas que, por este orden, han sido presentadas por el Grupo Socialista. Yo no creo, Senador Ardaiz, que la enmienda del Grupo Socialista sea una enmienda de orden técnico, y usted la ha comparado con la que hace un momento ha entregado a la Mesa y que hemos firmado todos los Grupos. Es posible que usted entienda que sea así; yo creo que usted entienda que esto sea así. Pero nosotros hemos tenido alguna experiencia negativa cuando estas entidades, especialmente las organizaciones no gubernamentales que tienen su sede, para entendernos, en un territorio determinado en una Comunidad Autónoma —en este caso puedo hablarle de la nuestra, de Cataluña, porque, lógicamente, es la que conozco con mayor profundidad—, han pretendido conseguir «beneficios», entre comillas, por el hecho de que su acción va más allá de su propio territorio y se incluye en otras Comunidades Autónomas del Estado español, pues no han sido calificadas como organizaciones que puedan actuar en el resto del Estado. Es una experiencia práctica que seguramente no tiene ninguna lógica, pero le puedo decir que en Cataluña, concretamente, la asociación APPS, organizada por padres de niños y niñas disminuidos, han tenido este tipo de dificultades.

A nosotros nos ofrece más garantía el texto tal como ha venido del Congreso que con las enmiendas que ustedes pretenden introducir, y que introducirán, porque ya se debatió en el seno de la Ponencia y en el de la Comisión que saldrá con los votos de su Grupo y del Grupo Popular. Con ese mismo respeto que yo le tengo a su voluntad de creer que es una enmienda técnica, espero que ustedes también entiendan que nosotros tengamos un cierto recelo y que estimemos, tal como he anunciado, que el texto tal como venía del Congreso de los Diputados tiene mayor garantía que con la introducción de la enmienda. Se lo digo sin ningún ánimo de debate, sino porque, tal como viene redactado, nos parece mucho mejor.

Con respecto al Senador Escuin, y a la defensa de sus dos enmiendas, quería comentarle respecto a la primera, que hace referencia a la ampliación de los miembros de la Mesa, que si usted plantea una ampliación de los miembros que la componen, posiblemente cada uno de los Grupos hubiéramos tenido también la posibilidad de, forzando un poco la imaginación, proponer a otros miembros representantes de otras entidades o de otros estamentos. No digo que sea malo, pero pienso que con la garantía que se ofrece en el proyecto de ley es suficiente, aunque usted ha marcado más el acento en la representación de las organizaciones no gubernamentales en esa Mesa.

Creo que el texto del proyecto, tal como ha entrado en el Senado procedente del Congreso de los Diputados, en su artículo 3, garantiza una de las fórmulas para poder adquirir este beneficio que van a conseguir las organizaciones no gubernamentales a través del fondo.

Ustedes, los socialistas, y nosotros hemos dicho muchísimas veces —cada vez que sale este tema lo repetimos desde la tribuna— que debemos darles fuerza para que puedan trabajar, y muchas veces ha sido así. Gracias a muchas de estas organizaciones no gubernamentales se ha podido atacar no sólo el problema de la droga, sino que si nos

adentráramos en el campo de los servicios sociales, por ejemplo, gracias a estas organizaciones se ha suplido muchas veces esta carencia y han ido mucho más allá de su obligación.

La ley lo recoge en su artículo tercero; usted tiene la pretensión de que, además, estén representados en la Mesa. Posiblemente no sobraría, pero seguramente convendrá conmigo en que también podríamos hacer propuestas de otras organizaciones que pudieran estar representadas. Por lo tanto, nuestro interés está en que esté garantizado el destino de los fondos, que sea posible aplicarlos a las ONGs, y con esta garantía nos parece que no es necesario que se amplíe la Mesa.

En cuanto a su última enmienda, tengo que confesarle que lo hemos debatido en el seno de nuestro propio Grupo y en algún momento hemos pensado que usted tenía razón; que era mejor garantizar que no hubiera ni una sola peseta que se distrajera para hacer aquellas cosas que se tienen que hacer a través de otras propuestas presupuestarias. No sería necesario que esto se detrayera de los fondos, pero no es lo deseado, y usted también me lo reconocerá, que esa es la enmienda que viene repescada, por así decirlo, del Congreso —cosa absolutamente normal, para eso está esta Cámara, para intentar corregir todas estas cuestiones que se puedan haber escapado en la Cámara baja— y que fue transaccionada por todos los grupos, garantizando que no más allá del 50 por ciento de esta recaudación se aplicaría para estos gastos que en un momento determinado, según quien aplique la ley, podrían derivarse.

Por lo tanto —y con esto termino, señor Presidente—, por ser respetuosos con una enmienda que fue transaccionada y negociada —y negociada quiere decir renunciando unos y otros a sus planteamientos para intentar llegar a acuerdos mayoritarios— con ese espíritu, señor Presidente, he anunciado que retiramos nuestra enmienda, por respeto a unos acuerdos que hubo en su momento. Yo encuentro absolutamente lícito que ustedes hoy intenten repescar aquello que fue su voluntad, pero basándome en este compromiso que hubo en el Congreso, nosotros retiramos nuestra enmienda que iba por el mismo camino, no en el mismo tema, pero sí en el mismo procedimiento, e invitaríamos a su señoría a que reflexionara y estudiara la posibilidad de no someterla a votación.

Señor Presidente, muchas gracias. Señorías, gracias por su atención.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Codina.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Ardaiz.

El señor ARDAIZ EGÚÉS: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, aunque la verdad es que es poco lo que puedo añadir a lo que han manifestado los portavoces de los grupos parlamentarios por la casi total coincidencia que existe respecto a los contenidos de este proyecto de ley, tengo la obligación de expresar la posición de mi Grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Socialista, tanto respecto a la

propia ley, como a las enmiendas y a algunas de las manifestaciones que se han realizado al aire de enmiendas retiradas por otros grupos parlamentarios.

De todas formas, vaya por delante la expresión de mi agradecimiento tanto al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, aunque no haya intervenido, como al Grupo de Convergència i Unió, porque retiraron sendas enmiendas, el primero en el trámite de Comisión y el segundo en este acto que hoy celebramos. Este agradecimiento quisiera extenderlo también al Grupo Parlamentario Mixto y al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos porque los cuatro grupos parlamentarios han respetado la unanimidad que este proyecto de ley obtuvo en el trámite del Congreso de los Diputados. Y han hecho algo más, algunos incluso han renunciado a rescatar algunas de las enmiendas que allí se retiraron en favor de las enmiendas transaccionales que se aprobaron por unanimidad.

De todos modos, señor portavoz de Convergència i Unió, mi buen amigo Codina, yo entiendo su recelo cuando modificamos palabras o conceptos tales como ámbito autonómico que es de lo que se trata en nuestra enmienda, pero también le digo, y creo que lo ha recogido bien en su manifestación en la tribuna, que nuestra intención con esa modificación no es de ningún modo dificultar la aplicación de la ley, sino facilitarla precisamente en el ámbito autonómico y local. Ya sé que no duda de nuestra buena fe, pero por si además de ese recelo que ha manifestado dudara, yo le garantizo que si trae alguna vez aquí la demostración de que precisamente la modificación que se opera con esta enmienda dificultara las relaciones en las Comunidades Autónomas con los ayuntamientos locales, con las organizaciones no gubernamentales, que es de lo que se trata, la iniciativa que usted traiga aquí la propondré para que en mi Grupo parlamentario se apruebe.

Respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular anuncio el voto de mi Grupo en contra de la enmienda que plantea la representación en la Mesa de Adjudicaciones a tres organizaciones no gubernamentales porque crearía ciertamente, y algún portavoz lo ha expresado así también, nuevos problemas que actualmente la ley no produce, ya que las tres organizaciones no gubernamentales afortunadas que propone el Grupo Parlamentario Popular decidirían el reparto del fondo del resto de las organizaciones no gubernamentales y entidades privadas sin ánimo de lucro que existen en nuestro país.

Por otra parte, yo he sentido un cierto tufillo de incongruencia o de incoherencia en esa propuesta porque se solicita que estén presentes organizaciones gubernamentales y un representante de la Fiscalía General. Y yo me pregunto, ¿por qué no el resto de los beneficiarios? ¿Por qué no, por ejemplo, representantes de las Comunidades Autónomas que son uno de los beneficiarios? ¿Por qué no representantes del servicio de vigilancia aduanera, o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o de otros organismos que se citan en el proyecto de ley y que, sin embargo, ustedes no recogen en la enmienda? No me puede negar usted que hay una cierta incoherencia en decir que sería bueno que participaran en la Mesa de Adjudicación unos de los beneficiarios y rechacen ustedes que participen otros, sin

mayor razón que aquella que ha manifestado aquí, que es la de que las organizaciones no gubernamentales hacen un buen trabajo en esta materia. Ciertamente estoy de acuerdo con ustedes en eso, pero en nada más.

Vamos a votar también en contra de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular que pretende excluir de las finalidades del fondo los gastos de aprehensión de drogas. Y la razón es evidente, señorías, éste es un proyecto de ley que quiere dejar patente y hacer bien visible ante los ciudadanos que el dinero que se decomisa a los narcotraficantes va a parar a un fondo que se dedica a combatirlos precisamente a ellos y al daño que su actividad ilegítima e ilegal produce.

Esta ley a fin de cuentas, porque había otros mecanismos que podían producir efectos similares en cuanto a la captación de los fondos, es un rearme moral para todos aquellos hombres y mujeres que, con evidente esfuerzo, realizan un trabajo, bien sea persiguiendo narcotraficantes, bien sea asistiendo a los drogodependientes. Por eso, desde ahora renunciamos a tomar parte en un debate que, a nosotros al menos, nos parece absolutamente estéril acerca de si los destinatarios del fondo que se creará por la ley han de ser las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con competencias en materia de narcotráfico o las organizaciones no gubernamentales que desarrollan labores de reinserción y rehabilitación de drogodependientes.

Tampoco tiene ningún sentido para nosotros plantear un debate tan improductivo como el anterior, sobre si entre los fines a que ha de destinarse el fondo deben contemplarse en exclusiva los programas de prevención y asistencia o también la investigación y persecución de los delitos de tráfico de drogas y conexos con él.

Lo sustancial para nosotros, señorías —y con esto termino—, es que quede palmariamente claro para los ciudadanos y, sobre todo, a los ojos de los ciudadanos que más comprometidos están en la lucha contra la droga, sean estos policías o sean voluntarios sociales, a todos a ellos, que los bienes incautados a esos narcotraficantes, a esos comerciantes de la muerte se van a dedicar precisamente a incrementar los recursos —siempre escasos, por cierto— de los que tanto unos como otros disponen.

Esto es lo sustantivo de la Ley, sobre lo que se fraguó la unanimidad en el Congreso de los Diputados, y éstas son las razones por las que vamos a votar en contra de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Ardaiz.

Tiene la palabra el Senador Escuin.

El señor ESCUIN MONFORT: Muchas gracias, señor Presidente.

Muy brevemente, voy a contestar en este turno de portavoces a las afirmaciones que ha hecho el digno representante de Convergència i Unió, el Senador señor Codina.

El señor Codina nos dice en cuanto a la primera de nuestras enmiendas que, además de las asociaciones no gubernamentales, podrían incluirse en un proceso —que

no ha explicado cuál podría ser— otras organizaciones. Podrían estar muchas de ellas incluidas en esta mesa de coordinación, y nosotros preguntamos por qué no lo han manifestado. Tenía tiempo suficiente para pedir, a través de enmienda, concretamente qué organizaciones, representaciones e instituciones podrían estar en esa mesa de coordinación. Por tanto, como no existe ninguna enmienda al respecto, no tengo por qué hacer referencia nada más que a lo que pedimos en las nuestras, lo cual es muy concreto: Pedimos tres representantes como vocales que representen a asociaciones y organizaciones no gubernamentales y hemos explicado muy claramente las razones para ello. También el mismo proyecto, en su disposición final, establece para este órgano colegiado las normas de funcionamiento y cómo se desarrollará. Pero entendemos que es nefasto para cualquier proyecto de ley alejar a un órgano como éste, que es solamente de iniciativa de propuestas. Insisto en que no va decidir nada, que la decisión la tomará el Consejo de Ministros. Propondrá en nombre de quién, a quién representan estas organizaciones y asociaciones. Éstas no representan al Gobierno, representan a los que más necesidad tiene de fondos, a las familias que están sufriendo las consecuencias de la droga, a los que no tienen dinero. Este dinero que han conseguido los traficantes de droga y que, a través de sentencias firmes, va a ser decomisado tiene que ser devuelto a los que sufren las consecuencias.

He dicho —repito— que este proyecto de ley nace precisamente porque estas organizaciones y asociaciones presionaron —todos pudimos verlo en los medios de comunicación— para que los bienes inmuebles de los narcotraficantes volvieran, a través de la ejecución de las sentencias, a estas asociaciones para poder cumplir un fin fundamental; no exclusivo, no el único. Hemos dicho que es fundamental porque es el que más fondos necesita para las labores de asistencia y de inserción de los drogadicictos.

Con esto termino, porque no quiero discutir lo que no existe. Discuto las enmiendas que he presentado, señor Codina, nada más. Usted hubiera podido presentar las que hubiese querido y entonces las hubiéramos discutido. Entiendo y mi Grupo entiende que estas asociaciones y organizaciones deben estar en el nivel de iniciativa, que, en definitiva, es orientación, consulta e información al Consejo de Ministros, para que éste adopte mejores decisiones, porque nosotros queremos que esta Ley sea eficaz. Estamos con esta Ley y ya les anuncio nuestro voto favorable a la misma. Pero lo que tiene que hacer un grupo parlamentario no es alabar la labor de quien ha redactado este proyecto sino exponer sincera y honestamente criterios para mejorar esta Ley.

Nosotros, honestamente, con estas enmiendas no queremos criticar la ley sino mejorarla; queremos que sea más eficaz. Pero, desde luego, con la opinión de estas organizaciones y asociaciones, consideramos que será mucho más eficaz este proyecto y no como está ahora, que todo se guisa y se come única y exclusivamente por el Gobierno tanto a nivel de iniciativa como a nivel de decisiones.

En cuanto a lo demás, señor Codina, no quiero referirme a los debates que han tenido lugar en el Congreso de

los Diputados. Solamente le diré que nosotros queremos que figure explícitamente en el proyecto de ley que no se imputarán al fondo los gastos derivados de la aprehensión y ejecución de los bienes. Precisamente se llegó a esta transacción también por una enmienda del Grupo Socialista en la que pedía expresamente todo lo contrario, es decir, que se incluyera, pero el espíritu de la transacción se rompe al no admitir que quede claro este concepto y no incluirlo en la ley.

Si se lee la letra a) del apartado 2 del artículo 2 puede verse que, según ese texto, sí que se pueden emplear fondos destinados a la investigación. Es decir, si por un lado pretendemos que no haya gastos por la aprehensión pero, por otro, aprobamos que haya gastos para la investigación, no habremos conseguido el espíritu de la transacción. Por eso, para conseguirlo sin que haya ninguna duda ni ninguna incoherencia —hemos reflexionado muy bien, señor Codina, lo hemos pensado muy bien, no hacemos las enmiendas al tuntún—, hemos pedido que clara y explícitamente se respete aquel principio de acuerdo que se plasmó en la transacción.

Con esto creo haber contestado a las críticas siempre amables, siempre correctas de nuestro compañero el Senador señor Codina.

Por lo que respecta al Portavoz del Grupo Socialista, creo que valdrían los mismos argumentos.

Pienso que en la Mesa de coordinación de asignaciones, órgano de iniciativa, podrían haberse incluido las que ustedes hubieran querido.

Insisto en los mismos argumentos. Yo defendiendo mis enmiendas y ustedes me critican lo que yo digo y no lo que pudiera ser, ya que lo que pudiera ser no se discute en estos momentos. Se discute lo que es y lo que es es nuestra enmienda.

Respecto a los demás argumentos, señor Ardaiz, yo no digo que con estos fondos se den medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Yo no he dicho eso. Lo que nosotros queremos es que no se detraigan fondos para los gastos de aprehensión, de investigación y de ejecución. En cuanto a lo demás, estamos totalmente de acuerdo en que haya fondos.

Yo espero que con esta ley no se disminuya uno de los programas que normalmente debatimos en los presupuestos generales del Estado, el de las actuaciones policiales contra la droga, al igual que esperamos que el Plan Nacional contra la droga no se reduzca. Confiamos que estas cantidades que debían estar en los presupuestos no se reduzcan con lo del fondo, porque en ese caso este proyecto de ley sería una carcasa fabulosa en favor —y así lo dice el artículo 2 en uno de sus fines, primero se refiere a la rehabilitación de los toxicómanos y a su reinserción social— de que se consigan fondos evitando que en los presupuestos se consignen las cantidades que necesitan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Mi Grupo Parlamentario quiere —y con esto termino— que los perjudicados por las drogas, que son —insisto en ello— las asociaciones y organizaciones no gubernamentales, tengan dinero suficiente para poder cumplir sus humanitarios fines. Nada más y nada menos.

Muchas gracias. (*Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Escuin Monfort.

Vamos a llamar para las votaciones. (*El señor Codina i Castillo pide la palabra.*)

¿En función de qué solicita la palabra, Senador?

El señor CODINA I CASTILLO: En función del artículo 87 del Reglamento.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Son las palabras mágicas.

Tiene un minuto para intervenir.

El señor CODINA I CASTILLO: Senador Escuin, hoy me ha hecho sentir usted casi miembro del Gobierno porque ha dedicado muy buena parte de su intervención a contradecir mis argumentos o mis comentarios —no han llegado a ser argumentos— respecto a sus dos enmiendas.

He pedido la palabra porque usted ha puesto en mi boca algo que yo no he dicho y, en todo caso, lo quiero aclarar. He defendido el texto de la Ley tal como venía y he pedido la reflexión de por qué no se podían haber incluido también otras, simplemente como ejemplo. He defendido que nos parecía mucho mejor como estaba, y le he comentado que existían unas propuestas hechas por su señoría que podían haber sido otras, pero yo no podía hacer otras porque estaba convencido de aquello que ya estaba escrito...

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador, el minuto ha pasado ya.

El señor CODINA I CASTILLO: Simplemente quería hacer esta aclaración.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias. (*El señor Presidente ocupa la Presidencia.*)

El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a las votaciones.

Sometemos en primer lugar a votación la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Socialista, correspondiente a su voto particular también número 1.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 251; a favor, 235; en contra, 14; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Del Grupo Parlamentario Popular resta someter a votación las enmiendas números 4 y 5.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 251; a favor, 116; en contra, 130; abstenciones, cinco.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Doy lectura a la enmienda que han suscrito los seis grupos parlamentarios referida al artículo 3.1 b). En lugar de «corporaciones locales» debe decir «entidades locales». ¿Se puede entender que la Cámara lo aprueba por asentimiento? (Pausa.)

Así se declara.

Vamos a someter a votación el dictamen con las modificaciones incorporadas en un sólo acto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 254; a favor, 254.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos.)

Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución se dará traslado al Congreso de los Diputados de las enmiendas aprobadas por el Senado para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción definitiva por Su Majestad el Rey.

— DE LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON LA PROPOSICIÓN DE LEY DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS. (S. 622/000005.) (C. D. 124/000002.)

El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión Constitucional en relación con la Proposición de ley de organización del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Señor Presidente de la Comisión Constitucional, tiene la palabra.

El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas gracias, señor Presidente.

La Comisión tuvo a bien delegar en el propio Presidente de la Comisión para presentar el dictamen.

El señor PRESIDENTE: Su señoría tiene la palabra.

El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas gracias, señor Presidente.

El 18 de noviembre del año 1993 se publicó en el Boletín Oficial de esta Cámara una proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular del Senado, denominada de Organización del Centro de Investigaciones Sociológicas. A esta iniciativa del Grupo Popular no se presentó ninguna proposición de ley alternativa y, por consiguiente, fue sometida directamente al trámite de toma en consideración por el Pleno del Senado. La proposición de ley fue tomada en consideración en la sesión del 9 de febrero de 1994, por 234 votos a favor y una abstención, por lo que fue remitida al Congreso de los Diputados para su ulterior tramitación.

El Congreso de los Diputados tramitó esta iniciativa del Senado, introduciendo una serie de modificaciones en el

texto y procediendo en sesión plenaria, del día 22 de junio de 1995, a la aprobación del que posteriormente fue remitido al Senado.

El texto aprobado por el Congreso de los Diputados fue publicado en el Boletín Oficial de esta Cámara el pasado día 27 de junio, abriéndose el correspondiente plazo de presentación de enmiendas. Diez fueron las enmiendas presentadas, de las que tres correspondían al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y siete al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. La Ponencia, integrada por los Senadores don Vicent Beguer i Oliveres, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió; don Esteban González Pons, del Grupo Parlamentario Popular; don José Juan Cardona, del Grupo Parlamentario Popular; don Francisco Moreno Franco, del Grupo Parlamentario Socialista, y don Lorenzo Selas Céspedes, del Grupo Parlamentario Socialista, acordó en su informe no introducir por el momento modificaciones en el texto aprobado por el Congreso de los Diputados.

La Comisión Constitucional se reunió el pasado día 25 de septiembre para dictaminar esa proposición de ley y en este trámite sí que se introdujeron varias modificaciones en la proposición de ley en aras de conseguir el mayor consenso posible sobre un asunto cuya naturaleza lo requiere.

Las principales modificaciones introducidas por la Comisión son las siguientes: en el artículo 3 se introduce un nuevo apartado b) en el que se determina que dentro de las funciones de CIS está la de realizar estudios que contribuyan al conocimiento científico de la realidad social de las diferentes Comunidades Autónomas cuando esto proceda.

En el artículo 4 se modifica el inciso final para establecer que el CIS deberá, en el primer trimestre de cada año, elevar a las Cortes Generales una memoria relativa a la ejecución del programa correspondiente al ejercicio precedente, relación que alcanza una concreción temporal mayor que la establecida en el texto remitido por el Congreso de los Diputados.

En el apartado 5 del artículo 6 y en el artículo 7 se establece en qué casos el Centro deberá también poner en conocimiento de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas los trabajos y las encuestas que hubieren realizado.

Quisiera resaltar la unanimidad de todos los Grupos en la aprobación de este dictamen consecuencia del alto grado de acuerdo al que llegaron sus portavoces, a los que quiero públicamente felicitar por sus esfuerzos de consenso, probablemente como consecuencia de estos esfuerzos no se han presentado votos particulares al dictamen.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Abrimos el debate de totalidad.

¿Señores portavoces que desean hacer uso de la palabra?

Tiene la palabra el Senador Barbuzano.

El señor BARBUZANO GONZÁLEZ: Gracias, Presidente.

Voy a ser muy breve. Sólo deseo decir que durante la tramitación en la Cámara Baja de esta ley se hizo un tremendo esfuerzo entre todos los grupos para consensuarla, exactamente igual que el que hicimos aquí en el Senado. Unas enmiendas que presentamos y que tenían un contenido evidentemente autonómico fueron de alguna forma incorporadas y, en aras del consenso total y para que la ley saliera completamente verde en su votación en el panel, retiramos las otras, pues no tenía mucha enjundia el mantenerlas. Por lo tanto, encontramos realizados nuestros deseos dentro del texto que ha salida de la Comisión, por lo que nos congratulamos y felicitamos a todos los grupos por el esfuerzo realizado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Tiene la palabra el Senador Sanz.

El señor SANZ CEBRIÁN: Gracias, señor Presidente.

Señorías, la proposición de ley de organización del Centro de Investigaciones Sociológicas, lejos de ser una norma de contenido exclusivamente técnico, como a primera vista pudiera parecer, contiene una importante carga política, pues afecta a la información en aspectos de tanta relevancia pública como es, por ejemplo, la realización de encuestas o sondeos electorales, de la cual, en tiempos no tan lejanos, se ha llegado a hacer por el Ejecutivo un uso partidista, vulnerando con ello los principios de neutralidad, objetividad e igualdad en el acceso a los datos de ese organismo autónomo que conocemos con el nombre de CIS o Centro de Investigaciones Sociológicas.

De todos es sabido que una ley, por buena que sea, no sirve de mucho si se aplica con criterios torcidos, por lo que no puedo asegurar que esta proposición de ley ponga fin al uso de la información privilegiada. Pero es lo cierto que, por lo menos, crea los instrumentos precisos para hacer más difícil un uso anómalo de la información compuesta por los estudios y bases de datos del propio Centro de Investigaciones Sociológicas. De esta forma, el Centro debe elevar a las Cortes Generales la relación circunstanciada de los trabajos finalizados, según dispone su artículo 6.5, así como un avance de los resultados de las encuestas que se refieren a intención de voto, valoración de partidos y valoración de los líderes políticos, tal y como reza su artículo 7.º, con la adición de la obligación de poner en conocimiento —y aquí, a nuestro entender, viene la gran novedad de este proyecto de ley— de los parlamentos autonómicos la relación de los trabajos que afecten a su respectivo ámbito territorial como consecuencia de las enmiendas transaccionales suscritas sobre la base de las presentadas bajo los dígitos 1 y 2, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, aprobadas en Ponencia.

No es por estas razones, señorías, por las que éste sea un discurso de autocomplacencia. Reconocemos que estamos en presencia de una proposición de ley iniciada por el Grupo Parlamentario Popular, esto, es de una iniciativa, por tanto, parlamentaria, asumida en su fase inicial o primera por esta Cámara, y que la proposición ha sido sustancialmente mejorada a lo largo de su tramitación parlamen-

taria, pero la efectividad de la misma, como he dejado dicho, no es tanto un problema legal como de ética política. El sistema democrático que nos hemos dado está basado en el respeto a la voluntad del ciudadano, pero de forma anormal, a nuestro juicio, se está transformando en una auténtica sumisión de la actuación política a la opinión o criterio de los medios de comunicación, que no conforman sino una pequeña parte de la llamada opinión pública, para convertirse en los auténticos protagonistas, sin embargo, de la vida de cada día con su presencia muchas veces vociferante.

Con estas palabras, señorías, no estoy atacando al cuarto poder. Vaya todo mi respeto hacia los medios de comunicación que actúan responsablemente, y mi denostación, empero, para los que pretenden que este país esté permanentemente cautivo de su actualidad, del instante, porque eso es lo que vende. De ahí que la búsqueda del bien común, la actividad política, aquella que nosotras debemos desarrollar, se esté transformando desdichadamente en una auténtica obsesión por la imagen, por los sondeos, por el voto, por el poder, en definitiva. De ahí la enorme importancia de instrumentos como el Centro de Investigaciones Sociológicas que ayudan a conocer el juicio de los ciudadanos sobre los asuntos públicos o a sondear sus gustos o inclinaciones ideológicas que lo han convertido en cualificado medio de la gobernación de los intereses públicos y en valioso útil en la conquista del poder político.

Por lo tanto, es del todo lógico que el acceso a este caudal de información que se obtiene con el dinero de todos los contribuyentes sea una reivindicación permanente de todas las fuerzas políticas, pero es aun más necesario, si cabe, que todos, absolutamente todos los ciudadanos, empezando por los que representamos a los poderes públicos y más en su versión parlamentaria, seamos capaces de utilizar esta información en beneficio del común y no como medio de promoción y satisfacción de las avidencias personales y partidistas.

Por último, quiero dejar constancia de nuestro agradecimiento a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara por su espíritu de consenso que han de permitir, sin duda, la aprobación unánime de esta proposición de ley.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Tiene la palabra el Senador Beguer.

El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Presidente, señorías, la posición de nuestro Grupo está, evidentemente, en la línea de las personas que me han precedido en el uso de la palabra y seguramente de las que van a hablar con posterioridad. Ha sido sin duda una ley de consenso, lo fue en el Congreso y lo está siendo en el Senado, en el trámite de Ponencia y posteriormente en el de Comisión.

Esta ley, no sé si necesaria, pero conveniente, tiene la función no sólo de permitir que el Centro de Investigaciones Sociológicas actúe con eficacia en lo que son sus mi-

siones, sino que a la vez tiene la función de darle la necesaria transparencia.

Es evidente que, a pesar de que el CIS está regulado por el Real Decreto 1526/1990 de 8 de noviembre y por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1990, éste requería una regulación específica, una regulación que señalice, por una parte, la eficacia necesaria en un centro de esta índole y, por otra, que marcase al mismo tiempo la transparencia que precisa un centro del Estado que está al servicio del Gobierno pero que debe estar al servicio de todos los españoles, es decir, del Parlamento y, por tanto, de su representación genuina.

Un centro como el CIS que realiza estudios de la realidad social española, que crea y mantiene bases de datos importantes, que realiza estudios sobre intención de voto, que realiza estudios sobre valoración de líderes políticos requería una legislación específica que marcase la necesaria transparencia y el imprescindible control por parte del Parlamento, pero a su vez en el Senado, en Comisión, se ha mejorado a través de las enmiendas transaccionales, basadas en algunas de las presentadas por el Grupo Vasco y por Coalición Canaria, porque se ha conseguido que exista una mayor vinculación, no sólo con las Cortes, sino con las Comunidades Autónomas; es decir, que las Comunidades Autónomas pueden tener conocimiento de aquello que les afecte a través de sus propios parlamentos.

Aparte de las mejoras concretas, de las modificaciones técnicas que se han logrado en el Senado, en estos momentos estamos debatiendo una ley en la que se aúnan los principios a los que primero me he referido, eficacia y transparencia, con la vinculación y la participación de las Comunidades Autónomas.

Por ello, nuestro Grupo aprueba la ley plenamente, tal como llegó —evidentemente, con las enmiendas que se han logrado a través de este consenso— y, por tanto, la va a votar a favor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Beguer.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Selas.

El señor SELAS CÉSPEDES: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, anuncio que mi intervención va a ser breve porque, necesariamente, tiene que ser coincidente con las intervenciones anteriores.

Habría que destacar, como ya se ha hecho, algo tan importante como es el grado de consenso en este proyecto de ley. Consenso logrado por acuerdos y la generosidad de todos los miembros de la Ponencia y la Comisión.

Como ya se ha dicho, se trata de una ley que afecta a algo tan importante como la información que recibimos todos los ciudadanos a través del Centro de Investigaciones Sociológicas. De estas informaciones depende a veces hasta la toma de decisiones políticas, de estrategias, de información respecto del conjunto de la sociedad. Y el grado de consenso sobre este proyecto de ley ha sido unánime.

Por tanto, vaya mi agradecimiento, y el de mi Grupo, al resto de los grupos de la Cámara.

Pero eso también ha sido posible porque el Grupo Socialista consiguió presentar a la diez enmiendas existentes —siete del Grupo de Coalición Canaria y tres del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos— unas propuestas alternativas —concretamente, a las enmiendas números 4 y 5 del Grupo de Coalición Canaria, y a las números 1 y 2, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos—, porque entendía, y sigue entendiendo, que también en esta ley había que dar el protagonismo a las Comunidades Autónomas que se desprendía de estas enmiendas transaccionales. Entendíamos que en este proyecto no podían ni debían quedar descolgadas, ni el proyecto debía ser ajeno a nuestras Comunidades Autónomas.

Por eso, una vez más, puesto que el Grupo Socialista cree en las Comunidades Autónomas, en el proyecto autonómico, ha llegado a transaccionar —tanto con el Grupo de Coalición Canaria, como con el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos— estas enmiendas, para que tuviesen su cabida y contenido en esta ley.

Por lo demás, y con esto concluyo, este proyecto quedó dictaminado tal como se determina y ya conocen sus señorías. Por nuestra parte, consideramos que va a cumplir con el fin social e informativo que todos los españoles requieren y exigen al Centro de Investigaciones Sociológicas, para el bien de nuestra convivencia democrática y, sobre todo, para una relación coherente y armónica con nuestras Comunidades Autónomas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Selas.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Juan.

El señor JUAN CARDONA: Gracias, señor Presidente.

Señorías, resulta ocioso que en esta intervención, como portavoz del Grupo Popular, anuncie el voto favorable al texto del dictamen de la Comisión que ahora debatimos, cuando se trata, precisamente, de una iniciativa de nuestro Grupo que, además, ha merecido el apoyo de todos los grupos de la Cámara. La aprobación por todos los grupos de esta proposición de ley evidencia la importancia de la función del Centro de Investigaciones Sociológicas que ha de basar su actuación en los principios de objetividad, de neutralidad, de igualdad de acceso a sus datos y de respeto a los derechos de los ciudadanos y al secreto estadístico, conforme se establece en el artículo 2 de la proposición de ley.

Esos principios y obtener la garantía de su cumplimiento fue el afán que movió al Grupo Parlamentario Popular en el Senado a presentar esta proposición de ley, dando a la regulación de las actividades y organización del Centro de Investigaciones Sociológicas rango de ley, para evitar que una resolución exclusivamente gubernamental, como es el real decreto, pueda condicionar el funcionamiento del Centro.

Pero no hemos de ocultar tampoco que también movió al Grupo Parlamentario Popular a presentar esta iniciativa

el uso que hasta este momento se ha dado al Centro de Investigaciones Sociológicas por el Gobierno, en el que no se cumplían las garantías de neutralidad y objetividad prevenidos por la ley. Me refiero al caso concreto de la cuestión de los sondeos sobre asuntos electorales, como los referidos a la intención de voto, la valoración de los partidos políticos, etcétera, a los que el Gobierno socialista ha dedicado especial interés y atención y en virtud de su situación de poder obtenía anticipadamente los resultados de tales encuestas o sondeos, y reconocerán sus señorías que el conocimiento anticipado de esas encuestas o sondeos electorales alteran el equilibrio en el punto de partida que deben tener los partidos políticos a la hora de enfrentarse no solamente a unos comicios, sino también a la acción política cotidiana.

Esta situación de ventaja significativa en favor del Gobierno en el uso del Centro de Investigaciones Sociológicas para sus propios fines y de acuerdo con sus propios intereses partidistas desaparece con esta proposición de ley, al establecer el artículo 7 la obligación del Centro de remitir a las Cortes Generales un avance provisional de los resultados de sus encuestas de carácter electoral y político en un plazo no superior a 15 días, a contar desde la fecha de finalización de los trabajos de campo y de codificación y grabación de la información en soporte magnético.

El artículo 7 y la disposición adicional segunda, en la que se establece el sometimiento de la actuación del CIS en período electoral a lo que dispone la administración electoral y a lo prevenido en la Ley Orgánica 5/1988, de 19 de junio, del Régimen Electoral, creemos que garantizan los principios de neutralidad en la actuación del CIS y de igualdad de acceso a sus datos y, asimismo, impide que el Gobierno, sea del color político que sea, pueda aprovechar en beneficio propio la información electoral y pueda colocarse en una situación de ventaja o privilegio sobre las demás fuerzas políticas y sociales. Además de esta garantía, la nueva regulación del Centro de Investigaciones Sociológicas establece una mayor vinculación de esta institución no sólo con las Cortes Generales, sino también con las Asambleas legislativas o los parlamentos autonómicos.

Finalmente, señorías, quiero manifestar la satisfacción de mi Grupo por haber conseguido la unanimidad en la aprobación de esta proposición de ley. A lo largo de la tramitación parlamentaria de esta iniciativa de mi Grupo se han presentado un buen número de enmiendas, en concreto 43 en el Congreso de los Diputados y 10 en esta Cámara, muchas de ellas se han retirado y otras han sido incorporadas al texto de la proposición, mejorándolo ostensiblemente. Y esto ha sido posible gracias al interés de todos los grupos parlamentarios en conseguir un texto consensuado, dirigido a defender los principios de objetividad, neutralidad e igualdad de acceso de todos los ciudadanos a los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Ha sido necesario un esfuerzo de generosidad por parte de todos los grupos parlamentarios, que en algún caso nos ha llevado a renunciar a nuestras posturas iniciales, para encontrar entre todos una postura común. Esfuerzo que desde el Grupo Parlamentario Popular agradecemos y que deseamos sirva de ejemplo, tanto al Gobierno actual como

a los venideros, en el momento de establecer el desarrollo reglamentario de la norma que vamos a aprobar y en las actuaciones que se han de llevar a cabo en relación con el Centro de Investigaciones Sociológicas.

Muchas gracias. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Juan.

Entiendo que este proyecto puede ser aprobado por asentimiento de la Cámara. (*Pausa.*)

Así se declara, y tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados, para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción definitiva por Su Majestad el Rey.

CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

— ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y RUMANIA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, HECHO EN BUCAREST EL 25 DE ENERO DE 1995. (S. 610/000155.) (C. D. 110/000156.)

El señor PRESIDENTE: Punto sexto del orden del día: Conocimiento por el Pleno de Tratados y Convenios. En primer lugar, Acuerdo entre España y Rumania para la Promoción y Protección Recíproca de inversiones, hecho en Bucarest el 25 de enero de 1995.

No se presentaron propuestas. ¿Alguna petición de palabra? (*Pausa.*) ¿Se puede entender aprobado por asentimiento de la Cámara? (*Pausa.*) Así se declara, y se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento.

— ACUERDO SOBRE PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN CLASIFICADA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL ESTADO DE ISRAEL, HECHO EN MADRID EL 13 DE FEBRERO DE 1995. (S. 610/000156.) (C. D. 110/000157.)

El señor PRESIDENTE: Acuerdo sobre protección de información clasificada entre el Reino de España y el Estado de Israel, hecho en Madrid el 13 de febrero de 1995.

Tampoco hubo propuestas. ¿Alguna petición de palabra? (*Pausa.*) ¿Se entiende aprobado por asentimiento? (*Pausa.*) Así se declara, y se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse.

— PROTOCOLO RELATIVO A LAS CONSECUENCIAS DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL CONVENIO DE DUBLÍN SOBRE CIERTAS DISPOSICIONES DEL CONVENIO DE APLICACIÓN DEL ACUERDO DE SCHENGEN, HECHO EN BONN

EL 26 DE ABRIL DE 1994. (S. 610/000157.) (C. D. 110/000158.)

El señor PRESIDENTE: Protocolo relativo a las consecuencias de la entrada en vigor del Convenio de Dublín sobre ciertas disposiciones del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen, hecho en Bonn el 26 de abril de 1994.

No se presentaron propuestas. ¿Solicitud de palabra? (Pausa.)

Don Jaime Rodríguez tiene la palabra.

El señor RODRÍGUEZ GÓMEZ: Gracias, señor Presidente.

Señorías, quiere el Grupo Parlamentario Popular explicar su postura respecto a este Protocolo e incitar a sus señorías a que sigan con atención el discurrir de este Convenio de Dublín, al que hoy vamos a dar curso.

¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del Estado responsable del examen de las solicitudes de asilo entre los Estados miembros, que se documenta en el Acuerdo de Schengen de 1985 y en el Convenio de Dublín de 1990. ¿Y qué dice este Protocolo? Principalmente, que a partir de la entrada en vigor del Convenio de Dublín sobre determinación de Estado responsable, dejarán de aplicarse las disposiciones mencionadas antes del Convenio de Schengen y serán sustituidas por las del Convenio de Dublín.

¿Y esto es mejor o peor? Debería ser mejor, puesto que es una norma posterior en varios años y debería estar corregida. ¿Lo es? A juicio del Partido Popular, no. El Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular está de acuerdo con la idea fundamental de la libertad de movimiento de personas, de mercancías y de servicios, que es la base de una Europa unida, libre y desarrollada. Está de acuerdo y apoya decididamente los instrumentos legales de rango intergubernamental que lo están haciendo posible, siempre que en ellos no se lastimen los intereses de España. Alguno de estos instrumentos, como el proyecto de Convenio de fronteras exteriores, no ha sido suscrito por decisión unánime del Congreso de los Diputados.

La negativa del Partido Popular, del Grupo Parlamentario Popular, a dar su aprobación al Convenio no fue un no a la totalidad; es un no a un determinado artículo en el que pudo o puede haber un compromiso de malas consecuencias para España, cuya parte final queríamos que se suprimiera para evitarlas.

Si el Senado aprueba este Protocolo, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Popular, estará ratificando otra vez el Convenio de Dublín en el asunto del Estado responsable del examen de solicitudes de asilo, y en particular a su artículo 19, en el que los Estados señalan sus límites de aplicación, o sea, las fronteras en las que se aplicará el Convenio y los territorios en los que no, a menos que hagan una declaración.

El Reino Unido dice en ese artículo que no se aplicará a los territorios europeos de cuyas relaciones exteriores es responsable el Reino Unido, salvo si el Reino Unido efectúa una declaración en contrario. Y añade: Dicha declara-

ción podrá hacerse en cualquier momento. A juicio del Partido Popular, estamos ya hablando de fronteras exteriores, porque la mención a Gibraltar es clara.

Nuestra diferencia fundamental con el Gobierno y en el Grupo que le sustenta no está en europeísmo ni en apoyo a los derechos humanos ni en falta de manga ancha a los apoyos humanitarios, sino en que sea una declaración que el Gobierno tuvo que hacer cuando leyó el texto, porque trató de solucionar el problema y lo hizo tarde y mal; una declaración en la que se decía que si el Reino Unido decidía extender su aplicación a Gibraltar, se entendería sin perjuicio de la postura de España con respecto al litigio que le opone al Reino Unido a propósito de la soberanía del istmo.

Por cierto, siempre he pensado que istmo era un trozo de tierra que unía dos continentes o un territorio a una península; también en la lengua nos han vuelto a ganar.

Nuestra diferencia fundamental, como decía, no está en europeísmo y en derechos humanos. Está, sencillamente, en que sea una declaración la que salvaguarde nuestros intereses jurídicos y políticos. Tenemos una diplomacia poco viva a la que «manca finezza», como dijo algún político italiano. Debió negociar antes los términos del Convenio. Y no lo hizo. Dice Ovidio, muy sabiamente, que una gota horada una piedra. Y en los intereses de España no se puede permitir ni siquiera que el agua roce esa piedra.

Señor Presidente, señorías, mi grupo político consideraba y considera que la declaración tiene poco alcance jurídico y, en pequeña medida, político. Considera asimismo que es una declaración formal —y no digo, como mi compañero que canónica, porque ojalá fuera así: la Iglesia es en estos asuntos, como veterana, muy sabia— y no la consideramos suficiente a estos efectos de salvaguarda de los intereses de España.

Que el Protocolo está relacionado con el Convenio de Dublín, está claro. Que el Convenio de Dublín está relacionado con el proyecto de Convenio, no deja lugar a dudas.

El señor PRESIDENTE: Perdón, señorías. Ruego silencio. Hay un orador en el uso de la palabra.

El señor RODRÍGUEZ GÓMEZ: Basta leer la declaración aneja número 6 del Convenio de Dublín. Leído y oído esto, es difícil no argumentar que si un Estado tiene competencia en los territorios de cuyas relaciones exteriores es responsable, donde terminen esos territorios, allí está su frontera. El Convenio de fronteras exteriores no se puede aceptar por España. El Convenio al que se refiere este Protocolo es una parte íntimamente ligada a él. Hemos dicho que no al primero. No debiera haber habido ni lógicas razones, ni políticas, ni mucho menos jurídicas para aceptar éste. El Partido Popular ha luchado para que no se aprobase el inciso del Convenio, que consideraba perjudicial para los intereses de España. No lo consiguió. Hoy es el último trámite en el Senado. Si queremos mantener viva la llama de que Gibraltar es un territorio en litigio, tenemos, entre otras obligaciones, que repetirlo una y otra vez y todas las veces que sea necesario.

A ustedes, señores socialistas, parece que les preocupa crearse mala fama en Europa por insistir en cuantos convenios, protocolos y estatutos se nos presenten que hagan referencia a Gibraltar, aunque sea lateralmente. No debe ser así. A mi Grupo Parlamentario no le preocupa esa mala fama. Pero también sabemos, pese a nuestras argumentaciones, que nadie posee la verdad completa. Vamos a darle la oportunidad al Convenio ya aprobado. Mi grupo político se va a abstener en esta votación.

Muchas gracias, señor Presidente. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.—Protestas en los del Grupo Parlamentario Socialista.*)

El señor PRESIDENTE: Por la intervención del Senador Rodríguez, entiendo que debe someterse a votación el Protocolo relativo a las consecuencias de la entrada en vigor del Convenio de Dublín.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 252; a favor, 138; abstenciones, 114.

El señor PRESIDENTE: Queda autorizado en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del Protocolo relativo a las consecuencias de la entrada en vigor del Convenio de Dublín sobre ciertas disposiciones del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen, hecho en Bonn el 26 de abril de 1994.

PETICIÓN DE CREACIÓN DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN:

— PETICIÓN DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA DETERMINAR LAS RESPONSABILIDADES POLÍTICAS QUE RESULTEN DE LA CREACIÓN, ACTUACIÓN, FINANCIACIÓN Y ENCUBRIMIENTO DE LOS GRUPOS ANTITERRORISTAS DE LIBERACIÓN (GAL), SIN PERJUICIO DE LA ACTUACIÓN INDEPENDIENTE DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA. (PRIMER FIRMANTE: DON ÁNGEL JESÚS ACEBES PANIAGUA.) (650/000005.)

El señor PRESIDENTE: Punto séptimo del orden del día: Petición de creación de una Comisión de investigación para determinar las responsabilidades políticas que resulten de la creación, actuación, financiación y encubrimiento de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), sin perjuicio de la actuación independiente de los Tribunales de Justicia. Primer firmante: Don Ángel Jesús Acebes Paniagua.

Para la presentación de la petición, como primer firmante, tiene la palabra el Senador Acebes.

El señor ACEBES PANIAGUA: Señor Presidente, señorías, desde el 16 de noviembre de 1983 hasta el 24 de junio de 1987 son conocidas 31 acciones cometidas o atribuidas a los miembros de los denominados como Grupos Antiterroristas de Liberación, GAL. Dichas acciones die-

ron como terrible resultado 26 muertos por asesinato, 24 heridos, dos desaparecidos y dos secuestrados.

Además, hoy conocemos como hechos ciertos e indubitados que ni durante el tiempo de actuación de los GAL, ni posteriormente, se ha llevado a cabo una sola investigación parlamentaria sobre sus acciones. Segundo, que el Gobierno no tomó ninguna medida que impidiera su funcionamiento. Tercero, que de las acciones de los GAL se han derivado diversos procedimientos judiciales, algunos hoy en curso. Y, cuarto, que han resultado detenidos e inculpados los siguientes responsables políticos: Julián Sancristóbal, Gobernador Civil de Vizcaya, Director de la Seguridad del Estado; Juan de Justo, secretario personal del Secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera; Rafael Vera, Director de la Seguridad del Estado, Secretario de Interior, Secretario de Estado para la Seguridad; Ricardo García Damborenea, ex-Secretario General del Partido Socialista de Euskadi-PSOE-Vizcaya. (*Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.—Un señor Senador del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Mitinero con Aznar!*)

Es, asimismo, un hecho que siendo Ministro del Interior el señor Barrionuevo en el año 1983 se produjeron 30 acciones de los GAL y que es señalado por todos sus antiguos colaboradores como uno de los responsables de esta trama. En la actualidad, el señor Barrionuevo es miembro del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. Es también cierto que el 28 de julio del presente año el juez instructor elevó escrito a la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre las investigaciones de los GAL en el que aparecen personas aforadas: además del citado Ministro señor Barrionuevo, el ex-Vicepresidente del Gobierno y ex-Ministro de Defensa, señor Serra; el Diputado señor Benegas y el Presidente del Gobierno, señor González Márquez.

Es conocido y probado que se han utilizado medios materiales, armas y estructuras en manos del Gobierno para la actuación de los GAL. (*Un señor Senador del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Eso es mentira!*) Es, asimismo, vergonzosamente cierta la utilización de fondos reservados del Gobierno, que en lugar de ser destinados a la seguridad de los españoles han ido no sólo destinados a financiar actividades ilegales, sino directamente a los bolsillos de altos cargos designados por los gobiernos socialistas. Y por si todo ello fuera poco, estos días asistimos a la polémica sobre los documentos del principal organismo de inteligencia del Estado, Cesid, con la continua presencia protagonista de los GAL.

Por todo ello, señorías, porque nos encontramos ante uno de los acontecimientos más graves de la historia de nuestra democracia; porque cada día, nueva noticia que se conoce —y cada día conocemos alguna nueva—, es mayor el grado de confusión, de dudas y de preocupación en los ciudadanos sobre lo ocurrido en el caso GAL, porque, en fin, el Gobierno, después de este relato de hechos exclusivamente ciertos (*Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*) —y por increíble que parezca— no ha asumido ningún tipo de responsabilidad, por ello es imprescindible que de una vez por todas se investigue y se conozca todo lo relativo a la creación, funcionamiento y financiación de los GAL.

Hasta ahora la única respuesta a las peticiones de claridad y transparencia es que ya están investigando los jueces, y esta disculpa no es más que eso, una disculpa, porque lo cierto, la verdad, es que es falso, absoluta y rotundamente falso, que la investigación y la responsabilidad penal sea lo mismo, sea equivalente o sea sustitutiva de la responsabilidad política, como voy a intentar demostrarlo. Posponer la responsabilidad política a la determinación de responsabilidades penales produciría la reducción inexplicable de la responsabilidad política a las acciones u omisiones dolosas y tipificadas por la ley; convertiría al Código Penal en el único decálogo moral de la actuación pública, de modo que un cargo público sólo sería políticamente responsable de aquello que la ley señala como delito.

Esto es insostenible desde un punto de vista democrático. Hay multitud de situaciones en las que por imprudencia, por ignorancia, un representante público puede quebrar la responsabilidad a él confiada sin necesidad de cometer un delito o que éste no pueda probarse.

Entre los distintos poderes constitucionales, señorías, no rige, afortunadamente, ningún principio de jerarquía que obligue a cualquiera de ellos a someter sus trabajos al de otro. Existe un único y puro principio de competencia, que permite a cada órgano constitucional desarrollar su cometido en el marco de sus competencias. Por ello, someter, como algunos pretenden, jerárquicamente el Poder Legislativo al Poder Judicial, es sustituir la propia naturaleza democrática de nuestro sistema por otro judicial, en la que el Parlamento sólo puede hacer o sólo podría hacer lo que no hagan los jueces, aunque la propia Constitución sea quien lo contemple.

Señorías, parece que hayamos llegado a un punto en que algunas personas prefieren las salas de justicia al escaño, lo cual dice muy poco en favor de su fe en la representación de la soberanía recogida en este Parlamento.

Con el mismo argumento podría rechazarse la posición de aquellos que señalan que esta investigación interfiere el curso de la investigación judicial y no hace mucho, sin embargo, ostentaron la presidencia de otras comisiones de investigación con procesos judiciales abiertos; o entonces ellos mismos interfirieron el curso de la investigación o ahora no va a interferirse, pero las dos cosas no pueden ser al mismo tiempo.

Sin embargo, y a este respecto, quiero hacer alguna precisión más. La Constitución, nuestra Constitución de 1978, en su artículo 76.1 establece, precisamente, la coincidencia de las investigaciones parlamentaria y judicial, cuando dice que las conclusiones de las primeras no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones de los tribunales de justicia.

Por otro lado, este mismo precepto constitucional señala que las comisiones de investigación parlamentarias podrán recaer sobre cualquier asunto de interés público, por lo que no excluye ninguno, ni siquiera el investigado judicialmente, cualquiera que sea el trámite o el período procesal en el que se encuentre.

En segundo lugar, la coincidencia sobre unos mismos hechos no afecta, como también se ha imputado, al princi-

pio de división de poderes, por la división simultánea de funciones entre los mismos. La encuesta parlamentaria, la investigación parlamentaria y el proceso judicial tienen fines distintos, procedimientos distintos, determinación de responsabilidades distintas, uno la política y otro la penal.

En fin, y en tercer lugar, los Estados democráticos de nuestro entorno y el Derecho Político comparado coinciden en admitir unánimemente la compatibilidad de la investigación política y la investigación judicial, no sólo los conocidos por Estados Unidos y Gran Bretaña —que creo que todos conocerán—, sino también las Constituciones italiana y alemana a las que, dogmáticamente, tanto debe nuestro texto constitucional.

Quiero recordar a sus señorías, a aquellos que han opinado que no es posible la compatibilidad de estas dos investigaciones, la parlamentaria y la penal, dos sentencias de la Corte constitucional de 1975 y 1979, pero en un texto que tanta influencia ha tenido en el nuestro como el alemán, se configura el derecho a la investigación parlamentaria, a las comisiones de investigación como un auténtico derecho de las minorías parlamentarias, ya que basta una cuarta parte de los diputados para iniciar una investigación y son precisos, son necesarios el 75 por ciento de los votos de la Cámara para impedirlo.

En definitiva, señorías, todas las constituciones democráticas posteriores a la II Guerra Mundial permiten esta posibilidad, lo que algo dirá sobre cuál es la procedencia democrática de un posicionamiento y otro.

En definitiva, señorías, se trata de un ejercicio democrático, quizás el más importante que los ciudadanos a los que representamos conozcan con claridad, conozcan con transparencia lo que hacen sus representantes y sus gobiernos y asuman las responsabilidades del ejercicio de sus mandatos.

Negar el control del Parlamento al Gobierno, señorías, es negar la esencia misma de la democracia. Investigar las responsabilidades políticas cuando aparezcan indicios de cualquier irregularidad grave no es un derecho de los parlamentarios, no es un derecho de los que aquí nos sentamos, sino que es una obligación irrenunciable. Y en cumplimiento de esa obligación yo les pido a ustedes hoy su voto, para permitir conocer la verdad de los GAL. Pido que, en conciencia, quienes no tienen nada que ocultar, no impidan que los españoles conozcan —conozcamos— qué ocurrió con los GAL y quiénes son los responsables políticos. Ésta y sólo ésta es la garantía de que nunca más habrá en España otro GAL, pero lo que es más importante, señorías, habremos enseñado a nuestros jóvenes, habremos enseñado a nuestros hijos que ante la delincuencia, incluso la delincuencia más cruel, la más terrible, la más injusta, la que se deriva del terror, los demócratas luchamos contra ella desde el Estado de Derecho y desde el imperio de la Ley, y sólo desde la Ley y el Derecho, con su aplicación, eso sí, rigurosa e implacable, con los mecanismos que ella pone a nuestra disposición, sólo así será posible un día acabar con el terrorismo, y ese día todos sentirnos orgullosos de que, una vez más, se ha vencido al terror desde el Estado de Derecho, que es vencerle, señorías, desde la libertad.

Gracias. (*Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del Grupo Popular.*)

El señor PRESIDENTE: Se me ha comunicado un acuerdo existente entre los firmantes del Grupo Mixto y el Grupo Nacionalista Vasco para que los ocho minutos restantes puedan ser consumidos en el turno a favor.

Tiene la palabra la señora De Boneta.

La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.

Señorías, desde el inicio de la actividad terrorista del GAL, las mujeres y hombres que hoy conformamos Eusko Alkartasuna hemos venido manifestado nuestra convicción de que estábamos ante un terrorismo de Estado, de que el GAL era el brazo armado ejecutor de la guerra sucia contra el terrorismo de ETA. Inicialmente entendíamos que este terrorismo lo estaba siendo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que contaban con el respaldo de algunas personas o del propio Gobierno. Pero, después, lo que eran convicciones se han convertido en evidencias apoyadas en las declaraciones de sus propios protagonistas. Estamos hablando de un Director General de la Seguridad del Estado procesado; de un Secretario de Estado del Ministerio del Interior, también procesado; de un ex Ministro del Interior que, amparado en su inmunidad parlamentaria, ha intentado hasta ahora rehuir su presencia ante la justicia pero que, definitivamente, parece que muy pronto deberá comparecer ante ella.

Por lo tanto, nadie puede extrañarse de que hoy exijamos la depuración de las responsabilidades políticas pertinentes; responsabilidades políticas que alcanzan, en nuestra opinión, al Presidente del Gobierno. Porque ¿alguien puede creer que Amedo y Domínguez hicieron lo que hicieron sin que el Jefe Superior de Policía de Bilbao, señor Planchuelo, supiera nada? o ¿que el señor Planchuelo permitiera la guerra sucia de sus subordinados sin que los gobernadores civiles del País Vasco se enteraran, y que éstos lo permitieran sin que el Secretario de Estado para la Seguridad, señor Vera, estuviera enterado? y ¿que el señor Vera, a su vez, moviera un dedo a favor de la guerra sucia sin el consentimiento del señor Barrionuevo, y que éste apoyara el amontonar sangre sobre sangre, en la lucha contra la violencia, sin el consentimiento de quien creemos que es la equis del organigrama de los GAL: el señor Presidente del Gobierno?

Ustedes durante años no sólo no han investigado esta trama terrorista, sino que han impedido cualquier investigación parlamentaria, solicitada en reiteradas ocasiones, también por otros, pero esencialmente por el Diputado de Eusko Alkartasuna, señor Joseba Azcárraga; eso sí, apoyados en dichas ocasiones por casi todos los Grupos, que consideraban a mi compañero de partido —y así lo acusaban— de desestabilizador.

Hace muy pocos meses todavía, el 10 de febrero de 1995, se oponían también a una iniciativa presentada por Izquierda Unida/Ezker Batua-Berdeak en el Parlamento vasco para acometer una parecida investigación sobre sus conexiones en el País Vasco. Igualmente, estos mismos

Grupos han acompañado al Grupo Socialista en la oposición en el Congreso de los Diputados a la investigación que sobre los fondos reservados se proponía, siendo esta investigación clave, la madre de todas las batallas, desde mi punto de vista.

Hoy, afortunadamente, nos encontramos en una situación diferente. La mayoría de los Grupos políticos del Senado compartimos el criterio de que es necesario para la propia salud de las instituciones la creación de esta comisión. Se ha impedido con sus presiones que la justicia lo pudiera hacer. Ha sido necesario que los señores Amedo y Domínguez comenzaran a hablar para que toda la inmunidad se derrumbara.

El señor PRESIDENTE: Perdón, Senadora De Boneta, concluyó su tiempo, salvo que utilice el que le correspondería al portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.

La señora DE BONETA Y PIEDRA: Se han derrumbado también las tesis de los que con ustedes, fundamentalmente el Grupo Socialista, consideraban que sólo existían dos posibles posiciones: o con el Gobierno, o con ETA y su entorno. Hoy se ha derrumbado también el maniqueísmo que estas posiciones representan. Durante años impidieron que el juez Garzón investigara la utilización fraudulenta de los fondos reservados. Incluso, de alguna manera, intentaron atraer su voluntad introduciéndole en la vida política, con la falsa ilusión de que todo había de cambiar.

Durante años han amparado la trama extranjera de los GAL, puesto que durante más de cuatro años el gal George Mendaille ha vivido plácidamente —y digo plácidamente— en Calonge, Girona, con un negocio de lavandería en funcionamiento, pese a estar reclamado por la Interpol para ser extraditado y juzgado en Francia por su participación en la trama terrorista del GAL. Tuvo que ser el gobierno francés el que les acusara de complicidad con este terrorista para que se procediera a su extradición. Mientras, este señor vivía en Calonge, tenía teléfono a su nombre, anunciándose en las páginas amarillas de Telefónica y tenía, además, la costumbre de jugar casi todos los días al mus con miembros de la Guardia Civil del pueblo en que vivía.

Durante años han contado también con los buenos servicios de su agente secreto, señor Paesa; incluso le nombraron representante de su Gobierno en Santo Tomé. (*Rumores.*)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

La señora DE BONETA Y PIEDRA: Este señor presionó a los testigos de cargo en el juicio contra Amedo y Domínguez para que cambiaran su declaración. Y creo que debería saberse quién les animó a ello.

En definitiva, entendemos perfectamente que hoy ustedes continúen negándose a que las Cortes Generales investiguen. En mi opinión, han ido demasiado lejos, lejos en la acción o en la omisión responsable —al menos, políticamente— del Gobierno.

Desde Eusko Alkartasuna no queremos ningún tipo de venganza. Pedimos, simplemente, justicia, claridad y profundidad en la atribución de responsabilidades políticas. Justicia por todos los asesinatos ocurridos, secuestros...

El señor PRESIDENTE: Senadora De Boneta, le ruego que vaya terminando, por favor.

La señora BONETA DE Y PIEDRA: Termino, señor Presidente.

Todo esto queda en manos de los tribunales y corresponde hoy a esta Cámara la grave responsabilidad de controlar y determinar las responsabilidades políticas del Gobierno y de su Presidente, actuando, por doloroso que pueda ser, por las sospechas fundadas de la conculcación del Estado de Derecho por parte de las más altas instancias del Gobierno del Estado, con el rigor, la lealtad y la búsqueda de la verdad que los ciudadanos merecen. Difícilmente podríamos pensar en el año 1982 que esto iba a suceder.

No quiero concluir sin mencionar al único Senador de Herri Batasuna ausente. La responsabilidad política que adquiere este Grupo es lo suficientemente importante como para que nos ratifiquemos en nuestro convencimiento de que no desean la clarificación de esta trama. En la estrategia política de este Grupo es importante mantener vías de conflicto abiertas y ustedes —permítanme que se lo diga y lo digo con dolor— están haciendo un gran favor con su negativa a la creación de esta comisión de investigación.

Termino solicitando de la Cámara el apoyo a la investigación solicitada por el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, el Grupo Parlamentario Mixto, por supuesto, tanto Izquierda Unida, como esta Senadora, firmando esta solicitud de Eusko Alkartasuna.

Nada más. Muchas gracias. *(El señor Sanz Cebrián pide la palabra.)*

El señor PRESIDENTE: Senador Sanz, le quedan 1,25 minutos de tiempo.

El señor SANZ CEBRIÁN: Gracias, señor Presidente. Si su señoría estima que tenemos tiempo suficiente haremos uso de este turno. Si no, esperaremos.

Lamentamos decir que el pacto a que habíamos llegado no se ha cumplido por parte de la Senadora de Eusko Alkartasuna, lo que es para nosotros una pena. Aprovecharemos el turno de portavoces.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Yo se lo agradezco, señoría. En turno en contra tiene la palabra el Senador Bayona. *(Fuertes rumores.)*

El señor BAYONA AZNAR: Señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Popular ya es el primer grupo en el Senado. ¿Se ha notado en el mayor rigor legislativo? ¿Se ha notado quizá en la aceleración de la reforma de la

Constitución o acaso en una mayor dedicación de la Cámara a la política autonómica? *(Rumores.)*

El Grupo Popular ha llegado a ser el primer grupo de la Cámara, y lo primero en que se manifiesta, después de dos meses, es en la propuesta de crear esta Comisión para investigar los Grupos Antiterroristas de Liberación.

Se tuerce así el rumbo hacia una Cámara de representación territorial, un rumbo marcado desde el inicio de la legislatura con la participación de todos los grupos parlamentarios y con la muy activa participación también del Grupo Popular.

Es la estrategia del señor Aznar. No depende de personas, no depende de portavoces, no caemos en esa trampa. Es la estrategia del señor Aznar que el día de la fiesta nacional, hace exactamente un año, afirmó: El Partido Popular, cuando tenga mayoría, podría reabrir el caso GAL.

Ese mismo día Aznar da públicamente por perdida la batalla para adelantar las elecciones generales después del resultado de las europeas. Esa misma semana el Partido Socialista había insistido en incluir el caso Naseiro en la Comisión de Financiación de Partidos Políticos. *(Fuertes rumores desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.— Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)*

Hace un año Aznar amenazó con que si no se disolvían las Cortes y se insistía en investigar la financiación de su partido respondería proponiendo una Comisión para investigar el GAL. Ése es el alto sentido del Estado y de los intereses generales que discutimos aquí esta tarde. *(Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario Socialista desde los escaños: ¡Muy bien, muy bien!)*

El motivo de la propuesta defendida no es conocer la verdad sino cumplir una amenaza. *(Rumores.)* Ahora ya saben también los españoles qué ofrece el Partido Popular para la campaña electoral. En lugar de programa, de iniciativas o de ilusión, no tiene nada mejor que ofrecer que una repudiable utilización electoralista del caso GAL. Porque la Comisión no puede aportar nada —y lo saben— a la verdad sobre las acciones de los GAL, entre otras cosas, porque no tendría el tiempo suficiente ni el adecuado clima en vísperas electorales para un trabajo solvente. *(Rumores.)*

Además, pregunto: ¿Por qué se ha preferido presentar la solicitud en el Congreso antes que aquí, donde podría triunfar más fácilmente? ¿Por qué no se pidió en el Congreso en el primer debate sobre los GAL hace ya tres meses? Si se ha desperdiciado todo ese tiempo que se supone tan necesario para investigar, el objetivo de la iniciativa no puede ser, por más que se diga, aclarar y conocer la verdad.

El Partido Popular reconoce que es innecesaria, y cito: Desde febrero a hoy la actuación de la justicia ha convertido en innecesaria la creación de una Comisión de investigación sobre la responsabilidad política del caso GAL. Lo afirmaba el portavoz del Grupo Popular en el debate del 21 de septiembre en el Congreso.

Señorías, si se pide una Comisión de investigación que considera innecesaria para lo que se dice pedirla —conocer la verdad porque la justicia la ha hecho innecesaria— y, sin embargo, no se pueden decir los motivos para pe-

dirla, esto constituye todo un monumento a la incoherencia, a la hipocresía y al oportunismo. (*Fuertes rumores desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

Y es que, el Partido Popular expresa, de su propia estrategia destructiva, estrategia de desgaste por el desgaste sin reparar en los daños que ocasiona al conjunto de la sociedad y de la vida política española. Porque es una ficción, señorías, y se acaba de ver hace unos minutos aquí en esta misma tribuna (*Fuertes rumores desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*); es una ficción pensar que la Comisión no dañará también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Si se crea la Comisión, ¿va el Partido Nacionalista Vasco a renunciar a investigar el cuartel de Intxaurre y cuestionar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e incluso su propia presencia en Euskadi? ¿Cómo lo va a impedir el Partido Popular cuando es esa iniciativa suya la que está permitiendo ese debate? Reconózcanlo, va incluido en su voto.

Y si no deben comparecer en la Comisión miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ¿quién debe comparecer entonces?; ¿están sus señorías solicitando la presencia en esta Cámara de los sucesivos «Amedos» que dicen hoy una cosa y mañana otra?; ¿están sus señorías dispuestos a contribuir a que en el Senado se jaleen las declaraciones sumariales de los imputados que desfilan diariamente ante los Tribunales de Justicia?

El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular ante los medios de comunicación ha anunciado, sin el menor sentido del ridículo, que llamará a declarar primero a Felipe González; primero y único, podía haber añadido. Decía el señor Acebes: es de una evidencia absoluta que la responsabilidad del GAL la tiene Felipe González y por eso debe venir aquí. Naturalmente, dicen, pues si es así de evidente ¿qué más quieren saber?, ¿qué quieren investigar entonces?, ¿acaso también la actuación del Tribunal Supremo es innecesaria? (*Aplausos en los escaños del Grupo Socialista.*) ¿No será ése su inconfesable propósito final? Ahora que se está investigando y bien, ahora que se está aclarando, ¿por qué piden la Comisión de Investigación?, ¿por qué no la pidieron hace tres meses, hace seis meses, hace dos años, hace seis años?

Si llega a crearse la Comisión perturbará el trabajo de los tribunales de justicia. Es inevitable que incida negativamente en el distanciamiento político que la imparcialidad de la justicia requiere un juicio paralelo a la instrucción judicial en el que no se dan además ninguna de las dos garantías básicas de cualquier proceso: la imparcialidad y las garantías de la defensa, se diga lo que se diga, en la práctica interfiere y contamina el proceso judicial, y ésa es la consecuencia directa de la doctrina del señor Álvarez-Cascos, para quien, como sabemos, la decisión judicial debe coincidir con una hipotética opinión mayoritaria de los ciudadanos.

El Grupo Parlamentario Popular espera con la Comisión crear la imagen de una opinión mayoritaria en el sentido deseado y a ese inevitable e imaginativo veredicto interesado y previo debería ajustarse después la sentencia para ser justa. Pero se olvida de que estamos en un Estado de Derecho; se olvida de que la opinión no puede tener va-

lor judicial alguno sin acabar con la imparcialidad de la justicia. Los socialistas no confundimos responsabilidades penales o políticas, quien las confunde es quien, como el Secretario General del Partido Popular, exige al Tribunal Supremo que se limite a reflejar su condena popular y nos retrotrae a tiempos inquisitoriales en los que la sospecha triunfaba sobre los datos, la injuria sobre la verdad y los intereses sobre la justicia. (*Aplausos en los escaños del Grupo Socialista.*)

Pues bien, oponerse a que se constituya una Comisión parlamentaria de investigación cuando hay un procedimiento judicial abierto no revela falta de sensibilidad democrática, como se ha dicho aquí. No es cierto que la compatibilidad sea lo normal. Lo normal en los sistemas parlamentario occidentales, incluso en algún país en los que la Constitución permitía esa limitación, como es el caso de Francia, se incluyó la limitación de crear comisiones de investigación por decisión del Consejo Constitucional en 1958.

Pero vamos a situarnos hoy, no en tiempos atrás. El Tratado de Maastricht, negociado línea a línea y sustituido por doce democracias no sospechosas y ratificado después por tres más, también excluye la posibilidad de constituir comisiones parlamentarias de investigación cuando, y cito el artículo 138.c): de los hechos alegados esté conociendo un órgano jurisdiccional. Además, el Pleno del Parlamento Europeo, no hace tiempo, el mes pasado, el último Pleno del Parlamento Europeo votó a favor un informe con enmiendas a este artículo en el que nadie cuestionaba esta limitación y en el que además todos los miembros del Grupo Parlamentario Popular, incluyendo los diputados del Partido Popular español y del Partido Nacionalista Vasco, votaron a favor, y el ponente del acuerdo interinstitucional era el Diputado del Partido Popular español, José María Gil-Robles.

Es innegable, pues, y creo haberlo afirmado y probado, que una comisión parlamentaria sobre los GAL interferirá en el procedimiento judicial, ese solo argumento debería bastar para rechazarla. Pero si se quiere hablar de responsabilidad política, hablemos de responsabilidad política. Porque al señor Aznar se le llena la boca hablando de responsabilidad política, pero no tiene el coraje de exigir la donde constitucionalmente le corresponde y como constitucionalmente le corresponde a quien es líder de la oposición: presentando una moción de censura. (*Aplausos en los escaños del Grupo Socialista.*) ¿Pero cómo puede el líder de la oposición, cómo puede un líder cualquiera de la oposición responsabilizar políticamente de acciones criminales al Presidente del Gobierno y no presentar inmediatamente una moción de censura? (*Rumores.*)

El señor Aznar está transfiriendo, de hecho, al Senado el papel de censurar al Presidente del Gobierno. Su debilidad, sus ansias por llegar a la Moncloa, sin haber sido capaz de ejercer su responsabilidad como líder de la oposición, le lleva al despropósito de que, en lugar de enfrentarse en un debate sobre esta cuestión, pide que le quiten a Felipe González de en medio de su camino como sea. (*Aplausos en los escaños del Grupo Socialista.*)

Mi Grupo, señor Presidente, condena sin paliativos el terrorismo que, además de asesino, ataca la base misma del

Estado de Derecho. En un Estado democrático no hay ni terroristas buenos ni terroristas malos, ni hoy ni nunca, ni en 1995, ni en 1983, ni en 1980, ni antes ni después del Gobierno socialista. El Grupo Socialista, ahora como entonces, repudia, además, a quien defienda que el Estado de Derecho emplee los mismos métodos que sus enemigos. El Grupo Socialista no comparte ni ha compartido nunca la afirmación, por ejemplo, del Director de un diario nacional: la vileza del asesinato del Capitán Martín Barrios puede ser el punto de inflexión. Ése es el camino a seguir. No hay otro. La guerra subversiva, como la convencional, tiene sus reglas, o se actúa conforme a ellas o se pierde. O más bíblico, el Director de otro diario defendía así el «ojo por ojo» de la Ley del Talión: Los pobres diablos que amparan los crímenes etarras deben de saber que toda España, de izquierda a derecha, y todo el País Vasco, de derecha a izquierda, está dispuesta a ganar la guerra sucia. Vamos a empeñarnos en que todos esos que quieren obligar a los españoles, de paisano o de uniforme, a temer las pistolas «gangsteriles» de ETA tengan que tragarse su propio desafío. Con la medida que midiereis, seréis medidos, dice el Evangelio. (*Rumores en los escaños del Grupo Popular.*) Si escogéis los 9 milímetros «parabellum» ésa será vuestra medida. Fin de la cita.

Los socialistas nos hemos pronunciado siempre —repto—, siempre contra la pena de muerte, incluso cuando se alzaban voces reclamando su restablecimiento. No hay justificación moral o política alguna para quien se atribuye la capacidad de atentar contra la vida de las personas, y si no la hay por sentencia judicial, mucho menos por decisión política.

El Gobierno socialista no es el responsable de que apreciaran grupos llamados antiterroristas. Operaban ya antes de 1983. (*Un señor Senador pronuncia palabras que no se perciben.*) Sí, el Batallón Vasco Español, en 1980, y sólo en la comarca de Hernani, asesinó a cinco personas, y había otros grupos llamados incontrolados. Pero, señorías, hace casi diez años que no existen. Los socialistas somos responsables, sí, políticamente responsables de que se haya terminado en España con el terrorismo de extrema derecha omnipresente en nuestra Historia y en la transición democrática. (*Aplausos en los escaños del Grupo Socialista.*) Ésa es la verdad histórica y la verdad política. Reconózcanlo. Ése es el juicio político e histórico que cabe hacer. Además del juicio político que el pueblo español ha hecho en sucesivas elecciones generales, sus señorías quieren también un juicio global de estos trece años en esta materia, juicio del que los socialistas saldremos con la cabeza bien alta, tan alta como el que más. (*Rumores en los escaños del Grupo Popular.*)

Por tanto, querer plantear ahora una investigación parlamentaria no sirve para aclarar la verdad, sirve para sembrar las dudas y la desmoralización de la Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado; sirve para sembrar las dudas sobre sucesivos Gobiernos democráticamente elegidos, pero siembra también las dudas —y esto es lo más grave— sobre el Parlamento, sobre la soberanía del Parlamento de todos estos años; Parlamento que sí ejerció, que tuvo libertad para ejercer la acción de control democrático,

que sí debatió las acciones de los GAL y cada grupo hizo las iniciativas que creyó que políticamente debía hacer. Ya sé que en medio de tanto griterío el simple propósito de restituir ciertos hechos a su contexto histórico, más que inútil, resulta, incluso, contraproducente.

Sólo les recuerdo que desde 1983, la mejor política antiterrorista ha sido el consenso sobre ella: desde la reunión del señor Fraga con el Presidente del Gobierno el 25 de octubre de 1983 hasta los Pactos de Ajuria Enea y Madrid. Y no voy a leer, señor Presidente, la intervención del Presidente fundador del Partido Popular en el debate de 3 de noviembre de 1983 sobre política antiterrorista. Está en el «Diario de Sesiones». Les ruego —eso sí— que la lean. Incluso después de haber votado. Léanla.

En cambio hoy el Partido Popular, lamentablemente, parece que ha renunciado a ese mismo consenso sobre la política antiterrorista. ¿Y desde cuándo? ¿Y por qué? Parece haber renunciado a él desde la aparición en escena del señor García Damborenea. Muchos se sorprendieron al verle el pasado año abrazando al señor Aznar y pidiendo el voto en un mitin electoral en mi ciudad, en Zaragoza. Hoy se entiende mejor.

Hoy mismo, un diario recuerda las reiteradas visitas del Presidente del Partido Popular a Burgos para hablar con ese procesado, que es el principal testigo de cargo contra Felipe y el principal apoyo de la estrategia de Aznar en esta cuestión. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.—Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

Hubo años, señorías, en que los socialistas vascos estaban muy solos en la lucha política contra los terroristas. Eran años duros, años en los que el miedo se imponía y ETA amordazaba a la sociedad. Los socialistas vascos estuvieron muy solos. Algunos perdieron la vida, como nuestro compañero el Senador Enrique Casas. Pero el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Esquerra, no perdió la cabeza ni el sentido político ni la dignidad. ¿O alguien duda de la claridad democrática de nuestros compañeros vascos, desde Ramón Rubial, aquí presente, hasta Ramón Jáuregui, pasando por Txiqui Benegas, Nicolás Redondo Juan Manuel Eguiagaray, Múgica y tantos otros, además del malogrado Casas? (*Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*) Eran años difíciles. Contra todos ellos, contra todos, se enfrentó sin éxito García Damborenea; contra ellos se sigue enfrentando hoy, con otros métodos y con otros compañeros de viaje; contra ellos y, en opinión de mi Grupo, contra todos los defensores del Estado de Derecho. Porque recientemente algunos de los procesados han pasado de negar los hechos a autoinculparse, y de autoinculparse a acusar al Gobierno. Es su estrategia. Es la estrategia de defensa de unos imputados que, en cuanto tales —les recuerdo— tienen derecho a no decir la verdad. Y si tienen derecho a no decir la verdad, ¿qué verdad puede conocer el Senado basándose en declaraciones que se saben de antemano falsas? ¿Por qué vamos a convertir al Senado en altavoz de la estrategia de unos procesados, algunos ya condenados por sentencia judicial? Para el sentido común —yo creo que en momentos como éste hay que apelar al sentido común— resulta difícil entender que las

confesiones de algunos delincuentes se utilicen para derribar a un gobierno democráticamente elegido. Pero, desde el sentido común, hay que rechazar que esos delincuentes, convictos, confesos y condenados, puedan comparecer en esta Cámara.

Lo insólito no es que los procesados compartan estrategia. Lo insólito es que fuerzas democráticas, que incluso aspiran a gobernar, se aprovechen de esas estrategias y, con iniciativas como las de hoy, las refuercen.

Termino ya, señor Presidente, diciendo que quienes han vulnerado las reglas democráticas tratan de imponerse a la voluntad popular y pretenden dictar las condiciones de la vida política. A eso nos resistiremos siempre los socialistas desde nuestras profundas convicciones democráticas, pero también porque tenemos innegables razones históricas para resistirnos. Creemos que los demás deberían hacerlo.

Reitero las palabras del Presidente del Gobierno en el debate sobre los GAL, el 27 de julio: Los que creemos en la democracia y en sus reglas no podemos caer en el riesgo de aceptar que los tiempos políticos nos los marquen los delincuentes confesos. Por el contrario, tenemos que recuperar el espacio público y político para los demócratas. *(Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)*

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Abrimos el turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Martínez Sevilla.

El señor MARTÍNEZ SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, este Parlamento está siendo seguido hoy con más atención que nunca. En pocas ocasiones anteriores la opinión pública, la ciudadanía de este país ha estado tan pendiente de esta Cámara como esta tarde. No es para menos. Un país sobrecogido por el terrorismo y la violencia de ETA observó con igual asombro cómo entre 1983 y 1987 aparecen los Grupos Antiterroristas de Liberación, los conocidos como GAL, que también, mediante el terrorismo y la violencia, actuaron practicando los mismos métodos que ETA: el secuestro, la tortura, la extorsión y el asesinato de al menos hasta 27 personas.

Esta ciudadanía sobrecogida —el Senador que les habla en particular y la fuerza política que represento, Izquierda Unida— han pasado desde el asombro a la indignación al comprobar cómo durante estos años se han ido sucediendo las informaciones que hablaban de sospechas, de implicación de miembros de los aparatos del Estado en la creación, formación, asesoramiento e infraestructura de los GAL.

Así, las informaciones aparecidas sobre los casos Lasa y Zabala, Lucía Urigoitia, Mikel Zabalza, el secuestro de Segundo Marey, la utilización de los fondos reservados para primas o para pagar los GAL, la creación de «gales» de todos los colores y hasta la utilización de edificios oficiales, como el cuartel de Intxaurrondo o gobiernos civiles, como lugares de operaciones de los GAL, han ido dejando en la población una tremenda preocupación, han provo-

cado el descrédito de las instituciones del Estado y, en muchas ocasiones, hasta la repugnancia de sospechar que, por miembros del Gobierno, se ha querido combatir la violencia al margen de los mecanismos previstos en un Estado democrático y de Derecho como el nuestro, transgrediendo normas y derechos básicos, guardando ética y comprando silencios.

El GAL parte de decisiones políticas a alto nivel. Una organización de tipo militar con infraestructura y logística no se improvisa. Y todo apunta a que, además, se ha encubierto durante estos años con dinero público. Los altos cargos del Gobierno procesados en prisión —los señores Vera, Sancristóbal, Barrionuevo—, los altos funcionarios policiales demuestran responsabilidades penales, pero no delimitan responsabilidades políticas en este tema. ¿Estaba al tanto el señor Presidente del Gobierno, don Felipe González, de la participación de altos cargos del Gobierno y del Partido Socialista en la trama de los GAL? ¿Por qué no se depuraron las responsabilidades políticas mediante investigaciones del Gobierno desde el primer momento? ¿Cómo se ha consentido que se use dinero público de los fondos reservados para sobornar, comprar, pagar sueldos irregulares y para tapar bocas? ¿Cómo es posible que se haya estado pagando de forma irregular a Amedo y Domínguez sin que se hayan tomado medidas al respecto? los últimos pagos, además, parece ser que son tan recientes que han sido incluso realizados bajo el mandato del Ministro Belloch.

Para la delimitación de las responsabilidades políticas es necesario crear esta comisión de investigación; responsabilidades que no pueden ser aclaradas por el Poder Judicial, ya que su ámbito de actuación corresponde al delito, pero no a la depuración de responsabilidades en la estructura política que ha dado lugar a esta situación; y también para que una ciudadanía, cada vez más asombrada, pueda ver una nota de alivio proveniente de las instituciones democráticas.

Ante el empecinamiento de un Gobierno y de un Partido Socialista empeñados en ocultar cuanto puedan, en obstaculizar a la Justicia negándole documentación, en evitar claridad y luz sobre el asunto, oponiéndose a cuantas comisiones de investigación o intentos de establecer transparencia en este tema, se situaría un Parlamento, pieza clara y central de nuestro sistema democrático, que tomaría sobre sí la responsabilidad de ejercer el control del Gobierno en la más amplia acepción parlamentaria.

La centralidad del Parlamento es la que aquí reivindicamos y la que también hoy aquí demandamos del conjunto de Senadores y Senadoras. Y es ante este Senado donde está planteada la posibilidad de iniciar, de una vez por todas, esta etapa de regeneración de la vida pública que tanto está demandando la sociedad.

Esta Cámara, con el acuerdo de diversos grupos parlamentarios, debe iniciar esta tarea: situar al Parlamento en el lugar central que le corresponde en democracia y aclarar ante la opinión pública las responsabilidades de este cúmulo de tropelías, de esta gran conspiración contra la democracia y contra el Estado de Derecho que supuso la actuación de los GAL.

No es sólo desde la ciudadanía, en general, desde donde se reclama esta clarificación. También se hace desde otro ámbito: desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, desde donde se ha comprobado con sorpresa cómo había quienes, emboscados en una placa o en un cargo político, han transgredido la ley, han actuado ilícitamente para pervertir su función y llevar al Estado de Derecho a un callejón sin salida.

Al terrorismo no se le puede combatir con más terrorismo. El GAL nació por ETA, y ETA se ha alimentado políticamente del GAL. En una infernal dinámica, ambos grupos han operado en peculiar simbiosis. El Estado democrático y de Derecho necesita acabar con este tipo de dinámica —siquiera, con su alargada sombra y también con su espeso olor—, para no verse condenado, como Sísifo, a tener que subir una y otra vez con la misma piedra, para que una y otra vez vuelva a caer.

Se han tratado de dar improvisados argumentos para justificar el voto negativo a la creación de esta comisión, como el de que no tendría tiempo de actuar, de realizar sus trabajos. Pero ante esto hay que recordar que nada asegura que el Parlamento vaya a ser disuelto, tal como se anuncia. González ha incumplido ya demasiadas veces su empeñada palabra, y ayer mismo manifestaba de modo crítico que el final de su mandato no está tan próximo. Además, tres meses —es posible habilitar el mes de enero parlamentariamente— a un buen ritmo de trabajo, que es seguro que todos estamos dispuestos a desarrollar, dan para mucho, señorías. Yo mismo he visto tramitar en un día leyes amplísimas con centenares de enmiendas, o voluminosos Presupuestos Generales del Estado en tres sesiones plenas.

Pero es más; no hace ni un mes que se ha creado la Comisión Especial para el Estudio del Cambio Climático en esta Cámara, y dispondrá prácticamente del mismo tiempo para acabar sus trabajos. Convendrán conmigo, señorías, que el cambio climático tiene más miga y más ciencia que los GAL como para ventilarlo en tres meses. Sin embargo, no he escuchado ninguna voz contra el escaso tiempo de trabajo de esa Comisión y, es más, el Grupo Socialista ha apoyado con énfasis la constitución de la misma, e incluso la preside un miembro de Convergencia i Unió.

Por otra parte, este Parlamento, como órgano soberano, no puede hacer depender el ritmo de sus trabajos, de sus debates y deliberaciones, de un desiderátum expresado por el señor González, sino de su propio calendario parlamentario. Lo contrario sería una subordinación al Ejecutivo en la que este Parlamento no debe entrar. Hay que tener en cuenta, además, que esta Cámara no se disuelve igual que el Congreso de los Diputados, sino que aquí hay cerca de 50 Senadores autonómicos, todos ellos con tres o más años de legislatura por delante, que pueden dar una cierta continuidad a esta Comisión.

Otro de los argumentos visiblemente empleado durante estos días es que el asunto está siendo ya tratado por los tribunales, ya que se siguen en relación con este caso al menos tres causas, una de ellas en el Tribunal Supremo. Pero la labor de investigación de un Parlamento no colisiona con la investigación judicial; antes al contrario, es sinér-

gico con ella. El Parlamento tiene el derecho y la obligación de ejercer el control del Ejecutivo, tarea que no puede decaer, que no puede delegar en el Poder Judicial. Y no sólo eso; puede colaborar con la justicia. Así lo contempla el artículo 60.5 del Reglamento del Senado y así se hizo con la «Comisión Roldán» que, trabajando en paralelo con la justicia, también colaboró activamente con ella.

La tercera razón esgrimida pertenece al ámbito de la presunción. Se presupone que se trata de desgastar al Gobierno o a Felipe González ante la inminencia de una consulta electoral. Quien así piensa no sólo está juzgando intenciones con la dificultad que ello supone, sino, además, minusvalorando los deseos de claridad y transparencia que tienen los ciudadanos y sus representantes políticos. El Parlamento debe convertirse en una caja de cristal, en un espacio completamente abierto al debate y a la reflexión, donde no existan zonas de sombra, espacios reservados al conocimiento político, ni opacidades sospechosas. Todo debe saberse, y debe saberse ya, cuanto antes, porque lo demanda la salud democrática de nuestra instituciones.

En este sentido se pronunció hace escasas fechas el Parlamento de Navarra, y así lo apoyó el Partido Socialista en Navarra, Convergencia de Demócratas Navarros y Eusko Alkartasuna, a solicitud de Izquierda Unida-Los Verdes, en la Comunidad Navarra. Solicito así de los Senadores navarros del Partido Socialista coherencia con esta postura y, por tanto, su voto favorable a la creación de esta Comisión.

Nada de lo ocurrido puede guardarse bajo secreto. Han sido 11 años de silencio espeso y sórdido, sólo roto por aquellas voces como las de Izquierda Unida, Partido Nacionalista Vasco o Eusko Alkartasuna, que se se han levantado para pedir la investigación del terrorismo de Estado. Primero el Presidente González nos dijo que el Estado democrático también se defiende desde las cañerías, ahora la doctrina oficial parece ser la del secreto y la ocultación. No hay pruebas ni las habrá, ha dicho con ruido de conjuras al fondo.

Sin embargo, la publicidad es un elemento esencial de la democracia. Ninguna teoría democrática merece tal nombre si no incluye entre sus elementos claves la transparencia de la acción de Gobierno.

El señor PRESIDENTE: Senador Martínez Sevilla, le ruego que vaya terminando.

El señor MARTÍNEZ SEVILLA: Acabo en un minuto, señor Presidente.

Constitucionalismo y publicidad política van indisolublemente asociados. Kant fue aún más lejos en su defensa de la publicidad, conectándola con la ética. Él decía que todas las acciones relativas a los derechos de los demás que resultan incompatibles con la publicidad, son siempre injustas. Y también a la inversa: todas las acciones que necesitan de la publicidad para no errar en su propósito resultan conforme a la moral y a la política al mismo tiempo.

El problema es que el reino de la política y el de la ética sólo ocasionalmente alcanzan puntos de contacto. La renacentista razón de Estado ha traído demasiada sinrazón y ha

hecho del secreto un ingrediente endémico de la política, pero, como señala Miguel Revenga, un ingrediente perverso. También lo señala Elías Caneti: todos los secretos concentrados acaban siendo fatales. La potencia explosiva del secreto es tanto mayor cuanto es más llevado a su nivel de concentración, entendiéndose por tal la relación entre el número de los que lo guardan y el número de aquellos a quienes afecta lo guardado.

Si los llamados años de plomo de Vietnam/«Watergate» llevaron a los norteamericanos a la renuncia, en nombre de la razón de Estado, a fragmentos, si es que puede hablarse así, importantes de la democracia, estos años de la historia de España pueden pasar como unos nuevos años de plomo, como aquellos pacíficos años del Vietnam/«Watergate» o quizá también como unos años de las tinieblas, porque tras ellos puede quedar una democracia maltrecha y desacreditada.

El señor PRESIDENTE: Senador Martínez Sevilla, le ruego, por favor, que concluya.

El señor MARTÍNEZ SEVILLA: Concluyo, señor Presidente.

Por ello, señorías, solicito, en nombre de Izquierda Unida, su voto positivo para la creación de esta comisión de investigación sobre los GAL.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, tiene la palabra el Senador Travieso Darias.

El señor TRAVIESO DARIAS: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, mi Grupo va a votar afirmativamente la creación de esta comisión de investigación por coherencia y convencimiento, como ya hicimos en el Congreso de los Diputados y como han manifestado públicamente los órganos y la dirección de Coalición Canaria.

Coalición Canaria no ha firmado la solicitud de creación de esta comisión investigadora porque entiende que existen otras prioridades en este momento final de la presente legislatura, pero no puede dejar de votarla a favor, ya que nuestra línea es la de no oponernos a las comisiones de investigación, en cuya petición exista un mínimo de racionalidad, porque la democracia es claridad y no oscurantismo.

El pueblo español, en nombre de quien se gobierna, demanda hoy clarificar lo no conocido del tema GAL en sus aspectos políticos. Sería frustrante para una parte importante de los ciudadanos que sus representantes impidieran la clarificación de un asunto como éste. En un sistema democrático es importante despejar las dudas que se puedan derivar de las acciones de Gobierno y en este momento nos corresponde demostrar que no hay cuestiones de Estado más importantes que la propia democracia y que la ética social no debe estar minada por comportamientos individuales o colectivos al margen del Estado de Derecho.

Esta comisión de investigación está amparada en el artículo 76 de la Constitución española para profundizar ex-

clusivamente en las posibles responsabilidades políticas, si las hubiere, sin vincular ni afectar a las resoluciones judiciales, por lo que a la inversa no puede afectar al Parlamento que existan causas judiciales abiertas para ejercer su derecho al control político.

Coalición Canaria cree firmemente que toda investigación honesta refuerza las instituciones y la que hoy se solicita tiene por exclusiva finalidad el que se aclaren de forma definitiva las posibles sospechas en torno a la participación de responsables políticos en la trama del GAL, con el fin de poder tener plena legitimidad moral en la lucha contra la violencia, el terrorismo y la corrupción. Creemos que el Gobierno debería ser el primer interesado en que se aclarara políticamente este asunto.

Si hoy el Senado aprueba esta Comisión de Investigación, como esperamos, nuestro grupo político acudirá a ella sin ideas preconcebidas a estudiar los comportamientos de los dirigentes implicados, deseando ardientemente concretar las posibles responsabilidades políticas a que hubiere lugar o liberarlos definitivamente de toda sospecha. No estamos dispuestos a que se desvíen los objetivos intentando crispar aún más la vida política y social del país con fines o intereses partidistas y electoralistas. Nos negamos a maniobras que persigan otros fines espurios y a que el trabajo de la Comisión se convierta en inquisitorial. Velaremos porque la objetividad y la búsqueda de la verdad sea la única luz que guíe el funcionamiento de esa comisión. Si el funcionamiento de la comisión se desviase hacia otros derroteros, lo denunciaríamos públicamente.

Somos conscientes de que en este debate otros nos han convertido interesadamente en el centro de atención y se han permitido jugar al pim-pam-pum con nosotros para intentar purgar sus propios pecados. Nosotros vamos por delante con nuestro compromiso de honor, no nos hace falta controlarnos ni autovigilarnos, como hacen otros grupos. No intentamos ponernos la venda antes de la herida. No fuimos nosotros precisamente quienes en el Congreso votamos en contra de lo que dijimos que íbamos a votar, ni lo vamos a hacer en este momento en el Senado.

Vamos a votar que sí, porque libremente lo hemos decidido, y aunque se nos intenta hacer, no cedemos ante ningún tipo de chantaje, del signo que sea, y nuestra forma de hacer política no está sometida a esas cuestiones ni tampoco actuamos de forma pedigrüña. Nuestros grupos parlamentarios y nuestro Gobierno autonómico no viene a Madrid a pedir favores, sino para luchar y exigir lo que entendemos justo y razonable para nuestra Comunidad Autónoma y para los intereses generales. Nos podremos equivocar o no, pero no venimos a Madrid a poner la mano; eso lo dejamos para otros. Nosotros venimos a defender los intereses de Canarias y de los canarios.

El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado votará que sí a esta Comisión de Investigación, sea cual sea la forma de votación, secreta o pública. No tenemos el problema que tienen otros, pero queremos dejar claro que votaremos a favor de que la votación sea pública y, por tanto, votaremos en contra de que sea secreta, porque entendemos que en este caso el ciudadano debe saber con claridad lo que ha votado su representante, porque se

trata de una acción de control sobre miembros del Ejecutivo.

A quien de forma velada y chusca intenta acusarnos de potenciales traidores tenemos que decirle que se mire su propio ombligo, que aunque nosotros no estamos militarizados ni funcionamos a toque de pito, como sí hacen algunos, nuestra palabra y nuestro honor son nuestro mejor garante. Nosotros, por lo menos, discutimos y aceptamos las discrepancias sin necesidad de utilizar el hacha.

Para finalizar, señorías, Coalición Canaria va a votar que sí con rotundidad y en bloque, esperando que la Comisión sea rápida y breve, sin que su actividad se convierta en una cacería de fantasmas, despejando con nitidez, en sentido positivo o negativo, la preocupación que hoy tiene la sociedad española.

Nada más y muchas gracias. (*Aplausos.*)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

El Senador San Cebrián tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.

El señor SANZ CEBRIÁN: Gracias, señor Presidente, y gracias muy especialmente por haber intentado evitar la usurpación de tiempo de la que hemos sido objeto.

Inicialmente, deseamos utilizar este turno con dos finalidades. En primer lugar, demostrar o, mejor, abundar en el dato de que la existencia de esta Comisión es totalmente compatible con las actuaciones judiciales que versan sobre la exigencia de responsabilidad penal a los imputados por haber organizado la llamada trama de los GAL. Y, en segundo lugar, que, además, dicha Comisión es oportuna para tal objetivo.

Por ello, hay que reconocer que tanto la Constitución como el Reglamento de esta Cámara —y hay que decirlo bien claro— permiten la creación de una Comisión de Investigación sin perjuicio de la existencia de actuaciones judiciales que puedan incidir sobre el mismo tema. Y tales previsiones no sólo constituyen el derecho positivo, es decir, el derecho vigente que informa esta cuestión, puesto que, además, se compadecen con la más estricta lógica, al distinguir entre la exigencia de responsabilidades políticas y responsabilidades penales, extremo que demostraremos que no es una cuestión baladí, puesto que no siempre van unidas unas a otras.

De otra parte, convendrán ustedes conmigo, señorías, en que existe un rigor formal inherente a las garantías judiciales y al derecho de defensa que provoca, como elemento negativo, que en numerosos supuestos la aplicación de eximentes, de atenuantes e, incluso, de figuras como la prescripción, que planea insistentemente sobre el caso de los GAL, puede llevar a concluir el proceso penal con la absolución o con la imposición de sanciones puramente simbólicas, que, desde luego, hay que decir que, como demócratas, acataríamos desde este momento.

Por contra, la exigencia de responsabilidades políticas y hasta históricas, como también se ha dicho, por la creación del GAL y por sus subsiguientes actuaciones, a través de la Comisión de Investigación, supera los citados obstáculos formales y evita la comisión de un nuevo fraude a los ciu-

dadanos, a las expectativas de la población, al hacer patente el comportamiento, presuntamente doloso, culposo o negligente de algunos gestos públicos implicados. A mayor abundamiento, ha quedado patente, a nuestro entender, la renuncia del Gobierno a facilitar documentos acerca del denominado «caso Monbar», lo que evidencia —como digo, según nuestro criterio— el largo y tortuoso camino que ha de seguir la investigación judicial frente a la agilidad que necesariamente, y sin perjuicio de las debidas garantías, debe ofrecer la Comisión Parlamentaria.

Otro argumento que se ha utilizado en contra de la Comisión es la brevedad de su existencia —también se ha alegado por alguno de mis antecesores en el uso de la palabra— porque existe una previsible convocatoria de elecciones generales para el mes de marzo. Que yo sepa, no sería ésta la primera vez que un Gobierno incumpla una promesa y, en particular, que el Gobierno socialista incumpliese una promesa si no se produjere tal convocatoria. Además, si la humanidad en general, llevada por tal estéril inmovilismo, hubiera aplazado «sine die» sus obras, hoy, posiblemente, nos encontraríamos con un mundo muy distinto al actual y, por supuesto, que no sería mejor.

Señorías, como conclusión de este primer apartado, esta Comisión que proponemos es compatible, por lo tanto, con las actuaciones judiciales. Y también es oportuna en el tiempo, porque siempre es buen momento para exigir responsabilidades históricas a quienes pretendieron burlar la democracia a través del terrorismo de Estado.

También convendrán conmigo sus señorías en que uno de los obstáculos para la paz en el País Vasco ha sido —es— además del terrorismo asesino de ETA, la creación de los llamados Grupos Antiterroristas de Liberación. Cada vez es menos concebible una sociedad vasca reconciliada y en paz si no se aclara, de forma satisfactoria y justa, la trama de ese terrorismo de Estado que recibió el nombre de GAL. La depuración, no sólo desde el punto de vista penal, sino también político, de todas las responsabilidades en las que hubiera podido incurrir tanto miembros del Gobierno como de las Fuerzas de Seguridad del Estado es la mínima exigencia democrática de un Estado que se proclama de Derecho. Y este parlamento, que representa la voluntad popular, debe hacer cumplir dicha exigencia democrática.

Señorías, no podemos seguir poniéndonos la venda sobre los ojos. El GAL ha existido. Y ha dejado una secuela de 28 asesinatos, secuestros, extorsiones, desapariciones. Dos altos dirigentes socialistas han confesado ser sus organizadores, y han dicho que por orden del presidente del gobierno y del entonces señor Ministro del Interior, Barriónuevo. No podemos ignorar que un jefe de operaciones del Cesid ha atestiguado que cursó información al Presidente del Gobierno sobre la planificación de los crímenes. Habrá que demostrarlo, cierto es.

Por lo tanto, señorías, creemos que el GAL no es obra de unos funcionarios. Ni tan siquiera de unos mercenarios, lo cual hubiera sido suficientemente grave. El GAL es producto de una decisión política de ciertos miembros del Gobierno; no sabemos si de todos. Señorías, esto que digo es tan obvio, tan evidente, que parece innecesario. Pero es tan

grave, al mismo tiempo, que precisa ser repetido tantas veces como sea menester. Lo mismo que es preciso decir que con nuestra indiferencia, con nuestra falta de sensibilidad, no podemos alimentar a esos gusanos que intentan liquidar a todo un país, a todo un pueblo como es el pueblo vasco. Y esto es tan terrible, tan trascendente, que nos exige, siempre respetando la suprema libertad de elegir que a todos ustedes les reconocemos, un esfuerzo para convencer. Y, en este orden de cosas, creo que es suficientemente significativo que desde posiciones políticas tan dispares como representamos el Grupo Parlamentario popular, el Grupo Parlamentario Mixto y el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, nos hayamos unido en un tema de Estado, insisto, tan fundamental como es la propia transparencia del sistema democrático.

Espero y deseo que éste sea un primer dato para la reflexión. Y que no lo despejen sus señorías con el simple y permítanme que le llame, torpe argumento de la conjura contra el Gobierno, porque la realidad de las luctuosas consecuencias del GAL no se puede tapar con la burda excusa de la conspiración.

Señorías, además está en juego el respeto a los derechos humanos, singularmente el derecho a la vida y el derecho a la paz, ambos violados por quienes decidieron combatir la muerte con la propia muerte, el terrorismo con el terrorismo, siguiendo en apariencia la vía más cómoda —la de medir al delincuente con la misma vara—, pues es bien sabido que defender la democracia es más difícil que defender una dictadura, sin que ello suponga por nuestra parte conformarnos con la violencia, la extorsión o el asesinato. Y esto que digo, señorías, lo digo con la misma convicción que lo manifestó Willy Brant en su día: Sólo nos puede derrotar la resignación, nunca la dificultad.

Quiero, señorías, y creo que queremos todos, que el Estado español sea un país europeo, en el que tengamos la seguridad de que se respeten los derechos humanos y en el que el individuo tenga garantizada su vida frente al poder del Estado. Me resisto a admitir que el hombre, como decía Burke, sea un mito de la ideología burguesa, o que la palabra hombre sea solamente una palabra que ceda ante la llamada razón suprema de Estado. Nos negamos, por lo tanto, a volver a la ley de la selva, a regresar al siglo III a.C., cuando Tucídides decía aquello de «Inter arma silent leges» en tiempos de guerra la ley no cuenta, vale todo. Por fortuna, los tiempos han cambiado y los derechos humanos y las libertades fundamentales —y reconozco que el Partido Socialista tiene su mérito en ello— son hoy patrimonio innato de todos los seres humanos, hasta de los delinquentes, hasta de los criminales.

De otra parte, y como he señalado al comienzo de esta intervención, el GAL es un obstáculo para la pacificación de Euskadi, hasta el punto de que entre los ciudadanos vascos existe el convencimiento generalizado de que el Estado de Derecho ha sido vulnerado grave y repetidamente desde las instancias políticas que más deberían velar por su respeto. En consecuencia, se cuestiona la legitimidad del Estado para hacer uso de su superioridad típica frente a los violentos, por lo que una buena parte de la sociedad vasca puede acabar sintiéndose inhibida e incapaz de identi-

carse y comprometerse con las instituciones del Estado de Derecho, cuya integridad y limpieza ética han quedado en entredicho.

Ante esta situación somos muchos los que nos planteamos que hay que hacer algo, y ese algo, aquí y ahora, señorías, es manifestar la voluntad de investigar la actuación de gobierno en relación con la creación de los GAL. Es lo menos que podemos hacer por Segundo Marey, por las víctimas de todas las violencias, por la defensa de la democracia y por nuestro futuro.

Ahora, si me lo permiten, quiero dirigirme muy especialmente a nuestros compañeros catalanes de Convergència i Unió, y lo voy a hacer con todo el respeto, y lo voy a hacer con todo el cariño que saben que les profeso. Me gustaría que os pusierais en nuestra posición y que imaginaseis que en lugar de haberse creado el GAL contra ETA se hubiera creado, por ejemplo, contra Terra Lliure. Me gustaría que imaginaseis que los creadores del GAL hubieran sembrado más de 27 muertos en Cataluña o sus alrededores, en lugar de en Euskadi. Me gustaría que sintieseis la lógica presión de los ciudadanos más directamente afectados como la sentimos nosotros. Entonces yo os pregunto: ¿cuál sería vuestro voto, compañeros?

No puedo olvidar tampoco que vuestro President, el Honorable Jordi Pujol, cuando compareció ante la Ponencia del Senado que estudia la reforma de la Constitución, y ante cuestiones que afectaban a Euskadi y que personalmente le formulé, literalmente me respondió, y consta en negro sobre blanco: Yo siempre digo lo que diga el PNV. Pues bien, en una cuestión que afecta directamente a Euskadi, el PNV, el partido Nacionalista Vasco, dice que se cree la Comisión sobre el GAL. Por lo tanto, compañeros de Convergència i Unió, esperamos vuestro voto a favor no sólo por solidaridad con el pueblo vasco, sino también por coherencia política, pues bien con el debido respeto os digo: no podéis seguir haciendo malabarismos dialécticos para explicar un inexplicable apoyo al Gobierno en este caso.

Señorías, yo ahora me dirijo a todo el hemiciclo —y me incluyo yo mismo, por supuesto—: ¿de qué lado estamos? La cuestión es muy sencilla, a alguien no le ha gustado que lo plantee así de simple: se está del lado de la justicia o se está del lado de los asesinos, sean éstos del signo que sean. Piénsenlo seriamente. Ustedes, señorías, aquí y ahora, con su voto no pueden escudarse en el escaso valor de su decisión; es suya y como nunca es tan trascendente.

De ustedes depende ahora señalar el tipo de país que queremos para nosotros y para nuestros hijos, si deseamos un Estado lustroso por fuera, pero con las cañerías reventadas por dentro, o bien un Estado limpio moral y éticamente.

La responsabilidad parlamentaria —obvio es decirlo— está en nuestras manos. Cuando concluya esta votación tendremos el país que realmente nos merecemos y a ello habremos contribuido decisivamente los aquí presentes. Por lo tanto, que Dios nos ilumine. *(Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)*

El señor PRESIDENTE: El Senador Ferrer i Roca tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

El señor FERRER I ROCA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, quizá lo oportuno sea contestar a la llamada del portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos al iniciar mi intervención, diciéndole, muy telegráficamente pero muy sentidamente, que nuestras convicciones y nuestra responsabilidad nos acompaña en cualquier escenario, en Euskadi, en Cataluña o en Japón.

Se nos propone hoy la creación de una comisión de investigación sobre los llamados Grupos Antiterroristas de Liberación que, durante su período de actividad, ocasionaron numerosos asesinatos y cometieron otros delitos también de grave significación, como el secuestro.

Señorías, idéntica iniciativa parlamentaria se produjo hace apenas unas semanas en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde fue rechazada.

Hoy se ha formulado esta propuesta en el Pleno del Senado y nuestro posicionamiento, el del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de *Convergència i Unió*, que se opuso en el Congreso de los Diputados a aquella iniciativa, volverá a ser el voto negativo a la propuesta de creación de aquella comisión de investigación, y por las mismas motivaciones.

Nuestras razones ayer y hoy eran y son las siguientes:

Primero, los presuntos delitos cometidos por los llamados Grupos Antiterroristas de Liberación constituyen un episodio que atenta al normal funcionamiento del Estado de Derecho y nos introduce en prácticas delictivas contrarias a la normal actuación de este Estado en defensa de la ley y el orden, que es de todos. Los graves hechos que se imputan a los llamados Grupos Antiterroristas de Liberación deben ser castigados con todo el peso de la ley.

Segundo, para tranquilidad de todos los ciudadanos, los sospechosos de haber incurrido en la ejecución de aquellos graves hechos están en manos de la justicia. Los hechos de los que se acusa al GAL no duermen en ningún desván perdidos, señorías, sino que están siendo objeto de una actuación por parte de los tribunales que están actuando sobre una cuestión compleja, delicada e importante.

Tercero, la propuesta que hoy se nos formula de creación de una comisión de investigación sobre los hechos de que se acusa al GAL no se corresponde con el actual momento procesal y creemos que podría significar una perturbación de éste. Con toda claridad y desde nuestro deseo de que los hechos se aclaren totalmente y se castigue a los culpables, creemos que quien debe investigar aquellos delitos a quien lo está haciendo y tiene nuestra más total confianza: los tribunales. La creación de esta comisión de investigación pudiera perturbar su actuación y quizá proporcionar a algunos de los acusados ocasión de entorpecer aquellas diligencias.

Estos razonamientos, señorías, son la postura habitual en el ámbito general europeo.

Antes he citado —y quiero volver a subrayarlo— un ejemplo, que es lo que ocurre en la legislación prevista en Francia, en donde el Reglamento de funcionamiento de la Asamblea del Senado, en su artículo 6.º dice —y leo textualmente—: «No puede ser creada una comisión de investigación sobre los hechos que hayan ocasionado diligencias

judiciales mientras estas diligencias estén en curso. Si una comisión ha sido ya creada, su misión deberá terminar desde el inicio de la información judicial relativa a los hechos sobre los cuales ella ha estado encargada de investigar.»

El Propio Tratado de Maastricht en su artículo 138 —y creo que para la ilustración de algunos Grupos es conveniente la lectura textual—, afirma lo siguiente: «En cumplimiento de sus cometidos y a petición de la cuarta parte de sus miembros, el Parlamento Europeo podrá constituir una Comisión temporal de Investigación para examinar, sin perjuicio de las competencias que el presente Tratado confiere a otros órganos e instituciones, alegaciones de infracción o de mala administración en la aplicación del Derecho comunitario, salvo» —y subrayo— «que de los hechos alegados esté conociendo un órgano jurisdiccional, hasta tanto concluya el procedimiento jurisdiccional.»

Cuarto. Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán de *Convergència i Unió* espera que los tribunales puedan continuar sus trabajos con la misma intensidad que lo vienen haciendo hasta el total esclarecimiento de los hechos, y por ello votaremos en contra de la creación de la Comisión que se nos propone.

Por todo ello, creemos que es oportuno reafirmar lo siguiente. Queremos que se investigue a fondo hasta las últimas consecuencias el GAL; deseamos que la justicia haga recaer sobre los culpables el peso de la ley, y por esta razón opinamos que los tribunales deben continuar su trabajo sin interferencias y absurdos obstáculos como el que representaría crear esta Comisión que hoy se nos propone. Hay un procedimiento abierto para esclarecer aquellos hechos, dejemos que se culmine. Abrir hoy una Comisión sería casi equivalente a dudar de su capacidad. No creemos que esta cuestión exija mayores consideraciones, pero sí queremos señalar como último comentario nuestra extrañeza ante el hecho de que alguno de los Grupos proponentes que acostumbra a autocondecorarse sistemáticamente como uno de los que mayor sentido de Estado demuestra en sus actuaciones, permítanos señalar, que con la presente propuesta manifiesta precisamente una orientación prioritariamente partidista; muy lejos de una adecuada conciencia de responsabilidad de Estado. (*Rumores.*)

Si, como estamos convencidos, a todos nos interesa esclarecer aquellos hechos, podemos estar seguros de que su solución está en las mejores manos. Si, por el contrario, lo que interesa a algunos es simplemente la algarabía, el ruido, para con cualquier pretexto erosionar al adversario político, entonces nosotros, el Grupo Catalán de *Convergència i Unió*, desde nuestra responsabilidad, nos oponemos con nuestros votos a que se frivolicé una cuestión sobre la que no nos interesa la pérdida de tiempo, sino la sentencia que recaiga sobre los culpables. Ésta es nuestra posición, que quizá que sea comprendida por aquellos a quienes todo esto parece hoy importarles poco.

Señorías, la cuestión del GAL es suficientemente grave como para que nadie pueda perturbar el trabajo que la justicia está haciendo en nombre de todos. Por ello reitero nuestro voto negativo a la propuesta que se nos hace.

Señorías, para terminar, esta mañana un comentario en un medio de comunicación calificaba esta iniciativa de

fuegos artificiales. Pues bien, señorías, éste es un asunto demasiado grave como para que tengan justificación unos fuegos artificiales. Los fuegos artificiales pueden hacerse en muchos lugares, en muchas situaciones; con el GAL, no; no jueguen con el GAL, es demasiado grave.

Muchas gracias, señor Presidente. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.*)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ferrer.

Tiene la palabra el Senador Bayona.

El señor BAYONA AZNAR: Señor Presidente, señorías, el Grupo Socialista ha venido a este debate a dar razones y a escucharlas. Las que hemos escuchado, debo decirlo, no nos han hecho cambiar el criterio de nuestro Grupo. En un turno de portavoces se trata de fijar criterio de Grupo; por lo tanto, en este turno trataré de resumir las razones que tenemos, pero no sin antes decirle al portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos que su partido gobierna en Euskadi con el Partido Socialista, y que yo no sé distinguir en esta Cámara y en esta votación quién está del lado de los terroristas. Creo que esas palabras sobran y, por lo tanto, podríamos continuar el debate en los términos en los que debe continuar. Nosotros nunca hemos dicho que algún terrorista fuera un patriota equivocado; nunca.

El Grupo Socialista se opone a la creación de esta Comisión porque no servirá para conocer la verdad. Y yo creo que ha quedado demostrado en todas las intervenciones que nadie cree que sirva para conocer la verdad mejor de lo que la puede conocer el Tribunal Supremo.

Una Comisión de investigación parlamentaria es positiva si se llega a un gran acuerdo entre los grupos parlamentarios, a un gran acuerdo sobre las conclusiones. Ahora bien, si se pretende hacer una simple trasposición de mayorías conyunturales, y en este caso no se sabe cuál va a ser el resultado de la votación; si se pretende que se sabe de antemano lo que se dice que se quiere investigar, entonces el resultado es el fracaso y sólo conduce al descrédito del Parlamento.

El Grupo Socialista Se opone porque, como ha quedado demostrado, perturbará el trabajo riguroso de los tribunales de justicia, cuando ya está avanzada la investigación y ya está conociendo el Tribunal Supremo. Las comisiones de investigación no deben mediatizar las actuaciones judiciales. La independencia del juez supone impedir, y son palabras de Óscar Alzaga en sus «Comentarios a la Constitución Española», que las decisiones políticas puedan presionar para que el fallo de la sentencia se incline hacia donde apetezca el que osa interferir en la independencia del juzgado. Y es absurdo, señorías, defender que el Parlamento considere probado algo que los jueces consideran sin probar. No puede haber dos verdades contradictorias sobre el mismo hecho. O es verdad la que establezca el Tribunal Supremo, o no lo es; mantener otra cosa choca con el principio lógico de no contradicción. Nosotros confiamos en la justicia. Confiamos en la justicia y estamos seguros

de que los tribunales sabrán resistir las enormes presiones que están padeciendo en estos días y a las que contribuyen también, lamentablemente, iniciativas como la de hoy.

El Grupo Socialista se opone a la creación de esta Comisión porque Izquierda Unida y el Partido Popular no buscan con ella la verdad, sino que preparan una auténtica operación de linchamiento de Felipe González. (*Varios Senadores de los escaños de la derecha: ¡Hala, hala!*) El Partido Popular quiere liquidar así al que consideran el último obstáculo para recuperar el poder. Y digo recuperar porque en el fondo cree que estos doce años de Gobierno socialista son un paréntesis en la historia de España y que debe volverse página. (*Aplausos en los escaños de la izquierda. Protestas en los de la derecha.*)

Y en esta operación de acoso y derribo cuenta con la ayuda inestimable de Izquierda Unida. Probablemente algún día, si el Partido Popular llega a gobernar, unos y otros, quizá por razones distintas, se arrepentirán de haber hecho cosas como la de hoy (*Rumores.*), porque al mismo tiempo otros personajes contra los que debería de estar esta Cámara sin ninguna ambigüedad, están dispuestos a utilizar todo tipo de mecanismos legales o fraudulentos para recuperar sus posiciones de privilegio, poder e influencia. (*Rumores.*)

El Grupo Socialista se opone a la creación de la Comisión porque entiende que la utilización electoralista de cuestiones tan graves impulsa y amplifica la estrategia procesal de los imputados tendentes a pasar la página del GAL y a lograr una ley de punto final. Así se comprueba cuando se dice que la exigencia de responsabilidad política empieza y termina en Felipe González y esta afirmación coincide con la defensa de alguno de los procesados.

El señor Santaella, abogado de Conde y Perote, fue el primero que escribió que la solución debía venir por la inculpación y posterior exoneración de culpas del Presidente del Gobierno. El señor Anguita ha dicho que la solución del GAL la tiene Aznar: «Estoy seguro —decía— de que hay insinuaciones, presiones y recomendaciones para que Aznar sea comprensivo con el caso GAL.» Entrevista publicada el 28 de agosto pasado. Yo me pregunto: ¿Cómo lo sabe tan seguro? ¿Y se han preguntado los señores de Izquierda Unida, cómo contribuye a esa estrategia su petición de crear esta Comisión hecha de la mano del Partido Popular? En el mismo semanario un empresario decía: «Con la fuerza que le daría un triunfo en las urnas, nadie reprocharía seriamente al señor Aznar que pasase página del GAL.» Estas coincidencias que producen estupor y espanto al sentido común obligan a mi Grupo, por sentido de la dignidad y de la responsabilidad política, a oponerse a servir de instrumento de esas estrategias.

Los ciudadanos españoles sí que de verdad quieren saber qué ha pasado. Sí que es cierto que quieren saber la verdad, toda la verdad sobre los GAL. Toda puede querer decir si alguno de los procesados pertenecía a algún otro grupo terrorista anterior al GAL con otras siglas, también puede querer decir eso. Toda la verdad quiere decir, incluida la verdad sobre García Damborenea y de su conversión al Partido Popular. Y tienen derecho a saberla, toda la verdad y nada más que la verdad; la de los hechos, no la de

las mentiras inventadas por alguno de los encausados para defenderse.

Los ciudadanos tienen derecho a distinguir la verdad de las estrategias turbias. Una democracia sólida necesita un Gobierno capaz de resistir a los que acosan al Estado, pero también una oposición capaz de competir por ser alternativa y, al mismo tiempo, capaz de cooperar en lo fundamental, una oposición que resista firmemente a todo ese cortejo de financieros estafadores, personajes sórdidos y siniestros, para que no sean aquéllos los dueños y rectores de la política española, al margen de quién gane las elecciones y presida el próximo gobierno de España. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista. Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

Por último, señor Presidente, señorías, el Grupo Socialista se opone a la creación de esta comisión porque no quiere contribuir, ni por asomo, a dar alas a los violentos. Hay momentos en los que los demócratas se unen, por encima de las discrepancias políticas y de los intereses de partido. Desgraciadamente, en estos años ha habido varios momentos en que los demócratas, todos, hemos tenido que dejar aparte diferencias para defender juntos la democracia y, a veces, para darnos fuerzas unos a otros y seguir adelante. Unas veces nos tocaba a unos, otras veces a otros.

Hoy falta aquí un Senador. Pregúntense cuál sería el sentido de su voto si estuviera presente; más aún, cuál es el resultado de la votación que desea. A muchos de los Senadores que van a votar que sí les repugnaría votar lo mismo que él. Pregúntense si no ha venido porque así es más fácil que salgo lo que le conviene. (*Aplausos en los escaños del Grupo Socialista.*)

El señor PRESIDENTE: Solicito autorización de la Cámara para proseguir, transcurridas cinco horas. (*Asentimiento.*)

Gracias.

Tiene la palabra el Senador Acebes.

El señor ACEBES PANIAGUA: Señor Presidente, señorías, señor Bayona, por las primeras referencias de su primer discurso, lo que a usted le pasa, como a su Grupo —y, quizás, después de tanto tiempo hasta pueda ser comprensible— es que no han asumido no ser el primer Grupo de la Cámara. Pero mientras que el Grupo Parlamentario Socialista ha sido mayoritario esta Cámara ha estado adornada y desprestigiada. (*Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*) Nosotros nos sentimos absolutamente orgullosos y vamos a intentar, a diferencia de lo que han hecho ustedes con esta Cámara, que la vida parlamentaria española pivote en torno al Congreso y al Senado. Vamos a cumplir nuestro cometido sin arrogancia y sin prepotencia, pero orgullosos de representar y servir a los españoles desde un trabajo en el Senado útil. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

Señor Bayona, qué triste papel le ha tocado hacer hoy. Usted ha venido aquí a hacer un mitin. Yo he intentado hacer un discurso riguroso, dirigido a la sociedad; usted sólo a las filas del Partido Socialista. No habrá encontrado en

mi discurso una sola línea que suponga una descalificación. En su discurso no hemos encontrado una sola línea que no suponga una descalificación. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular. Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario Popular: «Muy bien, muy bien.»*)

Dése cuenta: ha utilizado el 90 por ciento de su discurso al Partido Popular y a su Presidente, y sólo un diez por ciento al tema del GAL. Nos ha echado la culpa del tema del GAL a todos, al Partido Popular primero, a la prensa, a hipotéticos poderes, a todos menos a los que están inculcados, a los que gobernaban, a los socialistas, a los socialistas que se llevaban el dinero de los fondos reservados... (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.—Un señor Senador del Grupo Parlamentario Socialista pronuncia unas palabras que no se perciben.*)... y lo utilizaban en sus regalos, dándoselo a los afines, todos socialistas, incluido el señor Damborenea. El señor Damborenea era afiliado de ustedes, compañero de ustedes, dirigente de ustedes y elegido sólo y exclusivamente por ustedes. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.—Un señor Senador del Grupo Parlamentario Socialista: «¡Pero pide el voto para los otros!»*)

Todas las justificaciones han sido tan pobres e inconsistentes, que al final se han resumido en una: no tendremos tiempo. Bien es verdad que ha hecho usted alguna justificación jurídica más, pero después de su famosa frase en la que dice que el Partido Socialista, que el señor González ya está absuelto porque ha pasado por tres elecciones y ha ganado tres elecciones... (*Fuertes rumores desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*), tan desafortunada frase, que titula un prestigioso periódico...

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor ACEBES PANIAGUA: ... tan desafortunada frase, que es todo lo contrario no sólo al sentido jurídico sino al sentido común y al sentido de la justicia y que podía dar para hacer muchas críticas, espero que de la seriedad de este debate se entienda que no voy a hacer sangre de ello.

Por ello, contestaré a su único argumento que, como comprenderán y como verán, no resiste el mínimo análisis riguroso.

Dicen que no tienen tiempo, que no va a haber tiempo, y me parece que los socios de Convergencia i Unió decían prácticamente lo mismo, que esto era una operación sola y exclusivamente política porque no había tiempo.

Señorías, por aquellos que no conozcan el Reglamento de esta Cámara, por aquellos que no conozcan la Constitución española diré que esta Cámara para sus trabajos, para el trabajo más importante, el trabajo legislativo, tiene un plazo máximo de dos meses. Para trabajos tan importantes como el Código Penal no pueden transcurrir más allá de dos meses. Será superior a tres meses, si esta Cámara lo decide, el tiempo que tengamos para poder investigar a los GAL.

Tenemos —y se ha hecho de modo riguroso el trabajo— más de 50 días hábiles; a cuatro o cinco compare-

cencias por día, en 30 días podríamos tener más de 120 compareencias. *(Fuertes rumores y risas desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)*

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor ACEBES PANIAGUA: Ninguno de ustedes ha hecho estos números.

^ No se rían porque no han hecho ustedes los números. ¡Si lo que estoy tratando es ser riguroso, justo lo contrario de lo que han hecho ustedes! *(Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.—Fuertes aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)* Aún nos quedarían 20 días para redactar las conclusiones, y de la capacidad de sus señorías estoy completamente seguro que en 20 días obtendríamos unas magníficas conclusiones que poder mostrar a la sociedad *(Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)*, a los ciudadanos españoles que ustedes y nosotros representamos.

Por ello, ¿verdad que tenía razón cuando decía que su único argumento no resiste el mínimo análisis riguroso? *(Fuertes rumores.)*

Por eso, señorías, hoy van a votar ustedes en contra de que los españoles conozcan lo ocurrido con el GAL. *(Fuertes rumores.—Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)* Ustedes van a tratar de impedirlo.

No se rían porque no tiene ninguna gracia, ninguna. *(Risas.)*

Eso no lo haría nadie que no tuviera algo que ocultar. No impediría que se investigara. Sólo quien tiene algo que ocultar tiene miedo a la investigación, y ustedes tienen miedo a la investigación y nos lo han demostrado. *(Fuertes y prolongados aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)*

El GAL, señores socialistas, señores de Convergència i Unió, ha supuesto un grave atentado, quizá uno de los más graves atentados al Estado de Derecho en España. El que hace lo posible para encubrirlo, por ocultarlo, señorías, también es culpable. *(Fuertes y prolongados aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.—Rumores.—El señor Ferrer i Roca pide la palabra.)*

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Ferrer.

El señor FERRER I ROCA: Gracias, señor Presidente. Es para puntualizar una expresión...

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por alusiones.

El señor FERRER I ROCA: Es para puntualizar una expresión de la intervención del Senador Acebes. Me parece haberle oído que se ha referido a nosotros diciendo que había afirmado en la tribuna que no había tiempo. En ningún momento he dicho esto. He relatado una serie de razones por las cuales creo que esta Comisión perturbará la acción de la justicia, y esto es lo único que nos preocupaba y nos preocupa. *(El señor Bayona Aznar pide la palabra.)*

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Bayona.

El señor BAYONA AZNAR: Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, quiero decir que respecto a unas supuestas declaraciones mías en esa entrevista, léanla, en ningún momento pronuncié yo, ni está escrito poniendo en boca más la palabra «absolver», en ningún momento. Me da la impresión de que en este turno de portavoces han intentado hacer más bien propaganda política para interferir en un proceso judicial. Eso es lo que queremos evitar porque en el turno... *(Rumores.)*

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego un poco de tolerancia. Vamos a escuchar los argumentos.

Silencio, por favor.

El señor BAYONA AZNAR: En el turno de portavoces, señor Presidente, he dado seis argumentos, y por seis veces he dicho: el Grupo Parlamentario Socialista se opone por esto y por esto, pero en ningún momento por razones de tiempo, repito, seis argumentos que se resumen en uno: no interferir la acción de la justicia.

Termino, señor Presidente. De su réplica, el único argumento es García Damborenea. No cabía en nuestro proyecto, ustedes lo acogieron en el suyo. *(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.—El señor Martínez Sevilla pide la palabra.)*

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martínez Sevilla.

El señor MARTÍNEZ SEVILLA: Por el artículo 87, señor Presidente.

He creído escuchar de las palabras del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que esta iniciativa tenía como objetivo presionar a los tribunales. Creo que en la intervención que he oído aquí esta tarde se ha puesto un claro énfasis en una defensa que debe ser fundamental en democracia: la división de poderes. Esa defensa que reivindica Montesquieu como clave fundamental de la democracia hace que este Parlamento no sólo tenga derecho sino más que razones fundadas para seguir esa investigación. Aquellos que no han reconocido a Montesquieu, aquellos que han pretendido tener un Parlamento domesticado, o aquellos que desde otras instancias han pretendido ejercer otras presiones, son probablemente los que sepan mucho acerca de presión a otras instancias judiciales, a otras instancias de otro tipo, desde luego no este Parlamento como órgano soberano y como órgano independiente...

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Martínez Sevilla.

El señor MARTÍNEZ SEVILLA: Señor Presidente, medio minuto para terminar. *(Rumores.)*

El señor PRESIDENTE: Senador Martínez Sevilla, me pide la palabra cuando no le corresponde y está utilizando usted más tiempo del debido.

El señor MARTÍNEZ SEVILLA: Señor Presidente, creo que me corresponde. He pedido la palabra al igual que los otros portavoces de los Grupos, por el artículo 87, y creo que he sido aludido... (*Rumores.*)

El señor PRESIDENTE: Se hace entender usted perfectamente.

Termine, por favor. (*Rumores.*)

Ruego silencio.

El señor MARTÍNEZ SEVILLA: Termino en treinta segundos.

He creído escuchar que Izquierda Unida y el Partido Popular pretenden un linchamiento del Gobierno. Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir: desde hace once años nos guían intenciones mucho más nobles. Lo que nos guía es el esclarecimiento de unos hechos que entendemos absolutamente deplorables, lo vamos a exigir ahora y lo exigiremos con cualquier Gobierno. (*El señor Acebes Paniagua pide la palabra.—Rumores.*)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Acebes.

El señor ACEBES PANIAGUA: Muchas gracias, señor Presidente.

Intervendré con toda brevedad y por las referencias realizadas.

En primer lugar, al portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió he de manifestarle que lo que yo manifestaba no era porque su señoría hubiese dicho que no tenía tiempo, sino que como no podría llevarse a cabo la investigación por distintas causas, era en su contestación a que se debía a motivos exclusivamente políticos por lo que presentábamos esta Comisión. Es la referencia que a ustedes les hacía.

Al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Bayona, le diré que yo puedo entender muchas cosas, pero que ni siquiera sepa lo que ha leído en su primer discurso, créame que es suficientemente grave. En su primera intervención ha dicho: esta Comisión no tendrá tiempo —y lo podremos ver y comprobar en el «Diario de Sesiones»—. No hay tiempo porque va a haber elecciones en marzo —me parece que ha dicho textualmente— y... (*Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*) (Pidan la palabra y déjenme terminar)... es el único argumento al que yo le he rebatido. Repito que está en el «Diario de Sesiones» y era su único argumento.

Finalmente quiero decir que yo no he traído como protagonista a Damborenea a este hemiciclo, no le he traído a este Parlamento, señores socialistas. Eso es lo que ustedes no han entendido. Lo triste de esto es que nosotros hemos pretendido traer de protagonistas al Estado de Derecho y a la democracia. (*Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*) Ustedes, tristemente,

señores socialistas, no han entendido nada; no han entendido nada.

Muchas gracias, señor Presidente. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Se va a proceder a la votación. A este respecto informo a sus señorías que se ha presentado un escrito cuyo primer firmante es el portavoz socialista, don Bernardo Bayona Aznar, firmado por 50 Senadores, al amparo del artículo 97 del Reglamento, solicitando votación nominal secreta. Asimismo, otro escrito cuyo primer firmante es el portavoz del Grupo Popular, don Ángel Jesús Acebes Paniagua y firmado por 51 Senadores, al amparo del artículo 96.1 del Reglamento, ha presentado una solicitud de votación nominal pública a la que, además, se han adherido cinco Senadores. En consecuencia, al existir solicitudes contradictorias para que la votación sea pública o secreta, resulta de aplicación el artículo 98 del Reglamento de la Cámara, conforme al cual debe someterse previamente a votación, como cuestión incidental, el procedimiento que deba aplicarse.

La Mesa en la reunión que al efecto ha celebrado esta mañana ha adoptado el acuerdo de que esta primera votación se va a efectuar por el sistema electrónico en tres tandas: en la primera se manifestarán los que estén a favor de la primera opción presentada, es decir, aquella firmada por el Senador Bayona que solicita votación secreta. En la segunda tanda de votaciones votarán aquellos que estén a favor de la segunda opción presentada, la firmada por el Senador Acebes Paniagua que propone que la votación sea nominal y pública. Y en una tercera tanda se manifestarán los que se abstienen. Pero para que sus señorías puedan efectuar correctamente la opción de voto que vayan a ejercer lo que he de señalar es que, primero, el tiempo para efectuar la votación se ha ampliado a 30 segundos. Si cualquiera de sus señorías tuviera duda sobre el uso del sistema electrónico de votación, soliciten a la Presidencia de inmediato que suspenda la votación para que todos sin error puedan efectuarlo a conciencia. Segundo, en cada una de las tres tandas se votará con la tecla correspondiente al sí, tanto la que pide la votación secreta, como la que pide la votación pública, como aquellos miembros de la Cámara que se vayan a abstener. Tercero, por lo tanto, cada una de sus señorías sólo podrá emitir una vez el voto. No será posible el doble voto, puesto que el sistema de ordenadores nos lo controla y quedará declarado nulo previa consulta a los señores secretarios de la Mesa.

Creo que con estas disposiciones, y si hubiera algún error al respecto (*Rumores.*), ruego que hagan llegar a la Presidencia cualquier duda para que, efectivamente, pueda efectuarse la votación de manera correcta. ¿Alguna duda? (*El señor Sanz Cebrián pide la palabra.*)

Tiene su señoría la palabra.

El señor SANZ CEBRIÁN: Señor Presidente de todos es sabido, y creo que no existe obligación de citar precepto reglamentario alguno, que en la ordenación de este debate, preceptivamente, debe ser oída la Junta de Portavoces. Esta decisión de la Mesa ha prescindido del criterio de ésta

y, por lo tanto, pido formalmente que se suspenda la sesión y se oiga a la Junta de Portavoces.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sanz Cebrián.

La Junta de portavoces fue convocada al respecto y fue informada de que, en efecto, la Mesa iba a disponer en lo concerniente al artículo 98, que resuelve las, entonces, dos posibles votaciones contradictorias y, lógicamente, la información de la que podría disponer el señor portavoz es exactamente la misma información de la que han dispuesto los miembros de la Mesa, que no es otra que nuestro propio Reglamento. En todo caso, con mucho gusto le podré informar en otra ocasión correctamente, en la medida de mis posibilidades, del uso y de la interpretación unánime que ha efectuado la Mesa para ordenar esas votaciones.

Gracias. *(El señor Sanz Cebrián pide la palabra.)*

Tiene la palabra el señor Sanz Cebrián.

El señor SANZ CEBRIÁN: Gracias, señor Presidente.

Lamento disentir, pero en la Junta de Portavoces no se habló exactamente sobre estas modalidades de votación. Pido que, de manera formal, se presente el acta de la Junta de Portavoces y se lea dónde se hace constar que estas fórmulas de votación que usted acaba de leer constan exactamente. Si consta en dicha acta me callo, y punto. Pero si no constan solicito formalmente que esta cuestión que acabo de plantear sea considerada y se someta a votación.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Senador San Cebrián, yo le haré llegar con mucho gusto al acta. La Junta de Portavoces estudió cómo iban a ser las fórmulas del debate, y en el momento en el que la Junta de Portavoces se reunió no se conocía, lógicamente, que iba a haber solicitudes contradictorias de votaciones. En todo caso, no cabe ningún tipo de interpretación. La Mesa no ha decidido nada improvisando, sino en estricto cumplimiento del Reglamento, amparada en la interpretación que de él hemos hecho y, además, en los precedentes. En todo caso, haré llegar a su señoría el acta, tal y como me lo solicita.

Gracias. *(El señor Sanz Cebrián pide la palabra.)*

Tiene la palabra el Senador San Cebrián.

El señor SANZ CEBRIÁN: Gracias, señor Presidente.

Lo que tengo que recordar, aunque constituya una obviedad, es que la Mesa ha cubierto una laguna que es que no se establecía el sistema de votación en cuanto que nos encontramos con una cuestión novedosa, y es que solamente se van a tomar a favor los votos que digan sí, y nunca se van a descontar los posibles votos en contra, con lo cual se está yendo en contra de los precedentes que ha habido siempre en las votaciones en esta Cámara, y esto puede inducir a errores.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Senador Sanz Cebrián, la Mesa no ha llenado ninguna laguna porque, de haberlo ad-

vertido alguno de sus miembros, habríamos convocado a la Mesa de la Comisión de Reglamento para que, de acuerdo con el nuestro, con nuestra norma de funcionamiento, hubiera rellenado esa laguna. Lo que ha hecho la Mesa es, a la vista de dos escritos contradictorios, hacer cumplir el Reglamento en lo preceptuado en el artículo 98. Y esto es tanto así, desmintiendo la aportación que acaba de hacer su señoría, que no podría ser sustanciada la cuestión contradictoria en una única votación porque si su señoría hace un esfuerzo de lógica se dará cuenta de que, por parte de la Mesa, no puede ser propuesta una única votación, porque no es una votación sobre una enmienda en la que se decida sí o no, sino que lo que va a hacer la Cámara es pronunciarse eligiendo el sistema de votación. Por lo tanto, hay que someter a votación las diferentes propuestas. *(El señor Sanz Cebrián pide la palabra.)*

Le concedo la palabra por última vez, señor Sanz Cebrián.

El señor SANZ CEBRIÁN: Muchas gracias, señor Presidente.

Le agradezco esta concesión de la palabra. Únicamente quería dejar constancia de mi protesta formal a los efectos legales pertinentes. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Sanz Cebrián.

Tiene la palabra el Senador Martínez Sevilla.

El señor MARTÍNEZ SEVILLA: Gracias.

Señor Presidente, sobre esta cuestión reglamentaria he creído escuchar también de sus palabras que cuando ayer martes se celebró la Junta de Portavoces no se conocía que iban a existir dos votaciones. Quiero recordar que no es así, señor Presidente. Se presentó el lunes por la tarde la solicitud de segunda votación pública y nominal y, por tanto, en la propia Junta de Portavoces se sabía ya que se iba a tener que decidir entre votación nominal y pública o nominal y secreta. Es más, este portavoz del Grupo parlamentario que le habla, lo recordará usted, señor Presidente, le preguntó explícitamente por el sistema de votación, a lo cual usted respondió: votación normal electrónica.

Por tanto, manifiesto también mi protesta para que conste en el «Diario de Sesiones» por entender que en la Junta de Portavoces debería haberse informado de este tema. No obstante, aceptamos, por supuesto, la decisión de la Mesa respecto del sistema de votación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Martínez Sevilla.

Reitero de nuevo ante su señoría y ante los demás miembros de la Cámara que la Mesa ha adoptado esta decisión después de una reflexión sobre las consecuencias de la aplicación del artículo 98. Tenemos la plena convicción de que éste es el procedimiento más correcto, el procedimiento lógico, el único que evita otro tipo de problemas que han sido advertidos, y lo hacemos con pleno convencimiento del ejercicio correcto en la toma de decisiones que

a esta Mesa le incumbe. En todo caso, constará en acta su protesta. Muchas gracias, señorías.

Yo espero que después de estas disquisiciones los señores Senadores y las señoras Senadoras recordarán lo que tienen que votar. La primera votación que se va a efectuar es la correspondiente a la solicitud de votación secreta que ha firmado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Senador Bayona, con otros 50 Senadores. Por lo tanto, aquellos miembros de la Cámara que efectúen ahora la votación ya no volverán a ejercer ese derecho puesto que será anulado su voto. Recuerdo a sus señorías que deben de votar en las tres, en las dos posteriores a ésta, siempre a favor, con el sí.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 128; a favor, 128.

El señor PRESIDENTE: El primer resultado es de 128 votos a favor de la opción de votación secreta.

Realizamos la segunda votación. Recuerdo a sus señorías que esta segunda votación es la que viene suscrita por don Ángel Acebes Paniagua con otros 55 Senadores y que propugna la votación de carácter público.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 127; a favor, 127.

El señor PRESIDENTE: El segundo resultado es de 127 votos.

Pasamos a la tercera votación. Ruego a las señorías que no hayan emitido todavía el voto, si es que existe alguna, que efectúen ahora la votación correspondiente.

Procedemos a la votación para aquellos que vayan a efectuarla en el sentido de abstención.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: El resultado de la votación es que no se ha emitido ningún voto, lo que se desprendía del quórum previsible en esta primera votación.

Por tanto, habiendo obtenido 128 votos la propuesta de votación nominal secreta, pasaremos a efectuar el llamamiento. *(Pausa.)*

Señorías, les ruego que tengan la bondad de prestarme unos breves instantes de atención.

Los señores Secretarios, que van a efectuar el seguimiento como reglamentariamente les corresponde en esta votación, van a proceder, a partir de la Senadora o Senador que por sorteo sea llamado en primer lugar, a efectuar el llamamiento.

El Senador Cañellas me indica que el número 180 será el primero en ser llamado. Ahora sabremos de quién se trata.

Ruego a sus señorías que para el correcto funcionamiento del sistema de votación den sus nombres a los señores Letrados que están situados al lado de los Secretarios Primero y Tercero y entren por detrás de la tribuna de oradores por el lado de la derecha y salgan por el lado de la izquierda. Yo presidiré la votación. Las puertas están cerradas y ruego a sus señorías que tengan suficiente paciencia.

Muchas gracias.

(Por los señores Secretarios Aguilar Belda y Cañellas Fons se procede al llamamiento de las señoras y de los señores Senadores, a partir del citado.)

(El Senador Morales Montero muestra a la Cámara su papeleta, en la que se lee claramente «SÍ».)

(Finalizado el llamamiento, el señor Presidente procede al escrutinio.)

Terminado el escrutinio, dijo:

El señor PRESIDENTE: Verificada la votación por los señores Secretarios y coincidente en sus cifras, el resultado es que queda aprobada por 128 votos a favor y 127 votos en contra.

Los Grupos parlamentarios facilitarán cuando se les comunique o de manera inmediata los Senadores que pasarán a integrarla. *(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado y del Grupo Parlamentario Mixto.)*

Solicito criterio a sus señorías. Estamos autorizados para proseguir el debate. *(Pausa.)*

Me indican los señores portavoces el criterio favorable a reanudar la sesión mañana a las diez.

Se suspende la sesión hasta las diez horas.

Eran las veintidós horas y quince minutos.

Imprime RIVADENEYRA, S. A. - MADRID

Cuesta de San Vicente, 28 y 36

Teléfono 547-23-00.-28008 Madrid

Depósito legal: M. 12.580 - 1961